Año: 2021 **Expediente: 14719/LXXVI**

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. LIC. ALBERTO CANTÚ SÁNCHEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PREVIO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL REMITE 43 ESCRITOS PRESENTADOS POR EL C. FELIPE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENEN INICIATIVAS DE REFORMA A DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA PENAL Y PROTECCIÓN CIVIL.

INICIADO EN SESIÓN: 22 de noviembre del 2021

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

44

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION A LA DENOMINACION DEL CAPITULO UNICO DEL TITULO DECIMO QUINTO BIS, ADICIONANDOSE UN CAPITULO 11 DENOMINADO VIOLENCIA POLITICA Y POR ADICION DEL ARTICULO 331 7 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON Y POR MODIFICACION A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislative del PRI y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2018; Expediente: 12027/LXXV

PROMOVENTE: DIP. ALEJANDRA LARAJVIAIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION A LA DENOMINACION DEL CAPITULO UNICO DEL TITULO DECIMO QUINTO BIS, ADICIONANDOSE UN CAPITULO 11 DENOMINADO VIOLENCIA POLITICA Y POR ADICION DEL ARTICULO 331 7 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON Y POR MODIFICACION A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

INICIADO EN SESIÓN: 16 de octubre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ESJ: Justicia y seguridad Púbica y Para la Igualdad de Genero

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos o también llamados Derechos Fundamentales, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estas prerrogativas se encuentran establecidas dentro de nuestro orden jurídico nacional, partiendo desde nuestra Constitución Política Federal, pero también en los tratados internacionales que

nuestro País ha suscrito, haciéndolo participe de estas acciones.

Ahora bien, estos derechos fundamentales han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, siendo en el ámbito académico donde surgió la clasificación que hace alusión a tres generaciones de derechos, en función del momento histórico en que surgieron. Los llamados derechos de primera generación son los agrupados como derechos civiles y políticos, los de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales; mientras que en la tercera generación están los derechos dirigidos a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes.

En tanto derechos, los derechos fundamentales definen tres clases principales de posiciones jurídicas subjetivas: "derechos a algo", libertades, y competencias. Los "derechos a algo" pueden referirse tanto a acciones positivas como negativas (abstenciones) por parte de los sujetos obligados (el Estado). Las libertades implican acciones u omisiones que no están prohibidas ni son obligatorias, es decir, que el titular decide si las realiza o las omite. Por último, las competencias implican la facultad de producir cambios en las situaciones jurídicas vigentes (Aiexy 1987).

Habiendo realizado esta breve recapitulación, quiero abordar los derechos políticos, los cuales son derechos humanos de primera generación y objeto de la presente iniciativa de reforma. Estos derechos políticos, llamados también derechos del ciudadano, son prerrogativas reconocidas exclusivamente a las personas con la calidad de ciudadanos precisamente, que facultan y aseguran su participación en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser votado. En palabras del jurista austriaco Hans Kelsen, los derechos políticos son aquellos que en esencia conceden a su titular una participación en la formación de la voluntad social; es decir, permite a los individuos participar en la estructuración política de la comunidad social de la que son parte.

Sobre lo anterior, el académico Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su ensayo "Los derechos políticos de los mexicanos. Un ensayo de sistematización", reflexiona que en materia de derechos políticos, en particular los de naturaleza electoral, abarcan típicamente los tres tipos de posiciones jurídicas subjetivas, sobre lo cual lo ejemplifica de la siguiente manera:

"El ejemplo más claro es el derecho a establecer asociaciones y partidos políticos. Por un lado, este derecho obliga al Estado tanto a acciones positivas como negativas. Así, el Estado debe crear un régimen jurídico específico e instituir los procedimientos adecuados que permitan y garanticen el ejercicio del derecho, pero también tiene la obligación de no obstaculizarlo de manera indebida. Por el otro, implica una libertad en la medida que el ciudadano puede afiliarse, o no, a una organización política, es decir, que no puede ser obligadO a ello."

Ahora bien, el derecho de participación en los asuntos políticos es el derecho político por excelencia; los demás derechos políticos pueden considerarse concretizaciones o modalidades de este derecho general. La Constitución de 1917 no establece explícitamente, como principio, un derecho general de esta naturaleza, sino que enumera, en su artículo 35, una serie de "prerrogativas del ciudadano", entre las cuales se encuentran los que llamamos propiamente derechos políticos, • pero en ellas, y en otras disposiciones constitucionales, puede considerarse implícito este derecho general.

Lamentablemente, hemos sido testigos como durante los últimos años y especialmente en el último proceso electoral podemos advertir que la violencia

política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres, que se deciden por participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones, esto ha generado que quienes se consideran desplazados de esos espacios que tradicionalmente les correspondían desempeñar a los hombres actúen ejerciendo violencia y simulación, ello pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues se lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por discriminación y acoso sexual.

Nuestras instituciones luchan porque se logre el principio de la verdadera igualdad jurídica entre los hombres y que los derechos humanos cumplan realmente con su alto cometido, que a la fecha, tratándose de los derechos políticos siguen siendo debatidos y cuestionados por la forma en que se ejercen y el peso que tienen para la vida democrática del país, teniendo una conceptualización demasiado amplia de los mismos.

La existencia del derecho de participación en asuntos políticos implica el deber correlativo del Estado de establecer y perfeccionar constantemente los mecanismos y procedimientos de dicha participación.

Por ello, anterior a esta propuesta se había presentado una iniciativa estableciendo como delito la violencia política, explotando un área de oportunidad que había quedado pendiente en pasadas legislaturas, mismas que podrían ser abordadas y explotadas una vez que fueran analizadas por todos los interesados, mismos que definirían el rumbo y el contexto que se legislaría sobre la violencia política.

En este contexto, encontramos indispensable la participación de las mujeres con ideas y propuestas, en la vida democrática del país para construir del dialogo político en cualquiera de los niveles de la administración pública, que en conjunto nos ayuden al mejoramiento de las instituciones, generando así, las respuestas necesarias a las problemáticas que se viven en la actualidad en la sociedad.

Bajo estas consideraciones estimamos necesario replantear el concepto de violencia política para realizar una concordancia armónica entre diversas leyes del estado que establecen el concepto de violencia política, formando una homogeneidad de conceptos que permitan una armonía de aplicación en la ley, evitando cualquier laguna y mala interpretación de los conceptos que en ella se establezcan. Adicionalmente se busca completar el tiempo por el cual pueda llevarse a cabo esta conducta y que la misma pueda tener una certeza jurídica.

Como órgano democrático y representativo de la ciudadanía, debemos brindar un proteccionismo de este sector de la sociedad, procurando que la misma establezca derechos que puedan hacerse valer una vez que encuentre que sus derechos son violentados o vulnerados, sostenemos que esta acción es una más que permitirá acotar el camino de la mujer y su incursión a la vida pública, abordando un tema más de la agenda que tiene el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO: Se reforma por modificación la denominación del Capitulo Único del Título Décimo Quinto Bis, adicionándose un Capítulo 11 Denominado Violencia Política y por adición del artículo 331 Bis 7del Código Penal Para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres, que se deciden por participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones, esto ha generado que quienes se consideran desplazados de esos espacios que tradicionalmente les correspondían desempeñar a los hombres actúen ejerciendo violencia y simulación, ello pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues se lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por discriminación y acoso sexual.

Nuestras instituciones luchan porque se logre el principio de la verdadera igualdad jurídica entre los hombres y que los derechos humanos cumplan realmente con su alto cometido, que a la fecha, tratándose de los derechos políticos siguen siendo debatidos y cuestionados por la forma en que se ejercen y el peso que tienen para la vida democrática del país, teniendo una conceptualización demasiado amplia de los mismos.

La existencia del derecho de participación en asuntos políticos implica el deber correlativo del Estado de establecer y perfeccionar constantemente los mecanismos y procedimientos de dicha participación.

Por ello, anterior a esta propuesta se había presentado una iniciativa estableciendo como delito la violencia política, explotando un área de oportunidad que había quedado pendiente en pasadas legislaturas, mismas que podrían ser abordadas y explotadas una vez que fueran analizadas por todos los interesados, mismos que definirían el rumbo y el contexto que se legislaría sobre la violencia política.

En este contexto, encontramos indispensable la participación de las mujeres con ideas y propuestas, en la vida democrática del país para construir del dialogo político en cualquiera de los niveles de la administración pública, que en conjunto nos ayuden al mejoramiento de las instituciones, generando así, las respuestas necesarias a las problemáticas que se viven en la actualidad en la sociedad.

Bajo estas consideraciones estimamos necesario replantear el concepto de violencia política para realizar una concordancia armónica entre diversas leyes del estado que establecen el concepto de violencia política, formando una homogeneidad de conceptos que permitan una armonía de aplicación en la ley, evitando cualquier laguna y mala interpretación de los conceptos que en ella se establezcan. Adicionalmente se busca completar el tiempo por el cual pueda llevarse a cabo esta conducta y que la misma pueda tener una certeza jurídica.

Como órgano democrático y representativo de la ciudadanía, debemos brindar un proteccionismo de este sector de la sociedad, procurando que la misma establezca derechos que puedan hacerse valer una vez que encuentre que sus derechos son violentados o vulnerados, sostenemos que esta acción es una más que permitirá acotar el camino de la mujer y su incursión a la vida pública, abordando un tema más de la agenda que tiene el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO: Se reforma por modificación la denominación del Capitulo Único del Título Décimo Quinto Bis, adicionándose un Capítulo 11 Denominado Violencia Política y por adición del artículo 331 Bis 7del Código Penal Para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS
DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIGNIDAD DE LA MUJER
CAPÍTULO 1
FEMINICIDIO

CAPÍTULO 11 VIOLENCIA POLITICA

Artículo 331 BIS 7.- Comete el delito de violencia política por razones de genero quien realice por sí o a través de terceros cualquier accione u omisión que impida, limite o restringa los derechos políticos electorales de las mujeres y acceso a un cargo público

A quien cometa este delito se le impondrá de seis meses a dos años de prisión de cincuenta a trecientos Unidades de Medida y Actualización.

SEGUNDO: Se reforma por modificación la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

VI. Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias personas o a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público, incluyendo las que se susciten, **previo, durante y después de un proceso electoral.**

Atentamente

Monterrey Nuevo león 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández.

[redacted]

19:06 h.s

082

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATAL Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL"

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente 12928/LXXV, presentada en sesión el 14 de Octubre del 2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Públicay dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2019 , Expediente: 12928/LXXV

PROMOVENTE: DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATAL Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL.

INICIADO EN SESIÓN: 14 de octubre del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, se entiende por Protección Civil "la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente."

La cultura y capacitación en materia de protección civil en las escuelas cobra aún mayor importancia tomando en cuenta que el bien jurídico protegido son nuestras niñas, niños y adolescentes, además de que de acuerdo a la Ley General de Educación, los contenidos de los planes y programas de estudio, ahora deben buscar el aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y los

riesgos inherentes a otros fenómenos naturales.

Tanto la Ley General de Educación, como la aún vigente Ley de Educación del Estado, ya contemplanacciones para la coordinación de las autoridades tanto educativas como de protección civil de los diversos niveles de gobierno en esta materia.

En los hechos, ya existen esfuerzos para apoyar a las escuelas de educación básica en su programa de protección civil. En el año 2018 se public la segunda edición de la Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil, la cual se convirtió en "una herramienta que brinda la información y las indicaciones básicas necesarias para que la comunidad escolar pueda contar con su Programa Escolar de Protección Civil y con ello darle a cada miembro un papel específico, considerando siempre que la mayor prioridad es salvaguardar la integridad de Niñas, Niños y Adolescentes; que dé orientaciones sobre qué hacer, cómo y cuándo hacerlo en caso de una emergencia, de igual forma, considera las responsabilidades que deberán asum1r las diferentes instancias involucradas en la protección civil. El papel de los educandos, educadores y los padres de familia, como parte del Sistema Educativo Nacional, es fundamental para lograr las sinergias necesarias para la prevención y protección en las comunidades escolares"

A pesar de la existencia de esta Guía, en la legislación de protección civil del Estado, que data del año de 1997, no se contempla este sistema de colaboración, ni se establece de manera expresa la obligación de las autoridades de protección civil de brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas en la elaboración, actualización e implementación del Programa Escolar de Protección Civil. Por ello es que proponemos que la Ley Estatal de Protección Civil se armonice con la Ley General de Educación y su correlativa local, a fin de que se determinen expresamente las obligaciones de las autoridades de protección civil para salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa.

Por los fundamentos y razonamientos antes vertidos, es que me permito someter a su consideración la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATAL y MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL EN

LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCION CIVIL.

Razon por la cual pido la aprobación del siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma por adición de un Capítulo VIII Bis Icon los artículos 50 Bis 8 a 50 Bis 10, todas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado para quedar como sigue:

CAPITULO VIII BISI,

DEL PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCION CIVIL
Artículo 50 Bis 8.- La Dirección Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Educación y con la participación de las Unidades Administrativas de Protección Civil de los Municipios, asesorarán y acompañarán a las escuelas de educación básica en la elaboración, actualización e implementación del Programa Escolar de Protección Civil.

Artículo 50 Bis 9.- El Programa Escolar de Protección Civil es el instrumento para contribuir a la seguridad de la comunidad escolar, a fin de estar en condiciones de identificar los riesgos a los que está expuesta, así como de adoptar las medidas preventivas y de organización necesarias para evitar posibles daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles efectos.

Artículo 50 Bis 10.- El Programa Escolar de Protección Civil deberá contener al menos los elementos siguientes:

I. Calendarización de actividades
Identificación de riesgos
Prevención y corrección de riesgos
Directorios e inventarios
Señalización
Medidas de seguridad
Equipo de seguridad
Capacitación
Difusión
Simulacros

Alertamiento

Plan de emergencia
Valoración de daños
Vuelta a la normalidad

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1de enero del año 2020.

Artículo Segundo.- La Ley de Egresos del Estado y los presupuestos de egresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2020, contemplarán la partidas necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

14:15
24 SEP 2021

083

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE LA FRACCION XXV RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTICULO 26 Y EL CAPITULO VII BIS DEL TITULO PRIMERO CON LOS ARTICULOS 37 BIS Y 37 BIS 1 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el articulo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto*

las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año:2019,Expediente: 12565/LXXV,

PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA E INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE LA FRACCION XXV RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTICULO 26 Y EL CAPITULO VII BIS DEL TITULO PRIMERO CON LOS ARTICULOS 37 BIS Y 37 BIS 1 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 27 de marzo del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al día de hoy se espera que en el momento de una emergencia la gente está preparada para hacer frente a la misma y pueda colaborar con la autoridad brindando información precisa, cierta y oportuna; que cada persona tenga conciencia de que la Protección

Civil tiene que estar presente en todo lugar y en la actividad diaria de la sociedad.

El crecimiento desordenado de la metrópoli, ocasionó que las zonas habitacionales crecieran alrededor de las industrias, siendo en la mayoría de los casos vecinos contiguos. Aunado a lo anterior, la proliferación de desarrollos de usos múltiples que lo mismo albergan restaurantes, oficinas, tiendas, cines, departamentos y centros sociales, aumentan los riesgos a que nos encontramos expuestos, haciendo prioritaria la necesidad de auto- protegernos.

Una forma de hacerlo es mediante la implementación del Programa Interno de Protección Civil que, aunque básicamente se trata de un manual, contiene los riesgos potenciales, las reglas y los recursos que deberán utilizarse para la atención de una emergencia en su fase temprana. Su importancia fundamental recae en que quienes integran la Unidad de Respuesta es personal de los establecimientos, previamente seleccionados y capacitados, formados como brigadistas en tareas de Evacuación, Combate de Incendios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate.

Surge aquí la pregunta que origina la presente reforma: ¿A quién confiarle nuestra vida y patrimonio? ¿Quién responderá por la integridad física de los brigadistas? ¿Cómo saber que nuestro Programa Interno funcionará? ¿Cómo verificar que los conocimientos y habilidades de quien nos instruye y capacita sean los idóneos

Actualmente, y de acuerdo con la información publicada en la página web de la Dirección de Protección Civil del Estado, existen 287 asesores externos y 340 Instructores, quienes son autorizados por la misma

Dirección sin que medie una certificación que acredite fehacientemente la capacidad y habilidades con que cuentan.

Dejar esta responsabilidad al arbitrio o criterio de la autoridad en turno no sólo es contrario al espíritu mismo de la Protección Civil, sino peligroso. Debemos contar con la certeza de que son los mejores hombres y mujeres quienes nos transmiten sus técnicas, métodos y juicios, evitando con esto generar un posible tráfico de influencias que favorezca sólo a unos cuantos, no siempre los más profesionales.

Es por ello que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, busca impulsar, fortalecer y promover en el ámbito de las atribuciones de este Poder Legislativo, las reglas tendientes a profesionalizar la consultoría en Protección Civil, atendiendo al nivel de riesgo de cada establecimiento ya sea por su actividad o su interacción con la naturaleza.
Por las razones anteriormente expuestas es que proponemos ante el Pleno de este H. Congreso del Estado el siguiente:

DECRETO

Único: Se adicionan la fracción XXV recorriéndose la subsecuente al artículo 26 y el Capítulo VII BIS del Título Primero con los artículos 37 BIS y 37 BIS 1 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 26.- La Dirección de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXIV..

XXV. Llevar el padrón y registro de los Terceros Acreditados; y

XXVI Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, Secretario General de Gobierno, la presente Ley, y otros ordenamientos legales, así como las que se determinen por acuerdos y resoluciones del Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León.

Capítulo VII BIS Terceros Acreditados

Artículo 37 BIS.- Son aquellas personas físicas o morales que prestan servicios profesionales en materia de protección civil. El registro como tercero acreditado puede ser en los rubros de Capacitación, Formulación de Programas Internos de Protección Civil, Formulación de Programas Especiales de Protección Civil y Estudios de Riesgo y Vulnerabilidad.

Artículo 37 BIS 1.- Los Terceros Acreditados serán autorizados para desarrollar las siguientes actividades:

I. Primer Nivel: Capacitación y Programas Internos de Protección Civil en inmuebles de bajo riesgo con aforo menor a 100 personas;

II. Segundo Nivel: Capacitación, Programas Internos de Protección Civil en inmuebles de mediano riesgo y Programas Especiales de Protección Civil, ambos con un aforo menor a 3000 personas;

III. Tercer Nivel: Capacitación, Programas Internos de Protección Civil en inmuebles de alto riesgo y Programas Especiales de Protección Civil, ambos con un aforo mayor a 3000 personas y Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad;

Para la obtención del registro, los Terceros Acreditados deberán contar con la certificación emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., según el nivel que corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO: El Estado y los Municipios tendrán un plazo de 90-noventa días naturales a partir de la publicación del presente decreto para que realicen las armonizaciones reglamentarias necesarias.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enriquez Hernández

[redacted]

13:53

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

195

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] o; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, POR MODIFICACION DEL ARTICULO 269 Y ADICION DE UN ARTICULO 267 BIS**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.

- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan*

actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2018 Expediente: 12364/LXXV

PROMOVENTE: DIP. DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA,
ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA AL CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, POR MODIFICACION DEL ARTICULO 269 Y ADICION DE UN ARTICULO 267 BIS.

INICIADO EN SESIÓN: 11 de diciembre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la UNICEF, la adolescencia es u'na época de cambios. Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Muchos son los factores que influyen en el forjamiento de la personalidad que tendrá un adolescente, para después convertirse en un adulto.

La adolescencia es una etapa donde ocurren la mayoría de los cambios psicosociales.

Erik Erikson, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX, definió que de los 13 a los 14 años, las partes del cerebro más vulnerables están madurando todavía. Todo esto se debe a que la mayoría de los jóvenes son muy sensibles en esta etapa a la presión

social y sé dejan afectar mucho por las opiniones de sus amigos y compañeros. Los expertos señalan que es una de las etapas más confusas.

A los 15 y 16 años, es más alto el deseo de tomar riesgos sin importar las consecuencias. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Leiden, en Holanda, las zonas relacionadas con la recompensa en el cerebro se disparan, por lo cual

es muy alta la mayoría de las respuestas de los jóvenes a la dopamina, neurotransmisor asociado con los sentimientos.

Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Sheffield Hallam, en Inglaterra, reveló que, a la edad de 17 años, varias áreas del cerebro todavía están en etapa de desarrollo hasta después de los 20 años, por lo que no puede considerarse que la totalidad de los jóvenes se encuentran completamente conscientes de los actos y decisiones que tomen.

En virtud de lo señalado con antelación, y considerando que los niños y adolescentes son el futuro de México, es que la de la voz estima necesario que nuestra legislación establezca leyes que garanticen el pleno ejercicio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, estableciendo las acciones necesarias para dicho propósito, previendo la vulneración de los derechos humanos y salvaguardando el libre desarrollo de los menores, tomando medidas, de conformidad con los principios establecidos en Nuestra Carga Magma como lo son: los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad, así como el sano desarrollo integral, la integridad personal y la salud.

Por otra parte, es de menester mencionar que, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del año 2015 a la fecha, han crecido los índices de menores de edad, que han sido víctimas de delitos sexuales.

Es importante traer a colación, que la violencia no es solamente física, si no también psicológica, como ya se mencionó con anterioridad en el presente ocurso, antes de los 18 años, las personas son más vulnerables en todos los sentidos, esto a razón de que su cerebro aún no ha madurado lo suficiente y es una etapa muy difícil, por lo que es fácil manipular y poder corromper la voluntad de los adolescentes, engañándoles con motivos que los hacen aceptar cometer actos que todavía no tienen capacidad de razonar al cien por ciento, haciendo que accedan a envolverse en situaciones que pueden creer que las traerán algún beneficio.

En agosto del año 2017, en Monterrey, Nuevo León, se registró un caso en la secundaria número 70 "Profesora María Baños Yáñez", donde una maestra fue acusada de sostener relaciones sexuales con un alumno, a cambio de pasar su materia. Un alumno de 14 años, alguien quien no estuvo plenamente consciente de sus actos, y que al ser intimidado por una persona que le lleva una cantidad de años de más, accedió a sostener relaciones sexuales, no siendo éste el único caso que se ha presentado en esta ciudad y en otras partes de la república. Por lo que la suscrita considera que el hecho de que se haya

tenido "voluntad" de parte de la víctima, sigue siendo un acto inocente, del que no se cuenta con la suficiente madurez para analizar la repercusiónde las consecuencias que se pudieran presentar y, únicamente, está siendo sometido a realizar

condicionadamente un acto, utilizándolo como medio para conseguir un fin.

Es así que, como se ha ido estableciendo en la presente iniciativa, todavía hasta los 20 años el cerebro sigue madurando, por lo que, evidentemente, a los 18 años, los jóvenes adolescentes no tienen completo uso de razón, por lo que es muy fácil que cualquier persona de edad más avanzada se aproveche y ejerza coacción en contra de estos menores, haciéndoles creer que tal vez algo les vaya resultar benéfico en cualquier aspecto, tanto social, laboral, civil o escolar.

La suscrita considera que, la persona mayor de edad que ejerce cualquier tipo de coacción para manipular la decisión de un menor, orillándole y envolviéndole para conseguir un beneficio de tipo sexual, indistintamente el sexo de la víctima o victimario, es una forma de violentar la integridad de cualquier persona que aún se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que aún son frágiles, por lo que justificar con el hecho de que la víctima haya querido, independientemente, de la promesa o engaño que se la haya realizado, es darle una margen de justificación al que cometió el ilícito.

En virtud de todo lo anterior, es que la de la voz, considera necesario que la relación sexual entre una persona mayor de edad con un menor, cualesquiera que sean las condiciones y por los motivos que existan dentro de cada situación, sean punibles, ya que de los 13 a los 17 años es un margen de tiempo en el que, según estudios, el adolescente aún es frágil mentalmente y aún no tiene plena y entera conciencia de los actos o decisiones que pueda tomar, por lo que verse envueltos en actos sexuales con alguien que si tiene plena conciencia de lo que está realizando, vulnera su integridad tanto física como psicológica, notándose claramente que la persona que domina es la que ya cuenta con el suficiente raciocinio, y aunque no

utilizando la fuerza física, impulsa diferentes formas de ejercer una presión sobre la persona que no tiene la suficiente madurez para razonar a profundidad lo que está realizando.

Por último, es importante agregar que, si bien existe la voluntad de la víctima para llevar a cabo la cópula, no hay que olvidar que la violencia también puede ser moral y psicológica, por lo que, para la suscrita, cualquier fin con el que se haya tenido la relación sexual, son solos excusas ya que si no hubiese existido alguna causa negativa o perjudicial, no se originaría la ofensa por parte de él o la agraviada.

Por los argumentos ya descritos, me permito someter a la consideración de éste pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - Se **adiciona** el artículo **267 Bis, se derogan** los artículos **262; 263 y 264** del **CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN,** para quedar como sigue:

ARTÍCULO 262.- Se deroga. ARTÍCULO 263.- Se deroga. ARTÍCULO 264.- Se deroga.

ARTÍCULO 267 Bis. - Se equipara a la violación y castigará como tal, a quien tenga cópula mediante seducción, manipulación, coacción o engaño, con persona menor de edad, que sea mayor de trece años. No se procederá contra el responsable de la presente conducta, sino por queja del menor, de quienes ejerzan la patria potestad, o a falta de éstos, de sus legítimos representantes.

SEGUNDO. -ARTÍCULO 269. -A las sanciones señaladas en

los Artículos 260, 266, 267, 267 Bis, 268, 271Bis 1 y 271 Bis 3, se aumentarán al doble de la que corresponda, cuando el responsable fuere alguno de los parientes consanguíneos, afines o civiles en línea recta sin límite de grado o en línea colateral hasta el cuarto grado, o las personas a que se refieren los artículos 287 Bis y 287 Bis 2; asimismo, perderá el derecho a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida.

(...)

(...)

TRANSITORIOS.

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

12:03hrs

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 146

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 144 BIS AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la*

Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año:2019 Expediente: 12586/LXXV

PROMOVENTE.- DIP. DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA.

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 144 BIS AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 03 de abril del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho no solo es una disciplina social sino también una filosofía de vida, porque entre otras cosas, nos invita a reflexionar sobre el comportamiento correcto e incorrecto de los funcionarios públicos y de quienes cumplen con el deber de hacer realidad la aplicación de espíritu de la ley, de igual manera observamos dentro de esta reflexión a las víctimas y sus familiares a los que se les pisotean sus garantías.

Lo anterior, permite tener una panorámica más realista, objetiva y con un gran sentido común de cómo ha quedado rezagado el derecho en su misión de ser equitativo e igualitario, por lo que me permito señalar algunas realidades que afecta a la sociedad.

Cuando acuden los familiares o representantes de las víctimas mortales de siniestros de tránsito, (especificando que no cuentan con representación legal privada o asesor jurídico), a interponer la denuncia correspondiente, la autoridad competente no siempre se les brinda la debida asesoría y además de esta situación, los abogados representantes de las compañías de seguros les argumentan falsamente que se les va a pagar lo justo pero con el paso del tiempo, con la carga de desgaste emocional, ignorancia jurídica y la falta apoyo de impartición de justicia, aceptan una indemnización injusta fuera de todo contexto legal.

o.\a

Las cifras son preocupantes, conforme estadísticas de la CONDUSEF en el año 2017 el 39.6%

los usuarios denunciaron la negativa de la aseguradora en el pago de la indemnización y el 8.4

% por la inconformidad con el tiempo para el pago de indemnización y falta de asesoría.

Igualmente sucede con las victimas que resultan lesionadas

dando como resultado diferentes tipos de incapacidades; como son la temporal, permanente parcial y permanente total, las cuales viven la misma experiencia ante engaños de mala fe de funcionarios que no cumplen con la misión y los objetivos legales.

- Datos estadísticos deiiNEGI, en el Estado de Nuevo León en el año 2017 señalan que existió un promedio de 237 personas que fallecieron en •incidentesde tránsito y 7,325 personas que resultaron heridas con lesiones leves y/o graves.

Por lo que considero que la institución en procuración de justicia debería ser facilitadora, aplicando la interpretación de la ley estrictamente apegada a principio de legalidad.

Por lo que se debe adicionar un artículo 144 bis, donde la Fiscalía General del Estado resulte obligada para que en el exterior de sus recintos se publiquen las tablas de tabuladores de la reparación de daños material y moral de las víctimas mortales y demás beneficios que señala la ley, a fin de que los familiares de las victimas tengan el conocimiento y la debida asesoría por parte de la autoridad y la certeza de que será justa la indemnización.

Somos congruentes con los lineamientos planteados por la cuarta transformación de nuestro presidente de la Republica Lic. Andrés Manuel López Obrador donde se construyen los valores a fin de dar un mejor trato a los ciudadanos, por lo que me permito presentar esta iniciativa de reforma por adición al Código Penal del Estado con los anteriores argumentos.

DECRETO

ÚNICO: Se adiciona el artículo 144 bis, al Código Penal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 144 Bis. La Fiscalía General de Justicia del Estado tendrá la obligación de publicar en el exterior de sus recintos, los tabuladores de daño material y moral de las víctimas mortales y de los lesionados que resulten con incapacidad temporal, temporal permanente y permanente total con sus

respectivas secuelas definidas en sus dictámenes, respetándose los beneficios que marca la ley. Dicho tabulador deberá actualizarse cada vez que existan aumentos de salarios mínimos que señale la ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

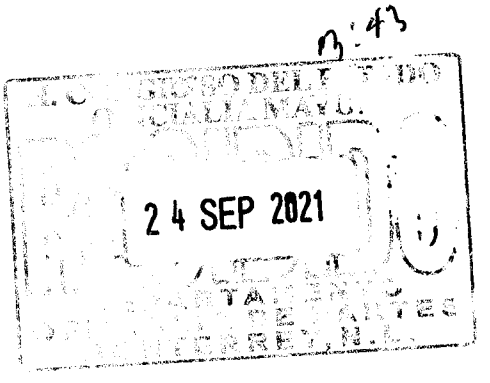
Atentamente

[redacted]

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández



147

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO 16 BIS EN RELACION CON LOS DELITOS GRAVES, SE ADICIONAN LOS ARTICULO$ 204 BIS y, 204 BIS 1, ASI COMO SE DERGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 202(SE DEROGA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 203 Y SE ADICIONA UN CAPITULO III BIS, PARA CREAR EL DELITO DE PROSTITUCION INFANTIL, TODOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN RELACIONA PROSTITUCION INFANTIL"

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.

- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos

del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente**12327/LXXV**, presentada en sesión el 28 de Noviembre del 2018, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2018, Expediente: 12327/LXXV

PROMOVENTE: DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, SUSCRIBIENDOSE LOS DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, DIPUTADOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, Y DIPUTADOS DE MORENA.

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO 16 BIS EN RELACION CON LOS DELITOS GRAVES, SE ADICIONAN LOS ARTICULO$ 204 BIS y, 204 BIS 1, ASI COMO SE DERGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 202(SE DEROGA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 203 Y SE ADICIONA UN CAPITULO III BIS, PARA CREAR EL DELITO DE PROSTITUCION INFANTIL, TODOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN RELACIONA PROSTITUCION INFANTIL.

INICIADO EN SESIÓN: 28 de noviembre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Exposición de Motivos

El maltrato infantil puede definirse como la acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza e interfiere en su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Existen al menos cuatro tipos de maltrato infantil: maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional y abuso sexual.

Un panorama mundial sobre la situación que guarda el abuso sexual en los niños lo brinda la Organización Mundial de la Salud, quien menciona que hasta septiembre de 2016 una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia.

En este sentido, el abuso sexual en los niños deja secuelas que los marcan de por vida, algunos de ellos son miedo, problemas para dormir, confusión, culpa, bajo autoestima, depresión, ansiedad, fobias, estrés e incluso el suicidio.

En perspectiva de nuestro Grupo Legislativo, los conceptos de abuso sexual en el ámbito jurídico son diversos de una Legislación a otra, por lo que se puede considerar que la definición es poco clara y por ende el bien jurídico que se pretende proteger mediante la regulación o tipificación del abuso sexual infantil se queda detenido o insatisfecho.

México ratifico la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en el 2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

A pesar de la firma en algunos casos la ratificación de los convenios antes mencionados, de acuerdo con cifras de la OCDE, México ocupa el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. En el país existieron 4.5 millones de infantes víctimas de este delito, lo más grave es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos.

Como grupo legislativo, proponemos hacer políticas públicas para prevenir la incidencia de este delito y promover su denuncia, pues actualmente la mayoría de los niños y familiares no denuncian casos de abuso sexual, por temor al estigma e intolerancia social, así como por desconfianza hacia las autoridades.

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte, señala en su informe anual 2014 que México registra de los más bajos presupuestos para atender este mal social, sólo uno por ciento de los recursos destinados a la infancia se dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.

En este tenor, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo al presentar esta propuesta busca darle mayor protección a la niñez de nuestro Estado.

En nuestra perspectiva, la utilización de una niña o un niño en actividades sexuales o a cambio de dinero u otra forma de retribución constituye una de las conductas más infames y degradantes de la sociedad en que vivimos.

Para nosotros, es de suma urgencia legislar y tipificar de manera contundente, estos actos deplorables para la Sociedad en general, toda vez que es nuestra convicción que este tipo de problemáticas se corrigen con acciones desde diferentes ámbitos como lo son combatir la drogadicción, el alcoholismo, la pobreza, la desintegración familiar así como el fortalecimiento de los valores y del núcleo social de la familia.

Por estas consideraciones, solicito a ésta Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por modificación la fracción primera del artículo 16 bis, se deroga la fracción cuarta del artículo 202, se

deroga el segundo párrafo del artículo 203, se reforma el Título Quinto con la adición de un capítulo tercero Bis, así como los artículos 204 bis y 204 bis 1, para crear el delito de prostitución infantil, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 16 bis.- Para todos los efectos legales se califican como delitos graves consignados en este código:

I ...

204 BIS, 204 BIS 1...

Artículo 202.- ...

Fracción IV.- (Se deroga)

Artículo 203.- ...

Párrafo segundo (se deroga)

Capitulo III BIS

Prostitución Infantil

Artículo 204 BIS.-Se impondrán de diez a quince años de prisión, y multa por el equivalente de dos mil quinientas a tres mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, a cambio de cualquier prestación en dinero, especie o servicios, tenga relaciones sexuales u obtenga la realización de cualquier acto erótico

sexual con persona menor de dieciocho años de edad o quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Artículo 204 BIS 1.- Se *impondrán de quince* a *veinte años de prisión y multa por el equivalente de cuatro mil* a *cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien administre, regentee, induzca, promueva, ofrezca, facilite, concierte u oculte cualquier acto de prostitución infantil de un menor de edad* o *de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.*

La sanción aumentará en los términos del artículo 197 de éste código, si ocurren los supuestos previstos en dicho numeral.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enriquez Hernandez

[redacted]

148

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VIII "VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER" CON LOS ARTÍCULOS 287 BIS 3 Y 287 BIS 4 AL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DENOMINADO "DELITOS CONTRA LA FAMILIA" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente 12359/LXXV, presentada en sesión el 10 de diciembre del 2018, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

CCO*

AÑO: 2018, EXPEDIENTE: 12359/LXXV

PROMOVENTE: C. DIP. ESPERANZA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ.

ASUNTO RELACIONADO A: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VIII "VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER" CON LOS ARTÍCULOS 287 BIS 3 Y 287 BIS 4 AL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DENOMINADO "DELITOS CONTRA LA FAMILIA" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 1O DE DICIEMBRE DEL 2018.

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSITIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Principalmente, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos en los que el Estado Mexicano es parte.

Al mismo tiempo, estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Además, incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Gcürlrra:r•¡a Mujer define como "violencia contra las mujeres" todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En este sentido, la Asamblea General de la ONU, con respecto de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece que; "*/a violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el/ogro de la igualdad, el desarrollo y la paz."*

CCO*

Así mismo, nuestro más alto Tribunal Constitucional, expresa que; existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.

las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares.

En este orden de ideas, Nuestro Grupo Legislativo Partido del Trabajo, considera que es necesario que se establezca en el Código Penal del Estado, la figura de "Violencia contra los Derechos Reproductivos de la Mujer" con el fin de que se respeten los derechos a una vida libre de violencia de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

Lo antes expuesto para ejercer el derecho a disfrutar de una

sexualidad plena, evitar las infecciones de transmisión sexual, y decidir si tener hijos o no, cuándo y con quién, es fundamental poder elegir libremente y tener acceso a la información del método anticonceptivo que se quiere utilizar. Desde esta optica, cada persona tiene derecho a elegir el Método anticonceptivo que mejor se adapta a sus necesidades y convicciones, y recibirlo de manera gratuita en hospitales y centros de salud públicos de todo el país.

Por estas consideraciones, solicito a esta Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por adición de un Capítulo VIII "Violencia contra los Derechos Reproductivos de la Mujer" con el Artículo 287 Bis 3, y el Artículo 287 Bis 4, al Título Décimo Segundo denominado "Delitos Contra la Familia" todo del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Título Décimo Segundo ...

Artículo 287 Bis 3.- *Comete el delito de Violencia contra los Derechos Reproductivos de la Mujer, quien realice un acto u omisión que limiten o vulneren el derecho de una mujer a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, el número y espaciamiento de una hija o un hijo o el acceso a métodos anticonceptivos, a una maternidad elegida y segura, y a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.*

Artículo 287 Bis 4.- A *quien cometa el delito de Violencia contra los Derechos Reproductivos de la Mujer, se le impondrá de seis meses, a dos años de prisión y multa de veinticinco a ciento cincuenta urnas.*

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

CCO*

149

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar Iniciativa de reforma al artículo 196 del Código Penal

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser*

necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.
Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Emilio Alejandro Machado García y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa se identifica con el expediente 13814, iniciada el 21 de octubre del 2020 turnada a Comisión de Seguridad y Justicia

Exposición de motivos

A partir del inicio de este año 2020, comenzó a presentarse en china, el brote de un nuevo virus, llamado posteriormente COVID-19, el Coronavirus que actualmente es una pandemia que surgió en Wuhan, una ciudad de China que tuvo al primer paciente infectado. Diversos estudios médicos han tratado de determinar el origen de este COVID-19 en busca de entenderlo mejor y encontrar una cura eficiente lo antes posible. En un principio, se señaló a los murciélagos como los principales sospechosos de transmitir esta enfermedad, pero un estudio reciente también ve en el pangolín como el posible culpable. No obstante, la Organización Mundial de la Salud asegura que todavía no está confirmado que este virus tenga un origen animal, aunque es lo más probable.

De acuerdo con la OMS, los coronavirus son una familia de virus que pueden a usar enfermedades tanto en humanos como en animales. Su principal efecto es causar enfermedades respiratorias que suelen ir de moderadas a graves.

De acuerdo a información conocida, el virus se transmite:

- A través del aire, al toser y estornudar
- Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma
- Al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos

Dentro de los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunas personas pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal, pero en general han existido, varias muertes provocadas por este virus.

Cuando llego a México este virus que se veía tan lejano, los mexicanos como siempre actuamos buscamos combatirlo con remedios caseros o mágicos, que hacen perder tiempo a la gente de tratarlo con medicamentos comprobados.

Uno de estos productos es el famoso dióxido de cloro, vendiéndolo como un producto mágico que combate al coronavirus, pero que sin embargo, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento y ahora que la pandemia del covid-19 azota el mundo, vuelva a aparecer como algo capaz de frenar los efectos del virus.

Para las personas mayores yo no tengo inconveniente, que lo usen si es su criterio, de ellos depende su salud y si lo quieren usar que lo hagan, pero diputadas y diputados, que no lo hagan con las niñas y niños de nuestro Estado, que les dan estas formulas preparadas para prevenir el coronavirus, pero no saben si en realidad les están causando más enfermedades.

Ellos no tienen la capacidad de decisión, y hacen lo que sus padres les dicen, y no es justo que los estén envenenando con estos productos mágicos, que no causan sino más problemas a la salud de los menores.

Tengo conocimiento de que existe una Ley que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, y en este momento invoco a

esa Ley, para protegerlos hasta de sus propios padres, que son ellos mismo que los envenenan con este tipo de productos.

Diversos especialistas y médicos he leído en los medios de comunicación, sobre todo en internet, que se han manifestado en contra de consumir esta sustancia, por que es peligrosa, y si instituciones de renombre ya han dicho que no se puede consumir, la gente lo sigue haciendo.

Repito, las personas adultas, esta bien que lo sigan consumiendo, pero los pequeños que no tienen conocimiento ni capacidad de decisión, debe el Estado protegerlos de estos productos milagro y del envenenamiento que les causan sus padres, por ello debe de ponérseles una pena ejemplar. Que considero debe ser la misma que si se les diera droga o alcohol, la cual viene sancionada en el Código de penas de nuestro Estado, como corrupción de menores.

Por ello encarecidamente les pido diputadas y diputados, apelando a su buen juicio, que usen el poder sancionador del Estado para castigar a estos padres que están envenando a sus hijos con estos productos milagro que en en verdad nada tienen de milagrosos y si pueden dañar su salud.

Les menciono las modificaciones que deseo hacer en el Código Penal de nuestra Entidad:

Texto antes de la reforma:

ARTÍCULO 196.-COMETE EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES O DE PERSONAS PRIVADAS DE LA VOLUNTAD, QUIEN REALICE CON MENOR DE EDAD O CON PERSONA PRIVADA DE LA VOLUNTAD, RESPECTIVAMENTE, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:

(ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004) I.-PROCURE O FACILITE CUALQUIER TRASTORNO SEXUAL; (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)

11.-PROCURE O FACILITE LA DEPRAVACION; O (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)

111. INDUZCA, INCITE, SUMINISTRE O PROPICIE: (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)

A) EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TOXICAS O QUE CONTENGAN ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS; {ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)

B) LA EBRIEDAD; {REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

C) EL TABAQUISMO; {REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017) D) A FORMAR PARTE DE UNA BANDA, AGRUPACIÓN DELICTUOSA O PANDILLA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 176, 176 BIS Y 177 RESPECTIVAMENTE DE ESTE CÓDIGO; (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

E) A COMETER ALGÚN DELITO; O (ADICIONADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

F) LA MENDICIDAD. {ADICIONADO, P.O. 11DE JUNIO DE 2008)

IV.- INDUZCA, INCITE, FACILITE O PERMITA EL USO DE CUALQUIER MAQUINA DE JUEGOS DE AZAR, EN LA CUAL EL RESULTADO DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DE LA SUERTE Y NO DE LA DESTREZA O DEL CONOCIMIENTO DEL USUARIO, Y CUYO FIN SEA LA OBTENCION INMEDIATA DE UN PREMIO EN NUMERARIO. (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES 1, 11 Y 111 INCISOS A), B) Y C) DE ESTE ARTÍCULO, SERÁN SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A NUEVE AÑOS Y MULTA DE SEISCIENTAS A NOVECIENTAS CUOTAS.

{REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017) LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO, SERÁN SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE CIENTO CINCUENTA A SEISCIENTAS CUOTAS. {REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN 111, INCISO D) DE ESTE ARTÍCULO, SERÁN SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A DOCE AÑOS Y MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA A SETECIENTAS CINCUENTA CUOTAS. (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

LA CONDUCTA PREVISTA EN LA FRACCIÓN 111, INCISO E) DE ESTE ARTÍCULO, SERÁ SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A DOCE AÑOS Y MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA A SETECIENTAS CINCUENTA CUOTAS SI SE HUBIERA REALIZADO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 BIS DE ESTE CÓDIGO. {REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

SI LA CONDUCTA DELICTIVA NO ESTÁ CONTENIDA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 BIS SERÁ SANCIONADA CON PENA DE PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE CIENTO CINCUENTA A SEISCIENTAS CUOTAS.

(REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

LA CONDUCTA PREVISTA EN LA FRACCIÓN 111, INCISO F) DE ESTE ARTÍCULO, SERÁ SANCIONADA CON PENA DE PRISIÓN DE UNO A TRES AÑOS Y MULTA DE HASTA CIENTO CINCUENTA CUOTAS. {REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

SI ADEMÁS DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE CAPÍTULO RESULTASE COMETIDO OTRO SE APLICARÁN LAS REGLAS DEL CONCURSO. (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017) NO SE APLICARÁ

LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO CUANDO EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS SEA POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O DE QUIENES

EJERCEN LA PATRIA POTESTAD, LA TUTELA O LA CUSTODIA, LEGALMENTE OTORGADAS. (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017)

SE ENTIENDE POR PERSONA PRIVADA DE LA VOLUNTAD, AL MAYOR DE EDAD QUE SE HALLE SIN SENTIDO, QUE NO TENGA EXPEDITO EL USO DE RAZÓN O QUE POR CUALQUIER CAUSA NO PUDIERE RESISTIR LA CONDUCTA DELICTUOSA.

Texto después de la reforma que busco se apruebe como DECRETO:

ARTÍCULO 196.-COMETE EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES O DE PERSONAS PRIVADAS DE LA VOLUNTAD, QUIEN REALICE CON MENOR DE EDAD O CON PERSONA PRIVADA DE LA VOLUNTAD, RESPECTIVAMENTE, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:

I.-PROCURE O FACILITE CUALQUIER TRASTORNO SEXUAL; 11.-PROCURE O FACILITE LA DEPRAVACION; O

111. INDUZCA, INCITE, SUMINISTRE O PROPICIE:

A) EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TOXICAS O QUE CONTENGAN ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS O DIOXIDO DE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO MILAGRO PARA LA ENFERMEDAD COVID 19 O CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD;

B) LA EBRIEDAD;

C) EL TABAQUISMO; (REFORMADO, P.O. 07 DE JUNIO DE 2017) D) A FORMAR PARTE DE UNA BANDA, AGRUPACIÓN DELICTUOSA O PANDILLA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 176, 176 BIS Y 177 RESPECTIVAMENTE DE ESTE CÓDIGO;

E) A COMETER ALGÚN DELITO; O

F) LA MENDICIDAD.

IV.- INDUZCA, INCITE, FACILITE O PERMITA EL USO DE CUALQUIER MAQUINA DE JUEGOS DE AZAR, EN LA CUAL EL RESULTADO DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DE LA SUERTE Y NO DE LA DESTREZA O DEL CONOCIMIENTO DEL USUARIO, Y CUYO FIN SEA LA OBTENCION INMEDIATA DE UN PREMIO EN NUMERARIO.

LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES 1, 11 Y 111 INCISOS A), B) Y C) DE ESTE ARTÍCULO, SERÁN SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A NUEVE AÑOS Y MULTA DE SEISCIENTAS A NOVECIENTAS CUOTAS.

LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO, SERÁN SANCIONADAS CON PENA DE PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE CIENTO CINCUENTA A SEISCIENTAS CUOTAS.

150

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION DE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 51 BIS Y DE LA FRACCION 111 DEL ARTICULO 143 Y POR DEROGACION DE LOS ARTICULO 262 A 264 Y 359 A 363 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso.

Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no

cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, identificándose bajo el expediente**12848/LXXV**, presentada en sesión el 10 deSeptiembre del 2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pùblica y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional.

La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ha recomendado a México derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias contra las mujeres y las niñas y armonizar las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres.

Es de hacer notar, que ONU Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres, recomendaron a Nuevo León, revise íntegramente los instrumentos normativos estatales, en particular el Código Penal para el Estado de Nuevo León para derogar y regular adecuadamente los actos de violencia contra las mujeres con base en lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales.

Asimismo, la (CONAVIM). sugirió a nuestra entidad, con motivo de la emisión de la Alerta de Violencia de Género, la conformación

de un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente la legislación existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas, para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos y propone una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones.

Compañeros Diputados, desde diciembre de 2017, en Nuevo León se prohíbe el matrimonio infantil; sin embargo, nuestro Código Penal, aun contempla diversas conductas que violentan o discriminan a las mujeres, o bien, contemplan la posibilidad de no aplicar pena si se contrae matrimonio con la víctima, aun cuando sea menor de edad, como es el caso del delito de estupro, tipo penal que es necesario derogar, ya que contempla la conducta antijurídica de una persona que, tiene cópula mediante seducción o engaño con persona menor de edad, que sea mayor de trece años, aplicando al responsable del delito de uno a cinco años de prisión y multa de seis a quince cuotas; *es decir, una sanción mínima y una multa insignificante para el infractor que tiene relaciones sexuales con una niña.*

Además, existen múltiples casos de personas que seducen a niñas y después la someten a prostitución forzada, aun cuando sean sus esposas; es decir, son víctimas de trata. De ahí la importancia de eliminar o reformar este tipo de figuras jurídicas que anulan los derechos de las mujeres.

En el Código Penal Federal esta figura se encuentra derogada, y nuestra entidad se encuentra en un rezago legislativo de tan necesaria reforma, que involucra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, nuestro Código Penal tipifica en el artículo 359 el delito de Rapto al establecer lo siguiente:

"AL QUE SE APODERE DE UNA MUJER POR MEDIO DE LA VIOLENCIA FISICO O MORAL, DE LA SEDUCCION O DEL ENGAÑO, PARA SATISFACER ALGUN DESEO EROTICO-SEXUAL, O PARA CASARSE, se le aplicará la pena de seis meses a seis años de prisión y multa de tres a diez cuotas"

De nueva cuenta en este delito una sanción mínima y una multa insignificante para el infractor que tiene relaciones sexuales con una niña, cuando dicha conducta a todas luces ilícita debe sancionarse como violación, además de privación ilegal de la libertad.

Es de hacer notar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, obliga al Estado Mexicano a prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas. Conforme a dicho protocolo, la trata de personas puede significar el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación, esta definición advierte 3 elementos que constituyen esencialmente dicho ilícito los cuales son: la actividad entendida como la captación, transporte, traslado etc., el medio que es la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, y por último el propósito como lo es la explotación de una persona.

Es inadmisible que nuestro Código Penal contemple conductas antijurídicas que se ubican en el supuesto jurídico de violación o privación ilegal de la libertad y se les otorgue una penalidad mínima, lo cual se trata de una clara revictimización.

Debemos garantizar el interés superior de la niñez, realizar acciones afirmativas para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, tutelar su seguridad y libertad y atender las recomendaciones de la SEDAW, ONU Mujeres, CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres, por lo cual se propone derogar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Se sugiere considerar la iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal presentada por la que suscribe, que incrementa

La pena del delito de violación cuando se comete contra menores de 13 años de edad.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1°, segundoy tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 'las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de

la materia *favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección* más *amplia,* así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá *prevenir,* investigar, *sancionar* y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

SEGUNDO.- Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad.

TERCERO.- Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Belém do Pará", en su artículo 1 se refiere a que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

A su vez, el artículo 2 menciona que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Por lo expuesto, y considerando que es necesana la armonización legislativa de nuestra entidad federativa con el orden federal, proponemos armonizar nuestro Código Penal con lo previsto en el Código Penal Federal.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma por modificación la fracción 11 del artículo 51 BIS y la fracción 111 del artículo 143, y se derogan los artículos 262 a 264 y 359 a 363 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 51 BIS.- Quedan excluidos de la aplicación del trabajo en beneficio de la comunidad, los siguientes delitos:

I.- ...

II.- Los delitos de evasión de presos, quebrantamiento de sellos, los relativos a la corrupción de menores y pornografía infantil, lenocinio, usurpación de funciones públicas o de profesión, uso indebido de condecoraciones o uniformes, atentados al pudor, violación, sus figuras equiparadas y los grados de tentativa, hostigamiento sexual, incesto, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, inducción y auxilio al suicidio,
aborto, abandono de personas y privación ilegal de la libertad.

ARTÍCULO 143.- La reparación del daño comprende:

I a II.- ...

III.- En los casos de violación, comprenderán los gastos de gestación, alumbramiento, y en su caso los gastos funerarios, así como el pago de los alimentos a las hijas e hijos, si los hubiere, y cuya concepción sea consecuencia de la comisión de este delito, igualmente los gastos por la atención médica o psíquica del ofendido, hasta su total recuperación;

IV a V...

ARTÍCULO 262.- DEROGADO

ARTÍCULO 263.- DEROGADO

ARTÍCULO 264.- DEROGADO

ARTÍCULO 359.- DEROGADO

ARTÍCULO 360.- DEROGADO

ARTÍCULO 361.- DEROGADO

ARTÍCULO 362.- DEROGADO

ARTÍCULO 363.- DEROGADO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

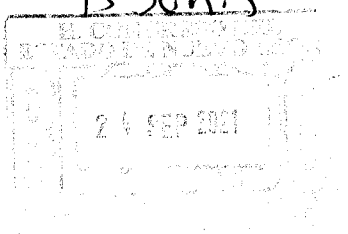
Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:30 h.



151

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO IV BIS DENOMINADO "FRAUDE FAMILIAR", AL TITULO DECIMO NOVENO DE LOS "DELITOS EN RELACION CON EL PATRIMONIO", DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente11960/LXXV, presentada en sesión el25 de septiembre del 2018, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2018Expediente: 11960/LXXV

PROMOVENTE: DIP. ESPERANZA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO IV BIS DENOMINADO "FRAUDE FAMILIAR", AL TITULO DECIMO NOVENO DE LOS "DELITOS EN RELACION CON EL PATRIMONIO", DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
INICIADO EN SESIÓN: 25 de septiembre del'2018
SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto principal de esta iniciativa es adicionar un capítulo en relación al fraude familiar para que se sancione penalmente a los deudores alimentarios que oculten, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros o se abstengan en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

De acuerdo con datos de la Primera Visitaduria General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

En este sentido, nuestra carta magna nos señala en su artículo 4 que el deber del estado es proteger la organización y el desarrollo de la familia a través de la ley.

La principal problemática es generada por una serie de falsedades de los deudores alimentarios,
emplean para evadir su responsabilidad manifestando dolosamente que su salario es inferior al que en realidad perciben; Y en otras ocasiones, los infractores solicitan a su patrón o a las empresas donde laboran que informen que sus ingresos sean menores o se colocan intencionalmente en estado de insolvencia.

Por lo tanto, el más alto tribunal del país nos menciona que es incorrecto afirmar que el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos es un asunto civil lo cual en realidad es un delito de peligro y no de resultado, porque basta con que se den los elementos objetivos y normativos que configuran la hipótesis, para que surta su tipificación cuando el agente activo deje de cumplir su obligación de dar alimentos a sus hijos y que carezca de motivo justificado para ello.

Es por ello, que el Partido del Trabajo considera importante esta reforma y que se sancione penalmente para que cumplan los deudores alimentarios con la

pensión alimenticia y asimismo se dé cumplimiento con el principio interés superior de la niñez y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para el desarrollo de las niñas, niños o adolescentes, como lo es la educación, alimentación, salud, vivienda entre otros.

Por estas consideraciones, solicito a ésta Republicana Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO
UNICO. - Reforma por adición del capítulo IV bis
denominado "Fraude Familiar" al título Décimo Noveno de los "Delitos en relación al patrimonio", del Código Penal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
Titulo Décimo Noveno
"Delitos en relación con el patrimoni

Capítulo Ial IV ...

Capítulo IV bis Fraude Familiar
Artículo 391 bis.- Comete el delito de fraude familiar a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros ,se le
aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y de hasta 200 a 300 umas.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

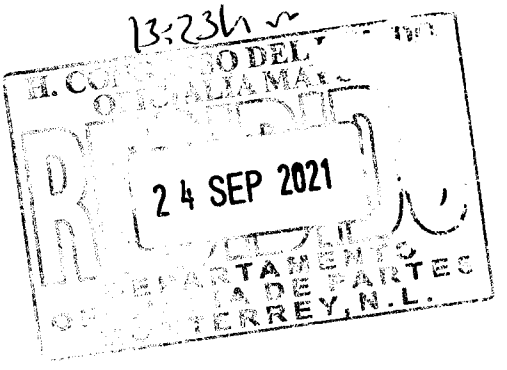
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



154

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar iniciativa para la derogación de varios artículos del código penal

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por Arthemisas por la equidad A.C. y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

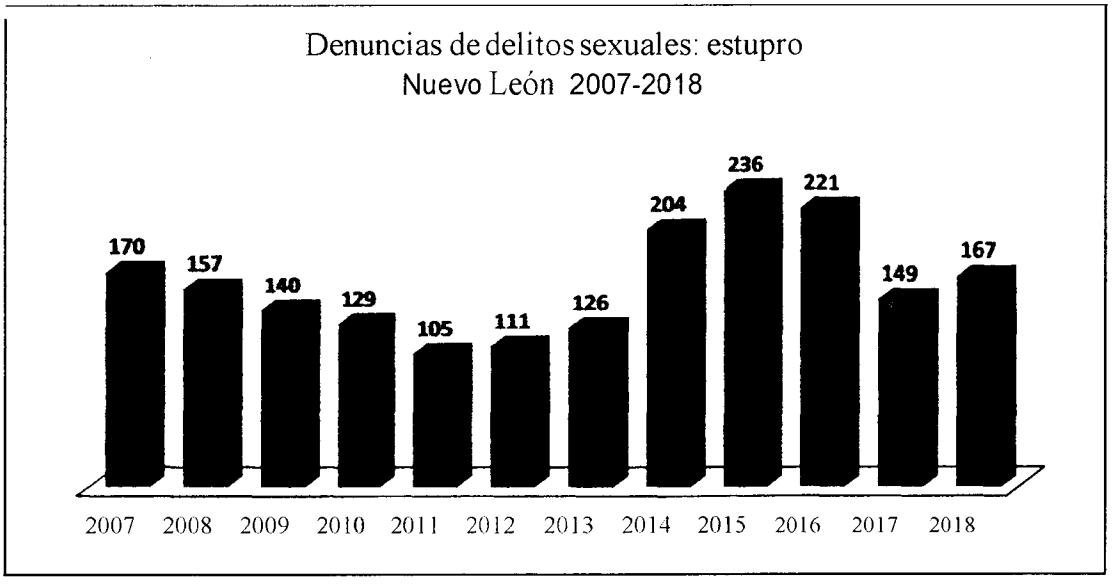
Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa se identifica originalmente con el expediente 12966, iniciado en sesión el 22 de octubre del 2019 y turnado a la comisión de Justicia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia en contra de las mujeres es un grave problema que aqueja al país, Nuevo León no es la excepción. Las cifras y datos presentados por las agencias oficiales muestran que en el Estado de Nuevo León se cometen variados delitos en el cuerpo de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Algunas evidencias de lo antes dicho han sido reportadas en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

la ENDIREH sostiene que en el ambiente comunitario, las mujeres, adolescentes y niñas son más propensas a ser víctimas de algún tipo de delito sexual. En este contexto el 32.8 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, que podría ser catalogado como estupro, violación, acoso u hostigamiento sexual; u otros delitos que atenten contra la intimidad personal o pornografía de persona privada de la voluntad en razón de la cual no pudiere resistir la conducta delictiva del agente activo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia en et Estado, a través de su página electrónica; de 2007 a 2018 se denunciaron 1,915 casos de estupro, según puede observarse en la gráfica anexa. El mayor número de víctimas de estupro en este periodo se registró en el año 2015, haciendo hincapié que este delito se perpetra en personas de entre 13 y 18 años de edad. En un somero análisis se observa que en la entidad, la media anual de denuncias de estupro es de 160 casos, equivalente a poco más de 13 denuncias al mes.



Fuente: Elaboración propia con informacion de la Fiscalia General de Justicia en ei Estado de Nuevo Leon, 2007--2018

Ahora bien, en 1989 apareció en el catálogo de los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño [y de la Niña]. Ésta y sus dos protocolos facultativos son los documentos internacionales con los más altos estándares de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En su artículo 3°, la Convención establece que todas las personas menores de 18 años de edad son titulares de derechos y que, en relación con su bienestar, todas las medidas deben atender el principio del interés superior de la infancia.

En consonancia con lo anterior, la Observación General número 13, emitida en 2011 por el Comité de los Derechos del Niño, recomendó acelerar los esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, a través de reformas legislativas, medidas judiciales, administrativas, sociales, culturales y educativas; con lo que se fortalece el mensaje de que ningún tipo o modalidad de violencia en contra de personas menores de edad se justifica.

Para atender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecido en el artículo 4°, párrafo noveno, que ordena velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado, garantizando de manera plena sus derechos; considerando que ese principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y que el mismo se encuentra previsto también en el párrafo tercero del artículo 3 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nuevo León, que establece el derecho de niñas y niños a "una vida digna y libre de violencia, para su desarrollo integral", así como que ese marco de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes obliga a modificar los tipos penales de delitos sexuales, para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos de infancia, es que propongo se derogue el delito de estupro de la codificación penal vigente.

El 26 de marzo de 1990 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 94, que instituye el Código Penal para el Estado de Nuevo León, el cual ha sido reformado en diversas ocasiones, la más reciente está fechada el 22 de marzo de 2019. Su Título Décimo Primero, dividido en siete capítulos, tipifica los delitos sexuales cuyo bien jurídico tutelado son la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, estableciendo: **I)** atentados al pudor, 11) estupro, 111) violación, IV) acoso y hostigamiento sexual, V) pornografía de persona privada de la voluntad, VI) delitos contra la intimidad personal, y VII) disposiciones para los capítulos precedentes.

Cada uno de estos delitos contiene elementos de fondo que los diferencian, entre los cuales se encuentran: el pudor, el consentimiento, la voluntad, la violencia moral, la resistencia, la cópula, la tentativa, la connotación sexual, el exhibicionismo corporal, la posición jerárquica o de poder, el asedio, el parentesco, las relaciones afectivas, el contexto donde se realiza el ilícito, por nombrar algunos.

Desde que se instituyó a la fecha, el Código Penal para el Estado de Nuevo León ha sufrido varias reformas para modificar el delito de estupro, se eliminó la condición de *casta y honesta,* y se desechó la sanción emanada del derecho Canónico, que consistía en casar a la víctima con el estuprador; también se reformó, con el propósito de evitar el lenguaje sexista, al cambiar el término *mujer* por el de *personas.* Pero, hasta el momento, **no se ha derogado este ilícito,** el que, desde nuestra perspectiva como defensoras de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sigue teniendo, en la actualidad, los mismos vicios previstos en el Derecho Romano.

Consideramos que la definición del estupro utiliza un eufemismo para nombrar la violación sexual que se perpetra en el cuerpo de las niñas, niños y adolescentes que cuentan entre 13 y 18 años no cumplidos. En evidente asimetría

de poder, una persona adulta ejerce presión psicológica o violencia moral para desviar la voluntad de una persona menor de edad, sometiéndola a través del engaño o la seducción, a realizar un acto sexual, contrario al bienestar y a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el texto del Código Penal que nos rige, se advierte que este delito se define como la cópula con persona menor de edad, que sea mayor de trece años, en la que no media la violencia, sino la seducción o el engaño. Las características principales del delito son **la cópula y la seducción o el engaño** con el que se conduce el sujeto activo para conseguir la aquiescencia de la persona víctima del delito; y **la minoría de edad** de las sujetas pasivas, en el caso de Nuevo León, **de 13 a 18 años no cumplidos.**

La sanción aplicable para quien comete el delito de estupro se establece en el artículo 263 y consiste en prisión de uno a cinco años y multa de seis a quince cuotas. En tanto que el artículo 264 dispone que la persecución del delito sea por denuncia o queja de la persona estuprada o de quienes la representan; llama la atención esta especificidad en un delito que causa daño a la libertad sexual y al normal desarrollo psicosocial de la persona menor de edad, ya que al no haber denuncia, el estuprador podría no recibir sanción alguna aunque el hecho presente dolo, alevosía y ventaja. Tomando en consideración, además, de que la persona afectada forma parte de un sector poblacional respecto del cual el Estado nuevoleonés tiene una responsabilidad agravada en la protección y garantía de sus derechos fundamentales, como son los derechos a la salud, a la integridad y seguridad personal y a una vida libre de violencia.

En términos generales el delito de estupro se refiere a una relación "consensuada" mediante la mentira o el engaño, para conseguir un acto sexual con persona menor de edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, expone que con la mentira "hay vicio de consentimiento", agrega que por engaño se

entiende "alterar la verdad o producir en el agente pasivo un estado de error, confusión o equivocación por el que accede a la pretensión erótica (Tesis aislada 203218, febrero de 1996). Al respecto el Semanario Judicial de la Federación[1] explica que: la seducción tiene un triple carácter definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como: 1) *Persuadir* a *alguien con argucias* o *halagos para algo, frecuentemente malo.* 2) *Atraer físicamente* a *alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual.* 3) *Embargar* o *cautivar el ánimo* a *alguien.*

De lo expuesto, se colige que el supuesto *consentimiento* dado por una persona menor de edad a la persona adulta, con el que se produce el estupro, es una excusa artificiosa que pone en riesgo la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución, los convenios internacionales, regionales y leyes secundarias.

Observamos que el supuesto *consentimiento* es un recurso para evadir las sanciones que conlleva la comisión del ilícito. Nuestra postura, como defensoras de derechos humanos, coincide con las palabras de Alicia Miyares, "el estupro es una violación sexual en la que se conjunta el sometimiento, el engaño, la seducción y el miedo, al que de manera rimbombante los juristas llaman *consentimiento."* Agregamos que, además de las y los juristas, otros importantes estamentos recurren a esta supuesta manifestación de la voluntad de una persona menor de edad.

Con base en los antecedentes expuestos, parece que el delito de estupro es menos grave que la violación sexual. El hecho que este tipo penal continúe en la norma vigente en la segunda década del siglo XXI, permite a personas adultas sostener cópula con personas menores de edad, calculando que la persona menor

[1] Semanario Judicial de la Federación. Acuerdo 303860. Primera Sala. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXIX, pág. 176. Referente al Amparo penal directo 8605/45. Domínguez Pablo. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. la publicación no menciona el nombre del ponente. 5 de julio de 1946.

de edad no denunciará el ilícito. Dada la edad de las víctimas del delito, es incomprensible que no esté catalogado en nuestro cuerpo de leyes como una violencia extrema que atenta contra el principio constitucional del interés superior de la infancia; y que no se haya derogado de nuestro Código Penal, que allanaría el camino a la procuración y la administración de justicia, en caso de que se cometa una violación sexual en persona de entre 13 y 18 años de edad en el territorio de Nuevo León.

Con base en lo expuesto, mi representada, Arthemisas por la Equidad, A.C., propone a la consideración de la H. LXXV Legislatura reformar por derogación el Capítulo 11 y 10 artículos que lo integran, del Título Décimo Primero del Código Penal para el Estado de Nuevo León vigente, que textualmente dice:

> Capítulo II [denominación]
>
> Estupro
>
> (Reformado, P.O. 25 de mayo de 2008)
> Artículo 262. Comete el delito de estupro, quien tenga cópula mediante seducción o engaño, con persona menor de edad, que sea mayor de trece años.
>
> Artículo 263. Al responsable del delito de estupro, se le aplicará prisión de uno a cinco años, y multa de seis a quince cuotas.
>
> (Reformado, P.O. 28 de abril de 2004)
> Artículo 264. No se procederá contra el responsable del delito de estupro sino por queja del menor, de quienes ejerzan la patria pqtestad, o a falta de éstos, de sus legítimos representantes.

Para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma el Título Décimo Primero del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para derogar el Capítulo 11 y los artículos 262, 263 y 264, para quedar como sigue:

Capítulo II. Derogado

Estupro. Derogado

Artículo 262. Derogado

Artículo 263. Derogado

Artículo 264. Derogado

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León a 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:18 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 SEP 2021
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

155

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO VIII DEL TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBICA Y ADICION DE UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTICULO 177, AMBOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ESTABLECER LA FIGURA DE OMISION DELICTIVA.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.

- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el*

lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C.ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:
Año:2018 Expediente: 11951/LXXV

PROMOVENTE: DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO VIII DEL TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBICA Y ADICION DE UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTICULO 177, AMBOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ESTABLECER LA FIGURA DE OMISION DELICTIVA.

INICIADO EN SESIÓN: 24 de septieynbre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día de ayer domingo, siendo aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde, una vez más el ciego fanatismo de los integrantes de las barras de los equipos de futbol Monterrey y Tigres, apareció en plena vía pública en un conato de riña, hecho en el que se enfrentaron y dejaron gravemente herido a uno de los participantes.

La violencia por enfrentamiento entre seguidores de los

equipos de la ciudad, NO es un acto aislado, sino de efecto continuo, la preocupación que surge para los Diputados que conformamos el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, es el día de hoy aun mayor, pues en diversos videos que muestran los medios de comunicación se aprecia a una unidad de seguridad pública omitiendo atender el conato de riña señalado anteriormente.

En ese orden de ideas importante es para nosotros como Legisladores, establecer en nuestro Código Penal medidas que garanticen una mejor seguridad para la población, y de la misma forma endurecer las sanciones y crear responsabilidades para aquellos servidores encargados de la seguridad pública, que estando presentes, omiten dolosamente atender los acto de violencia que ocurren en su presencia, siendo lo anterior un acto que consiente de manera inmediata, se continúen hechos delictivos que ponen en riesgo la vida de la sociedad.

Es momento de poner un alto a este tipo de hechos de violencia y castigarla más severamente, de tal forma que las personas que se reúnen y se alientan a realizar estos hechos delictivos sean
sancionados sin distinción y por igual, aplicándoles la pena más alta

del delito cometido, lo anterior busca ser una herramienta para disolver las actuaciones de los integrantes de esas pandillas que se disfrazan tras una playera de aficionado al deporte, y sin medida alguna agreden pasando por encima de toda una ciudadanía.

Ser aficionado de un equipo de futbol en Nuevo León no puede ser sinónimo de violencia, las familias que solo buscan inculcar en sus hijos el deporte como un medio de sano esparcimiento no puede desaparecer, como tampoco puede desaparecer la seguridad por la decisión propia de malos elementos policiacos, quienes tienen la

alta responsabilidad de brindar y establecer una tranquilidad en la población.

Los cuerpos policiacos no pueden ser inertes ante la violencia, ser omiso por decisión y permitir que los hechos se tornen a graves, es un acto que debe ser sancionado penalmente.

Paremos y erradiquemos a los malos aficionados y a los cuerpos de seguridad que solo buscan poner en riesgo la vida de toda una población.

Ante dicha problemática y en razón de los argumentos antes vertidos, Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Nuevo León, es que someto a su consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforma por adición del Capítulo VIII del Título Segundo Delitos contra la seguridad pública del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO VIII OMISIÓN DELICTIVA
ARTICULO 177 BIS 4.- COMETE EL DELITO DE OMISIÓN DELICITIVA EL QUE SIENDO SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTANDO PRESENTE OMITA EJECUTAR SUS ATRIBUCIONES, AL MOMENTO EN EL QUE SE REALIZA UN HECHO DE VIOLENCIA.

AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO, SE LE IMPONDRAN DE DOS AÑOS A SEIS AÑOS DE

PRISIÓN.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma por adición de un cuarto párrafo el artículo 177 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 177.- DEL PRIMER AL TERCER PÁRRAFO
.....

CUANDO SE EJECUTEN UNO O MÁS DELITOS BAJO LA MODALIDAD DE PANDILLA, Y EL O LOS DELITOS SE IDENTIFIQUEN POR RIVALIDAD DEPORTIVA, SE APLICARÁ POR IGUAL A LOS QUE INTERVENGAN EN SU COMISIÓN, LA PENA MÁS ALTA DEL O LOS DELITOS COMETIDOS.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enriquez Hernandez

[redacted]

13:54hrs

24 SEP 2021

157

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 452 AL 458 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ADICIONAR UN NUEVO TITULO QUE CONTENGA LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de

este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente12870/LXXV, presentada en sesión el24 de septiembre del2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2019, Expediente: 12870/LXXV,

PROMOVENTE DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA, E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SUSCRIBIENDOSE LOS DIPUTADOS MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS Y DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO.

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 452 AL 458 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ADICIONAR UN NUEVO TITULO QUE CONTENGA LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA.

INICIADO EN SESIÓN: 24 de septiembre del2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La función notarial le corresponde al Ejecutivo del Estado, quien tiene la facultad de delegarla en profesionales del derecho en virtud de la patente que les es otorgada, previa satisfacción de los requisitos legales establecidos.

La función notarial tiene lugar al autenticar actos y hechos jurídicos que así lo requieran por su naturaleza o por disposición de la Ley, señalando los principios, obligaciones y prohibiciones a que está sujeta.

Un documen"'J público autentificado por el notario tiene u1a cualidad especial y privilegiada derivada del ejercicio de una potestad otorgada por la ley a ciertos funcionarios. El Notario, por ejemplo, le otorga un valor al documento notarial, pero una vez adquirido, el documento se independiza de su autor, considerado en sentido formal y adquiere vida propia.

La fe pública que es otorgada al documento por el Notario y los efectos que

produce para los actos jurídicos ha tenido un significado relevante en el orden doctrinal.

La fe pública notarial se traduce en los actos autorizados por el Notario, en su carácter de funcionario facultado por el Estado para dotarlo de autenticidad y legalidad.

Ahora bien, este documento surge a raíz de un estudio realizado relativo a los alcances legales que surte la fe pública que los notarios plasman en sus libros, y que son declarados prueba plena en términos de los códigos procesales y otras leyes vigentes en el Estado.

Invariablemente que la función pública puede generar y producir efectos negativos que incluso puede recaer en presunción de algún delito que pueda ser encuadrado tanto cometido por el Notario Publico en el ejercicio de sus funciones, como el del usuario de un servicio notarial que presente documentación apócrifa que pretenda que le sea "legalizada", o en su caso alguna persona que ofrezca funciones de notario público sin mediar la patente otorgada conforme a la ley.

Razones jurídicas suficientes para proponer un nuevo texto al Codigo Penal para el Estado de Nuevo León, adicionando un nuevo Título y con sus Capítulos correspondientes denominados "delitos contra la fe pública" y "delitos de notarios públicos" respectivamente.

Considerando sancionar penalmente al Notario Público que haga constar en escritura pública una propiedad a nombre de una persona física o moral, a sabiendas de que pertenece a otra, que haga constar n un instrumento mediante el cual se materialice un pacto de usura o cualquier otro ue implique la comisión de un delito, Al qué" ·a sabiendas protocolice un acta constitutiva de una persona moral, que constituya simulación de actos jurídicos, o protocolice un acto que implique la violación a una ley.

Con la presente iniciativa se pretende adicionalmente blindar jurídicamente todos y

cada uno de los actos jurídicos que son plasmados y protocolizados en sus respectivos libros para que así conlleven a generar documentos indubitables para todos los efectos contra terceros.

En medios de comunicación hemos conocido de hechos lamentables que suceden por un abuso de la función notarial, cometida por quienes tienen a su cargo la misma.

La pretensión de la presente iniciativa consiste en salvaguardar a toda costa el interés o bien público sobre cualquier interés privado ilegítimo. Por ello se propone tipificar como delitos acciones cometidas o que puedan cometer los notarios públicos en contra de personas físicas o morales.

Razón por la cual se propone tipificar 5 conductas delictivas que pueden cometer los notarios públicos, razón por la cual se propone la redacción de los artículos 452 al 456.

En el artículo 457 se propone establecer como sanción además de la pena de prisión y la multa, la de revocación de la patente para ejercer la función notarial, ello para que la sanción por la conducta delictiva sea ejemplar, además de salvaguardar debidamente el interés o bien público que sobre todas las cosas es el fundamento último de las leyes y en particular del Código Penal, que es el cuerpo normativo que nos ocupa.

También se establece un delito contra la fe pública cometido por particulares mediante la adición del artículo 458, ello para sancionar penalmente a los particulares que proporcionen información falsa al Notario Público, en actos que creen, transmitan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones.

Con estos supuestos normativos, quienes suscribimos la presente iniciativa, estimamos

que se colma la debida salvaguarda del interés o bien .Público en la función notarial,

sobre cualquier interés privado ilegítimo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Título Vigésimo Noveno denominado "Delitos Contra la Fe Pública" que contiene dos Capítulos con los artículos 452 al 458 al Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO VIGÉSIMO NOVENO DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO DELITOS DE NOTARIOS PÚBLICOS
Artículo 452. A quien ejerza la función del notariado sin patente otorgada conforme a la Ley, o ejerza la función cuando la misma le hubiere sido revocada o suspendida, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de doscientas a dos mil cuotas.
Artículo 453. Al notario público que haga constar en escritura pública una propiedad a nombre de una persona física o moral, a sabiendas de que pertenece a otra, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas.
Artículo 454. Al notario público que haga constar en un instrumento mediante el cual se materialice un pacto de usura o cualquier otro que implique la comisión de un delito, se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas.
Artículo 455. Al notario público que protocolice una simulación de actos jurídicos, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de dos doscientas a mil cuotas.
Artículo. 456. Al notario público que protocolice un acto que implique la violación a una ley, se le impondrá una pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a quinientas cuotas.

Artículo 457. En caso de la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 452, 453, 454, 455 y 456 de este Capítulo se impondrá además la revocación de la patente para el ejercicio de la función del notariado.

CAPÍTULO SEGUNDO
DELITO DE PARTICULARES CONTRA LA FE PÚBLICA

Artículo 458. A quien proporcione, a un notario público, información o datos falsos para que se hagan constar en un instrumento público, sobre hechos o actos jurídicos destinados a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

xc

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:50 hrs

24 SEP 2021

158

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar:"INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 16 BIS, EL TITULO QUINTO DEL LIBRO SEGUNDO PARA DENOMINARSE "DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA"Y LOS ARTICULOS 196 PARRAFO QUINTO, 203 Y 204 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a*

comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente12853/LXXV, presentada en sesión el11 de septiembre del 2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2019, Expediente: 12853/LXXV,

PROMOVENTE: DIP. FÉLIX ROCHA ESQUIVEL E INTEGRANTES DEL GRUO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 16 BIS, EL TITULO QUINTO DEL LIBRO SEGUNDO PARA DENOMINARSE "DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA"Y LOS ARTICULOS 196 PARRAFO QUINTO, 203 Y 204 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 11 de septiembre del 2019
SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin duda, la dinámica diaria en la búsqueda de un mejor funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones del Poder Legislativo nos hace buscar nuevas formas y mecanismos de privilegiar los consensos, superar formalismos, e interpretar la normatividad aplicable, en aras de generar más y mejores acuerdos legislativos.

La exigencia social requiere de claridad, eficacia y un trabajo que dé respuesta pronta y expedita a las necesidades de todos los nuevoleoneses, a la par de realizar una labor responsable y de certeza en las actividades legislativas a las que nos enfrentamos.

En los años 2008, 2011 y 2019 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, Decretos por lo que se declara reformadas y adicionadas

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en su artículo 19 , párrafo segundo , el concepto de prisión preventiva oficiosa, que me permitiré reproducir para su mejor percepción:

"El Ministerio Público sólo *podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos* o *de la comunidad,* así *como cuando el imputado esté siendo procesado* o *haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los* casos *de abuso* o *violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de* casa *habitación,* uso *de programas* social es *con fines electorales, corrupción tratándose de* los *delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de* sus *modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos* o *petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos* como armas *y explosivos, delitos en materia de* armas *de fuego y explosivos de* uso *exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así* como *los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud* ".

En el Código Penal para el Distrito Federal en su Titulo Quinto se menciona el género de delitos denominado "delitos contra el libre desarrollo de la personalidad", por lo que en nuestro Código Penal para el Estado de Nuevo León, el equivalente son los "Delitos contra la Moral Pública".

Por todo ello, es que proponemos mediante esta iniciativa que pretende homologar nuestro Código Penal en su Título Quinto denominado "Delitos contra la Moral Pública" adecuándonos al género de delitos que se menciona

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tuvo como inspiracion el Código Penal para el Distrito Federal .

Como podemos ver, existen elementos muy novedosos en dicha descripción que pueden ser tomados en cuenta por nosotros para ampliar el ámbito de protección del bien jurídico que busca tutelar el tipo penal conocido como "delitos contra el libre desarrollo de la personalidad".

El artículo 16 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León que establece el catálogo de delitos graves en nuestra Entidad, contraviene lo estipulado en el artículo 19 en su párrafo segundo de nuestra Carta Magna, por lo que propone suprimir del mismo, todos los delitos que no contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, en congruencia con la Carta Magna, se dispone en el artículo 16 bis como delitos graves, es decir, sujetos a prisión preventiva oficiosa, los establecidos en los artículos 196, 197, 197 BIS, 200 BIS, 201 BIS, 201 BIS 2 y 202 de nuestro Código Penal, por enmarcarse estos dentro del género de delitos denominados por la Carta Magna "DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD", además de los delitos graves del fuero comCm . . que ya se establecen en el articulo 19 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello en atención a una técnica legislativa depurada se redacta en la forma que se propone el artículo 16 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

En nuestro Código Penal para el Estado de Nuevo León , se establece en su artículo 202, el delito de lenocinio , que me permitiré reproducir para su mejor percepción:

ARTICULO 202.- COMETE EL DELITO DE LENOCINIO:

I.-TODA PERSONA QUE EXPLOTE EL CUERPO DE OTRA POR MEDIO DEL COMERCIO CARNAL Y OBTENGA DE EL UN LUCRO CUALQUIERA:

11.- EL QUE INDUZCA O SOLICITE A UNA PERSONA PARA QUE CON OTRA COMERCIE SEXUALMENTE CON SU CUERPO O LE FACILITE LOS MEDIOS PARA QUE SE ENTREGUE A LA PROSTITUCION;

111.- EL QUE REGENTEE, ADMINISTRE O SOSTENGA PROSTIBULOS, CASAS DE CITA O LUGARES DE CONCURRENCIA, EN DONDE SE EXPLOTE LA PROSTITUCION U OBTENGA CUALQUIER BENEFICIO CON SUS PRODUCTOS; Y

IV.- EL QUE OCULTE, CONCIERTE O PERMITA EL COMERCIO CARNAL DE UN MENOR DE EDAD.

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su *CAPÍTULO 11 "DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS"* en su artículo 13 se establecen los elementos subjetivos que deben acreditarse para imputar el tipo penal de prostitución ajena equivalente al delito de lenocinio de nuestro Código Penal, que para su mayor entendimiento me permitiré reproducir.

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mi/días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones
públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

I. El engaño;

I/. La violencia física o moral;

El abuso de poder;

El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

Daño grave o amenaza de daño grave; o

La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a /as

exigencias del activo.

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de /os medios a /os que hace referencia el presente artículo.

En vista que para procesar penalmente a un sujeto activo del delito por prostitución ajena es necesario acreditar cualquiera de los elementos subjetivos que se enuncian en las fracciones 1 a VI del artículo 13 de la citada ley, y como en el tipo penal de lenocinio del Código Penal para el Estado de Nuevo León, se establecen distintos elementos del tipo penal, los cuales son mas fáciles de acreditar, además de supuestos distintos como el establecido en la fracción 111 del artículo 202, es por lo que consideramos procedente mantener los tipos penales del delito de lenocinio dispuestos en nuestro Código Penal , estipulados en el artículo 202; sólo se considera oportuno modificar su penalidad para hacerla equivalente al de prostitución ajena que se dispone en la "Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", para ello se modificarían los artíuclos 203 y 204.

De esta manera se logra armonizar nuestro Código Penal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de

homologar la penalidad del delito de prostitución ajena y del delito de lenocinio.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional somete a la aprobación de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman el artículo 16 bis, el Titulo Quinto del Libro Segundo para denominarse "Delitos contra el libre desarrollo de la

personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta" y los artículos 196 párrafo quinto, 203 y 204 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16 BIS.- Para todos los efectos legales se califican como delitos graves consignados en esté Código, además de los que se establecen en la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, los casos previstos en los artículos 196, 197, 197 bis, 200 bis, 201 bis, 201 bis 2 y 202.

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA

ARTÍCULO 196.- (...)
1 a IV.- (...)
(...)
(...)
(...)
La conducta prevista en la fracción 111 , inciso e) de este artículo, será sancionada con pena de prisión de cuatro a doce años y multa de doscientos cincuenta a setecientas cincuenta cuotas.
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
ARTÍCULO 203.- El lenocinio se sancionará con prisión de quince a treinta años y multa de mil a treinta mil cuotas.
ARTICULO 204.- Si el delincuente fuere ascendiente, adoptante, tutor o curador, cónyuge o concubinario o concubina, o tuviere cualquier otra autoridad sobre la persona explotada, además sera privado de todo

derecho sobre los bienes de aquella, en su caso, e inhabilitado para ser tutor o curador, para el ejercicio de la patria potestad o para ejercer las funciones u ocupacion en virtud de las cuales ejercía aquella autoridad.

TRANSITORIO

UNICO .- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enrique[redacted] Hernández

[redacted]

13:51 hrs

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 159

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR "ADICIONDEL TITULO DECIMOQUINTO BIS 1 QUE ADICIONA A SU VEZ LOS ARTICULOS 331 BIS 7 Y 331 BIS 8, AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.

- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso*

de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente12228/LXXV, presentada en sesión el 30 de octubre del 2018, turnada a las comisión de Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2018, Expediente: 12228/LXXV,

PROMOVENTE: DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL TITULO DECIMOQUINTO BIS 1 QUE ADICIONA A SU VEZ LOS ARTICULOS 331 BIS 7 Y 331 BIS 8, AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
INICIADO EN SESIÓN: 30 de octubre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones: no aceptan que están siendo maltratados o bien tienen temor a las represalias pues quien lo ejerce es con frecuencia el único familiar con el que cuentan; creen que es temporal; no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no le permiten realizar una denuncia.

El maltrato tiene un gran impacto en las personas adultas mayores, a nivel físico altera el control de sus enfermedades crónicas; en ocasiones provoca daños irreversibles en más de un órgano, lo que lo lleva al ingreso frecuente al sistema hospitalario, o a una demanda constante de atención médica, o a el incremento en la ingesta de medicamento y/o procesos de convalecencia prolongados.
Los daños psicológicos favorecen la aparición de síntomas depresivos, aislamiento,

sentimientos de impotencia, baja autoestima, culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de autonomía y estrés, lo cual puede aumentar el riesgo de muerte.

A nivel social la familia se fractura, las instituciones pierden credibilidad y se generan gastos secundarios por la atención.
Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi 201O, en México suman 10.1
millones de adultos mayores, de las cuales 53.4% son mujeres y 46.6% varones. La dependencia económica de las personas adultas mayores, se observa en más de la mitad de esa población. A seis de cada diez personas adultas mayores las sostiene un familiar u otra persona. Sólo 2.7 personas de cada diez reciben pensión por su trabajo.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 201O arrojó los siguientes datos:
La población de mujeres adultas mayores que viven sin pareja es mayor que la de los hombres. El 75.6% de las mujeres adultas mayores depende económicamente de algún familiar u otra persona.

Seis de cada cien hombres y mujeres adultas mayores, tienen una limitación para moverse, caminar o lo hacen con ayuda de alguien.

En nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3% describe como sus problemas principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9% los laborales.
La violencia psicológica, comunitaria y sobre todo doméstica que se ejerce contra los adultos mayores, se incrementa día a día, y pareciera un fenómeno generalizado imposible de detener.

No hace muchos años los adultos mayores en México se consideraban como las personas más conocedoras, y por ende se les tenía un profundo

respeto. Se acudía a ellos para consultarles sobre sus famosos "remedios caseros" y buenos consejos.

Si bien es cierto, en México se ha presentado un adelanto en políticas públicas y legislación en torno al tema, consideramos que dichas políticas públicas y la legislación creada, no han sido suficientes para su correcto cuidado, ya que, son medidas preventivas, y no erradican el problema ni tampoco sancionan a los que maltratan a los adultos mayores.

Este sector de la población tiene derecho a la integridad, dignidad y preferencia, a acceder a una vida plena, con calidad, libre de violencia y sin discriminación. Además debe gozar de respeto a su integridad física y psico-emocional y sexual y ser protegido contra cualquier forma de explotación. Es por ello que acudimos a promover el siguiente Proyecto de reforma por adición del Título Décimo Quinto Bis 1 con sus respectivos artículos al Código Penal del Estado de Nuevo León.

La reforma propuesta busca sancionar penalmente a quienes dañen física, psicológica, mediante abuso sexual, patrimonial, financiera o estructuralmente a las personas adultas mayores, e incluso se considera más grave dicha sanción si el activo del delito es familiar del pasivo.

DECRETO

Único: Se reforma por adición del Título Décimo Quinto bis 1 que adiciona a su vez los artículos 331 bis 7 y 331 bis 8, al Código Penal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"TITÚLO DÉCIMO QUINTO BIS 1 DELITOS CONTRA LOS ADULTOS MAYORES
Artículo 331 Bis 7.- Comente el delito de maltrato contra adultos mayores a aquel que cause daño o sufrimiento a una persona de 60 años o más.
Para los efectos de éste artículo los tipos de maltrato son:

I.Físico.- Cualquier acto no accidental, que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, producido por fuerza física o algún otro medio que pueda

provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, en base al dictamen emitido por los especialistas en la materia.

II. Psicológico.- Daño que provoca angustia, desvalorización, sufrimiento mediante actos verbales o no verbales.

Abuso sexual.- El acto que degrada o daña la sexualidad de la victima, atentando contra su libertad, dignidad, e integridad física configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la victima, denigrándola y considerándola como de menor valía o como objeto, en base al dictamen emitido por los especialistas en la material.

Patrimonial.- La acción u omisión que daña intencionalmente el

patrimonio o afecta la supervivencia de la victima, puede consistir en la transformación , sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, d rechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes.

Explotación financiera.- Uso ilegal o impropio de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor.

Estructural.- Deshumanizar el trato hacia el adulto mayor en las oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, discriminarlos y marginarlos de la seguridad y bienestar social,

Artículo 331 Bis 8.- A quién cometa el delito de maltrato contra adultos mayores se le impondrá una sanción de 2 a 6 años de prisión; pérdida de los derechos hereditarios; se le sujetará a tratamiento integral ininterrumpido dirigido a la rehabilitación médico-psicológica, conforme a lo dispuesto por el art. 86 de éste

código. También deberá pagar este tipo de tratamientos, hasta la recuperación de la salud integral de la persona agredida.

Al que ejerza cualquier tipo de maltrato hacia un adulto mayor que sea familiar
o se encuentre a su cuidado de forma voluntaria o reenumerada, la pena se aumentará hasta en una mitad."

TRANSITORIOS
Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:51h.

24 SEP 2021

160

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACION EL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCIÓN 11, DEL ARTÍCULO 52, EL TERCER, SEPTIMO Y ÚLTIMO PARRAFOS, DEL ARTÍCULO 207 BIS; Y POR DEROGACIÓN DE LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 207 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo de Nueva Alianza identificándose con expediente 13367/LXXV presentada en sesiòn el dia 26 de febrero del 2020, Turnada a la comisiòn de: Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo de Nueva Alianza y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:
Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente. La presente iniciativa se podía identificar bajo la siguiente información:

Año:2020;Expediente: 13367/LXXV

PROMOVENTE: DIP. MARÍA DOLORES LEAL CANTÚ, COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DE NUEVA ALIANZA

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACION EL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCIÓN 11, DEL ARTÍCULO 52, EL TERCER, SEPTIMO Y ÚLTIMO PARRAFOS, DEL ARTÍCULO 207 BIS; Y POR DEROGACIÓN DE LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 207 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 26 de febrero del 2020

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Exposición de Motivos:

En la sesión del Pleno del Congreso del Estado, celebrada el 30 de septiembre de 2019, se aprobó el Decreto No 241, publicado en el Periódico Oficial del Estado que contiene diversas reformas al Código Penal del Estado en materia anticorrupción.

El objetivo de las aludidas reformas, fue homologarlas con las respectivas del Código Penal Federal; lo que se logró prácticamente en la totalidad de los artículos.

La reforma comprendió entre otras cosas, modificar la denominación del Título Séptimo" DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS", que consta del artículo 207 BIS, por "DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN", además de la reforma a dicho artículo .

Sin embargo, la reforma a dicho numeral, contiene errores de técnica legislativa, además de infringir principios y derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incluir la **inhabilitación permanente, como sanción adicional, para los servidores públicos y particulares.**

En apoyo a nuestra postura, se transcribe textualmente el citado numeral:

"ARTÍCULO 207 BIS.- PARA EFECTOS DE ESTE TÍTULO Y EL SUBSECUENTE SON SERVIDORES PÚBLICOS LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR; LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑEN UN

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS MUNICIPIOS, O EN LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS; Y LAS PERSONAS QUE MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS.

SE IMPONDRÁN LAS MISMAS SANCIONES PREVISTAS PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE A CUALQUIER PERSONA QUE SE BENEFICIE O PARTICIPE EN LA COMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE TÍTULO O EL SUBSIGUIENTE, TENGA O NO EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO.

*DE MANERA ADICIONAL A DICHAS SANCIONES, SE IMPONDRÁ A LOS RESPONSABLES DE SU COMISIÓN, LA PENA DE DESTITUCIÓN Y LA **INHABILITACIÓN** TEMPORAL O **PERMANENTE** PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES,*

ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, CONCESIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O DE EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

PARA EFECTOS DE ESTE TÍTULO Y EL SUBSECUENTE, TRATÁNDOSE DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL, CUANDO NO SE CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS, NI EXISTA BENEFICIO O LUCRO ALGUNO, O CUANDO EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO NO EXCEDA DE MIL QUINIENTAS CUOTAS, LA INHABILITACIÓN SERÁ POR UN PLAZO DE UNO HASTA DIEZ AÑOS.

LA INHABILITACIÓN PERMANENTE PROCEDERÁ SI EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISION DEL DELITO EXCEDE DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, EL JUEZ DEBERÁ CONSIDERAR, EN CASO DE QUE EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 226 BIS 1 DE ESTE CÓDIGO, LOS ELEMENTOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE DESEMPEÑABA CUANDO INCURRIÓ EN EL DELITO.

CUANDO EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE PARTICULAR, EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL O ***PERMANENTE*** *PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PÚBLICO, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, EN EL ESTADO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LO SIGUIENTE:*

1.- LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR LOS ACTOS U OMISIONES;

11.- LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL RESPONSABLE;

111.- LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN;
Y

IV.- EL MONTO DEL BENEFICIO QUE HAYA OBTENIDO EL RESPONSABLE.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA CATEGORÍA DE FUNCIONARIO O EMPLEADO DE CONFIANZA AGRAVARÁ LAS PENAS PREVISTAS HASTA EN UN TERCIO.

CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 208, 215, 217, 219 BIS Y 223 BIS, DEL PRESENTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS POPULARMENTE O CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ SUJETO A RATIFICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UN TERCIO.

CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE TÍTULO DE ESTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD". (Énfasis añadido)

Como se desprende de la lectura del artículo, la inhabilitación permanente, como sanción adicional, en el caso de servidores públicos por delitos derivados de hechos de corrupción, se establece en el tercer párrafo del artículo y se cuantifica en el quinto, cuando el beneficio obtenido excede de **mil quinientas cuotas.**

De la misma manera, en el sexto párrafo del artículo se establece que para imponer la inhabilitación temporal, "e/ *juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 226 Bis 1 de este código, los elementos del empleo, cargo* o *comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito*

Adicionalmente, en el séptimo párrafo artículo, se prevé la inhabilitación permanente, tratándose de particulares.

A su vez, el precitado artículo 226 bis 1 del Código Penal vigente, establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 226 BIS 1.- **ADEMÁS DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 47 DE ESTE CÓDIGO,** PARA LA INDIVIDUALIZACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN ESTE TITULO Y EN EL PRECEDENTE, EL JUEZ TOMARÁ EN CUENTA, EN SU CASO, EL NIVEL JERÁRQUICO DEL SERVIDOR PÚBLICO, Y EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL ENCARGO, SU ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO, SUS ANTECEDENTES DE SERVICIO, SUS PERCEPCIONES, SU GRADO DE INSTRUCCIÓN, LA NECESIDAD DE REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA CONDUCTA ILÍCITA Y LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO".(Énfasis
añ
ad
id
o)

Por su parte, el artículo 47 del mismo código, indica que:

"ARTICULO 47.- EL JUEZ FIJARA DENTRO DE LOS MINIMOS Y MAXIMOS LEGALES LA SANCION, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, EN CUANTO LA LEY NO LAS CONSIDERE ESPECIFICAMENTE COMO CONSTITUTIVAS DEL DELITO O *MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD:*

1.- LOS ASPECTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DEL DELITO;

11.- LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN O *LA IMPORTANCIA DEL PELIGRO A QUE HUBIERE SIDO EXPUESTO UN BIEN JURÍDICO PROTEGIDO;*

111.- LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR;

IV.- LA CALIDAD DE LA FORMA Y GRADO DE INTERVENCIÓN DEL SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DEL DELITO Y LA DE LA VÍCTIMA;

V.- LA EDAD, LA INSTRUCCIÓN, LAS COSTUMBRES, LOS MOTIVOS QUE LO IMPULSARON O *DETERMINARON A DELINQUIR, LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO Y DE LA VÍCTIMA, EN SU CASO, EN LA MEDIDA QUE HAYAN INFLUIDO EN LA REALIZACIÓN DEL DELITO. CUANDO EL PROCESADO PERTENECIERE A UN GRUPO ÉTNICO* O *INDÍGENA, SE TOMARÁN EN CUENTA, ADEMÁS, SUS USOS Y COSTUMBRES; Y*

VI.-LA CONDUCTA POSTERIOR AL DELITO.

PARA LOS EFECTOS ANTERIORES EL JUEZ DEBERÁ TOMAR CONOCIMIENTO DIRECTO DEL SUJETO

ACTIVO Y DE LA VÍCTIMA, EN SU CASO, Y DE LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE IMPORTANTES EN CADA CASO, Y QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE PROBADAS, RAZONANDO SU CRITERIO PERSONAL AL RESPECTO, EN LAS CONSIDERACIONES DE SU SENTENCIA"-

Como se desprende de la literalidad de los dos artículos anteriores, **el juez antes de imponer la inhabilitación permanente**, deberá considerar que el responsable tenga el carácter de servidor público; así como los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito, **además, de lo dispuesto por el artículo 47 del Código Penal.**

Dicho artículo preceptúa entre otras cosas, que el juzgador fijará la sanción, **dentro de los máximos y mínimos legales,** considerando los aspectos objetivos y subjetivos del delito; la gravedad de la infracción, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la calidad de la forma y grado de intervención del sujeto activo en la Comisión del delito y la de la víctima; la edad, la instrucción, las costumbres, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, las condiciones sociales, económicas y antecedentes personales del sujeto activo y de la víctima y la conducta posterior al delito, el nivel jerárquico del servidor público, y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.

Por lo tanto, **resulta antijurídico, que con todos estos elementos para individualizar la sanción, el operador jurídico no tenga otra opción, que aplicar la inhabilitación definitiva.**

Bastaría con exhibir esta evidente contradicción de la reforma al 207 Bis del Código Penal del Estado, para tildarla de ilegal.

A mayor abundamiento, en la sesión del 14 de enero del año en curso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver las *Acciones de Inconstitucionalidad 13512017 y su acumulada 15612017* promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 295 del Código Penal para el Estado de Jalisco, resolvió lo siguiente:

PRIMERO.- SON PROCEDENTES Y FUNDADADAS INCONSTITUCIONALIDAD 155/2017 y su acumulada 156/2017.

LAS ACCIONES DE

SEGUNDO- SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS **"Y MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION"**, ASÍ COMO " **Y LA INHABILITACION DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"** DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.....Y POR EXTENSIÓN LA DEL ARTÍCULO 295 EN LA

PORCIÓN NORMATIVA "" Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, ...

TERCERO.- PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTFÍQUESE;" ..." (Énfasis añadido)

Como se desprende la resolutoria, el más Alto Tribunal de la Nación declaró la invalidez del artículo 295 del Código Penal de Jalisco, en las porciones normativas "MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN," Y "LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"

El artículo 295 del Código Penal del Estado de Jalisco controvertido, antes de su posterior reforma, establecía lo siguiente:

"Artículo 295.- Se impondrá pena de uno a ocho años de prisión y multa de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a las personas que promuevan, subsidien o dirijan algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente descritos en este ordenamiento, según la gravedad del daño ambiental causado y la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública". (Énfasis añadido).

Bajo la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros, se pronunciaron por la invalidez de la porción normativa del artículo" multa de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización", por considerar excesiva la sanción y tasarse como cantidad fija.

Adicionalmente, consideraron que *la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública, trasgrede el* principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no permitir la graduación de la pena.

La resolución fue aprobada por unanimidad de votos, con las reservas de los Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Piña Hernández.

Considerando que la figura de la inhabilitación definitiva también se incluyó en diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León- también propondremos reformar con otra iniciativa-, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, estima necesario, para enriquecer la presente reforma, reproducir algunos de los alegatos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sustentaron las referidas Acciones de Inconstitucionalidad:

a.- La inhabilitación definitiva resulta violatoria de los principios de legalidad, derecho de seguridad jurídica y proporcionalidad de las penas, a que se refieren los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que se transcriben en la parte que interesa.

Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. *(...)"*

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. *En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.. .)"*

"Artículo 22. ***Quedan prohibidas las penas de muerte,*** *de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas* ***inusitadas*** *y trascendentales.* ***Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.(...)"***

b).- Aunque el legislador tiene libertad configurativa para diseñar su política criminal, al elegir los bienes jurídicos sujetos a tutela, las conductas típicas y las sanciones correspondientes, de acuerdo con las condiciones sociales; esta libertad no es absoluta, al encontrarse acotada al respeto de los principios y derechos consagrados en la Constitución Federal, entre ellos, los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:

"LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que **aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México,** de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos **está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos,** de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales". (Énfasis añadido)

e).- La sanción de inhabilitación definitiva, al constituir una sanción fija e invariable que no acepta un límite mínimo y un máximo de aplicación, imposibilita que el juzgador individualice la pena, resulta violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales; según lo indica la siguiente jurisprudencia, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:

"INHABILITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 129, 131, 133, 136 Y 259 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECEN DICHA PENA POR UN TÉRMINO DE VEINTE AÑOS SIN SEÑALAR LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 (ESTE ÚLTIMO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DE 2008) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la interpretación estricta (propia de la materia penal) de los citados artículos del Código Penal del Estado de México(antes de la entada en vigor del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de enero de 2006), en la parte que contienen la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, se concluye que prevén una sanción fija y excesiva y, por tanto, violatoria de los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que al señalar las penas correspondientes por las conductas antijurídicas que describen, además de las privativas de libertad y pecuniaria, establecen la pena de inhabilitación del servidor público que hubiere cometido el delito, por el término invariable e inflexible de veinte años,. En efecto, *la pena de inhabilitación prevista en los aludidos preceptos legales es excesiva y por ende, inconstitucional, porque no señalan bases suficientes para que la autoridad judicial la individualice; y especialmente porque no permite establecer su determinación en relación con la responsabilidad del sujeto infractor. Además, al estar configurada dicha pena en un lapso fijo, la inflexibilidad que ello supone no permite que exista la proporcionalidad y razonabilidad suficientes, entre su imposición y la gravedad del delito cometido, habida cuenta que el establecimiento de un plazo fijo impide que para su aplicación judicial se tomen en cuenta, entre otros factores, el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que se individualice entre un mínimo y un máximo, así como el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo". (Énfasis añadido)*

d).- El principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, constituye una garantía para las personas de que las leyes estén redactadas de forma clara y suficientemente determinadas. Lo anterior, se desprende de la siguiente Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.

El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, **la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.** Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes

potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas".(Énfasis añadido)

La argumentación hasta aquí expuesta, resulta aplicable para la reforma al artículo 207 Bis del Código Penal del Estado, dado que si bien se señala la consecuencia jurídica del delito, la disposición no precisa una duración mínima y máxima de la sanción; al establecer la inhabilitación definitiva. En estas condiciones, no existe certeza jurídica a quien se le aplique la sanción: además, no permite al operador jurídico la individualización de manera gradual a la gravedad del ilícito, considerando el grado de culpabilidad de la persona.

Lo impreciso de la disposición al no señalar expresamente un límite mínimo y máximo de la pena, ocasiona que los destinatarios de la norma se encuentren en la incertidumbre de conocer si el operador jurídico considerará todos los elementos para una correcta y adecuada imposición de la misma, en virtud de que la autoridad sancionadora no tiene otra opción que imponer siempre la misma pena, independientemente de la gravedad de la responsabilidad.

Por lo anterior, el legislador debe establecer en la norma penal una sanción con un límite mínimo y un máximo, que permita individualizar la pena, para que exista proporción y racionalidad suficiente entre la cuantía de la misma y la gravedad del delito en pleno respeto del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

En consecuencia, lo procedente es dejar sin efectos el artículo 207 Bis en la porción normativa del tercer párrafo:" **O PERMANENTE",** así como la porción normativa del cuarto párrafo: **"LA INHABILITACIÓN PERMANENTE PROCEDERÁ SI EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO EXCEDE DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR"** y la porción normativa del séptimo párrafo: **"O PERMANENTE"**

Sin embargo, con estas consideraciones, una nueva redacción del artículo 207 Bis, resultaría alejada del artículo 212 del Código Penal Federal, que es el artículo con el que debe homologarse, de acuerdo con la técnica legislativa.

Dicho artículo establece textualmente lo siguiente.

"Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en

materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

/.-.Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

11.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

l.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones,·
11.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
111.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio".

En consecuencia, la reforma que proponemos a los artículos 47 y 207 Bis del Código Penal del Estado, para eliminar inhabilitación definitiva, como sanción, se visualizan mejor, en el siguiente cuadro comparativo:

Dice:	Se propone que diga:
ARTICULO 52.- LA INHABILITACION, SUSPENSION Y PERDIDA DE DERECHOS, ES DE DOS CLASES: I.- LA QUE POR MINISTERIO DE LEY RESULTE DE UNA SANCION, COMO CONSECUENCIA NECESARIA DE ESTA, Y II.- LA QUE POR SENTENCIA SE IMPONE COMO SANCION. EN CUANTO A LA PRIMERA CLASE, LA INHABILITACION, SUSPENSION Y PERDIDA DE DERECHOS, COMIENZA Y CONCLUYE CON LA SANCION DE QUE ES CONSECUENCIA. PARA LA SEGUNDA CLASE, SI SE IMPONE CON OTRA SANCION PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, COMENZARA AL TERMINAR ESTA, Y SU DURACION SERA LA SEÑALADA EN LA SENTENCIA. LA INHABILITACIÓN CONSISTE EN LA INCAPACIDAD DECRETADA POR EL JUEZ PARA QUE UN SERVIDOR PUBLICO PUEDA OCUPAR UN CARGO PUBLICO DE NOMBRAMIENTO O ELECCIÓN POPULAR, DURANTE LOS TERMINOS QUE FIJE LA LEY Y PODRA SER TEMPORAL O PERMANENTE. LA SUSPENSION CONSISTE EN LA PRIVACION TEMPORAL DE LOS DERECHOS CIVILES O POLITICOS QUE MARCA LA LEY POR EL LAPSO SEÑALADO EN LA MISMA, SIN QUE PUEDA SER MAYOR DE SEIS AÑOS. LA PERDIDA DE LOS DERECHOS CIVILES O POLITICOS ES LA PRIVACION DEFINITIVA EN LOS CASOS ESPECIALMENTE SEÑALADOS POR LA LEY.	ARTICULO 52 - ... I - a II - ... ... LA INHABILITACION CONSISTE EN LA INCAPACIDAD DECRETADA POR EL JUEZ PARA QUE UN SERVIDOR PUBLICO PUEDA OCUPAR UN CARGO PUBLICO DE NOMBRAMIENTO O ELECCIÓN POPULAR, DURANTE LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY Y PODRA SER TEMPORAL O PERMANENTE. ... ...
ARTÍCULO 207 BIS.- PARA EFECTOS DE ESTE TITULO Y EL SUBSECUENTE SON SERVIDORES	ARTICULO 207 BIS - ...

PUBLICOS LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑEN UN EMPLEO CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LOS PODERES EJECUTIVO LEGISLATIVO O JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS MUNICIPIOS O EN LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS; Y LAS PERSONAS QUE MANEJEN RECURSOS ECONOMICOS DEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS	
SE IMPONDRAN LAS MISMAS SANCIONES PREVISTAS PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE A CUALQUIER PERSONA QUE SE BENEFICIE O PARTICIPE EN LA COMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE TITULO O EL SUBSIGUIENTE, TENGA O NO EL CARACTER DE SERVIDOR PUBLICO	...
DE MANERA ADICIONAL A DICHAS SANCIONES, SE IMPONDRÁ A LOS RESPONSABLES DE SU COMISIÓN LA PENA DE DESTITUCIÓN Y LA INHABILITACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PUBLICOS, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PUBLICAS, CONCESIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO O DE EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	DE MANERA ADICIONAL A DICHAS SANCIONES, SE IMPONDRÁ A LOS RESPONSABLES DE SU COMISIÓN LA PENA DE DESTITUCIÓN Y LA INHABILITACIÓN ~~TEMPORAL O PERMANENTE~~ PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PUBLICOS, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PUBLICAS, CONCESIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO O DE EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: **I.- SERA POR UN PLAZO DE UNO HASTA DIEZ AÑOS CUANDO NO EXISTA DAÑO O PERJUICIO O CUANDO EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO NO EXCEDA DE DOSCIENTAS VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, Y** **II.- SERÁ POR UN PLAZO DE DIEZ A VEINTE AÑOS SI DICHO MONTO EXCEDE EL LIMITE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR**
PARA EFECTOS DE ESTE TITULO Y EL SUBSECUENTE, TRATÁNDOSE DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL, CUANDO NO SE CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS, NI EXISTA BENEFICIO O LUCRO ALGUNO, O CUANDO EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO NO EXCEDA DE MIL QUINIENTAS CUOTAS, LA INHABILITACIÓN SERÁ POR UN PLAZO DE UNO HASTA DIEZ AÑOS	DEROGADA
LA INHABILITACIÓN PERMANENTE PROCEDERÁ SI EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O EL BENEFICIO	DEROGADA

OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO EXCEDE DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, EL JUEZ DEBERÁ CONSIDERAR, EN CASO DE QUE EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 226 BIS 1 DE ESTE CÓDIGO, LOS ELEMENTOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE DESEMPEÑABA CUANDO INCURRIÓ EN EL DELITO.	
CUANDO EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE PARTICULAR, EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PÚBLICO, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, EN EL ESTADO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LO SIGUIENTE:	CUANDO EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE PARTICULAR, EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PÚBLICO, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, EN EL ESTADO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LO SIGUIENTE:
I.- LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR LOS ACTOS U OMISIONES; II.- LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL RESPONSABLE; III.- LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN, Y IV.- EL MONTO DEL BENEFICIO QUE HAYA OBTENIDO EL RESPONSABLE.	I.- a IV.-
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA CATEGORÍA DE FUNCIONARIO O EMPLEADO DE CONFIANZA AGRAVARÁ LAS PENAS PREVISTAS HASTA EN UN TERCIO.	
CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 208, 215, 217, 219 BIS Y 223 BIS, DEL PRESENTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS POPULARMENTE O CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ SUJETO A RATIFICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UN TERCIO.	
CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE TÍTULO DE ESTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD.	CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIEREN **LOS ARTÍCULOS 209, 214 BIS Y 215** DE ESTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD.

El último párrafo que se propone adicionar al artículo 207 Bis, corresponde a la homologación con el artículo 213 Bis, del Código Penal Federal, que a la letra dice:

"Artículo 213 Bis.- Cuando los delitos a *que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policíaca, aduanera* o *migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad".*

Los artículos 215, 219 y 222, corresponden a los delitos de **abuso de autoridad, intimidación** y **cohecho,** respectivamente.

En el Código Penal del Estado de Nuevo León, los citados artículos, corresponden a los artículos 209, 214 BIS y 215, respectivamente.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos atentamente a la presidencia, dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente

Decreto:

Artículo Único. -Se **reforma por modificación, el cuarto párrafo de la fracción 11, del artículo 52, el tercer, séptimo y último párrafos, del artículo 207 Bis; y por derogación de los párrafos cuarto y quinto del artículo 207 Bis, todos del Código Penal del Estado de Nuevo León,** para quedar como sigue:

ARTICULO 52.- ...

I a II

....

....

LA INHABILITACIÓN CONSISTE EN LA INCAPACIDAD DECRETADA POR EL JUEZ PARA QUE UN SERVIDOR PÚBLICO PUEDA OCUPAR UN CARGO PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO O ELECCIÓN POPULAR, DURANTE LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY.

....

....

ARTICULO 207 BIS.- ...

DE MANERA ADICIONAL A DICHAS SANCIONES, SE IMPONDRÁ A LOS RESPONSABLES DE SU COMISIÓN, LA PENA DE DESTITUCIÓN Y LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, CONCESIONES DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O DE EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

I.- SERÁ POR UN PLAZO DE UNO HASTA DIEZ AÑOS CUANDO NO EXISTA DAÑO O PERJUICIO O CUANDO EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DEL DELITO NO EXCEDA DE DOSCIENTAS VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y

II.- SERÁ POR UN PLAZO DE DIEZ A VEINTE AÑOS SI DICHO MONTO EXCEDE EL LÍMITE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR.

DEROGADA

DEROGADA

....

CUANDO EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE PARTICULAR, EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PÚBLICO, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, EN EL ESTADO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LO SIGUIENTE:

I.- a IV.- ...

CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 209, 214 BIS Y 215 DE ESTE CÓDIGO SEAN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD

Transitorio:

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado

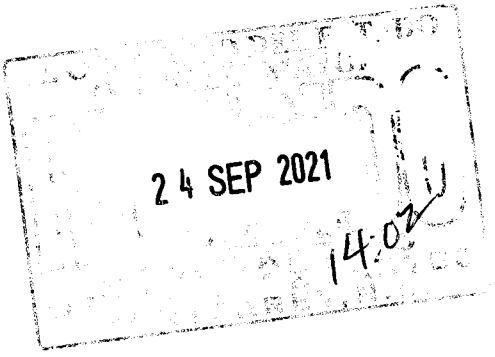
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

161

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **Iniciativa de reforma al articulo 111 fracción III párrafo tercero del código penal para el Estado de Nuevo León, relativo al perdón otorgado por la víctima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarlo**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Juan Carlos Leal Segovia y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2020; Expediente: 13285/LXXV;

Promovente: Diputado Juan Carlos Leal Segovia;

asunto: Iniciativa de reforma al articulo 111 fracción III párrafo tercero del código penal para el Estado de Nuevo León, relativo al perdón otorgado por la víctima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarlo; Iniciado en sesión: 22 de enero del 2020; se turnó a la (s) comision (es): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La violencia familiar o doméstica es realizada por un sujeto que pertenece a la familia, la cual debe ser entendida como una institución social en donde se concatenan diferentes personas con un parentesco en el que dicho sujeto (agresor), de manera ilegal (sin una causa legitima o jurídicamente valida), ocasiona en su círculo familiar con el motivo de daño o manipulación, lesiones físicas, psicológicas y/o sexuales.

La violencia psíquica o física dentro del núcleo familiar debe ser entendida como aquella que comprende toda la forma de abusos que tiene lugar entre los individuos que conforman una familiar. La relación de abuso doméstico es producto de una acción u omisión por uno de sus miembros que por ser continua y crónica causa daños físicos y psíquicos a otro miembro de la familia.

La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre la persona.

En general la persona abusiva pone en situaciones de peligro la integrida,d físrco; moral, psicológica de algún integrante de la familia.

El maltrato infantil o de personas mayores y de hermanos también se considera violencia familiar, las consecuencias psicológicas de las víctimas de violencia puede incluir depresión, pensamientos e intentos suicidas, baja autoestima, abuso de alcohol y otras drogas y trastornos de estrés postraumático.

La espiral de violencia en la familia puede ser cíclica y gradual:

Física: Se refiere a agresiones o golpes que causan lesiones físicas que pueden incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno e incluso la muerte. A menudo, el maltrato comienza con contactos leves y con el tiempo empeora para convertirse en acciones más violentas.

Sexual: Suele acompañar o seguir el maltrato físico, y tiene como consecuencia una violación u otra actividad sexual forzada.

Psicológica o Emocional: Una persona que maltrata a menudo lo hace mentalmente o emocionalmente con palabras, amenazas, hostigamiento, posesión extrema, aislamiento forzado y destrucción de pertenencias. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta

controlar el tiempo, las actividades y el contacto con otras personas de la víctima.

Las personas que maltratan pueden lograr esto al interferir con las relaciones de apoyo de la víctima, crear barreras para las actividades normales, como sustraer las llaves del coche o encerrar a la víctima en la casa, y mentir y distorsionar la realidad para obtener el control psicológico.

Acoso: Conducta de hostigamiento o amenaza repetida que a menudo deriva en maltrato físico o sexual.

Económica: Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima, como el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, el refugio, el seguro y el dinero. Por ejemplo, puede interferir con la capacidad de la víctima de autoabastecerse e insistir en controlar todas las finanzas de la víctima. Cuando la víctima abandona la relación violenta, el perpetrador puede recurrir al aspecto económico como una manera de mantener el control u obligar a la víctima a regresar.

En 2015 las 32 entidades federativas sumaron 126 mil 816 carpetas iniciadas por ese delito, en el año 2018 se contabilizaron 1 78 mil 561 lo que representa un incremento de 51 mil 745 indagatorias, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. (1)

Los estados de la Republica con mayor número de casos en el 2015 fueron Nuevo León (17,062), Ciudad de México (16,103), Chihuahua (12, 273) Guanajuato (10,298), Baja California (8,892)
y Jalisco (8, 543).

En la violencia familiar se transgreden derechos fundamentales esenciales, ya que la violencia física, psicológica, económica y sexual se vulnera la vida y la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el honor.

También se considera violencia familiar la realización de cualquiera de las conductas descritas contra una persona que este sujeta a custodia, guarda, protección, educación, instrucción, patria potestad, o cuidado de otra o con quien tenga una relación de hecho o la hay hecho durante dos años anteriores al acto u omisión.

Existe un número importante de casos que no se persiguen ya que las mujeres otorgan el perdón a sus cónyuges o concubinas,

DECRETO:

SE REFORMA EL ARTICULO 111 FRACCION 111 PARRAFO TERCERO DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

ARTÍCULO 111.- EL PERDÓN OTORGADO POR LA VÍCTIMA, OFENDIDO O POR QUIEN SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA OTORGARLO, EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I.

II.-

III.-

...

...

SE EXCEPTUARÁ LA PROCEDENCIA DEL PERDÓN DEL OFENDIDO SI SE TRATA DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, O EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, CUANDO SEA EN PERJUICIO DE UNA PERSONA MENOR DE EDAD, Y QUE SE LA HAYA OCASIONADO DAÑO FISICO, MORAL O PSICOLOGICO; CUANDO SE TRATEN DE DELITOS VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FISICA SEÑALADOS EN EL TITULO DECIMO NO PROCEDERA EL PERDON DE LA VICTIMA U OFENDIDO; NO PROCEDERA EL PERDON EN EL CASO DE LESIONES DE LAS CALIFICADAS LEGALMENTE QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDEN EN SANAR MÁS DE QUINCE DÍAS; DE LAS QUE SI PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDEN EN SANAR MÁS DE QUINCE DÍAS, O LESIONES CALIFICADAS. SI SE TRATA DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN VIOLENCIA FISICA SOLO PROCEDERA EL PERDON DEL OFENDIDO A SOLICITUD DEL CONYUGE O CONCUBINO, SI, PREVIO ACUERDO; FIRMADO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO SE COMPROMETEN A ACUDIR A TERAPIA PSICOEMOCIONAL DE PAREJA EN LOS CENTROS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL. (2) SE EXCEPTUARÁ LA PROCEDENCIA SI SE INCURRE EN EL DELITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 306 BIS 1 FRACCIÓN 1 CUANDO CAUSE DAÑO PSICOLÓGICO, EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN 11 O EN EL DELITO DE LESIONES A MENOR DE EDAD SEA CALIFICADO O PROVOQUEN LA MUERTE.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO: El presente Decret entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

14:04

24 SEP 2021

162

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE ADICIÓN DEL ARTÍCULO 331 BIS 7, AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, TITPIFICAR COMO DELITO LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC

establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este procesó. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión

legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislativo del PRI y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2020; Expediente: 13334/LXXV

PROMOVENTE: DIP. FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS MARTÍNEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE ADICIÓN DEL ARTÍCULO 331 BIS 7, AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, TITPIFICAR COMO DELITO LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO.

INICIADO EN SESIÓN: 17 de febrero del 2020

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra las mujeres y las niñas. Mientras una parte de la sociedad siga sosteniendo y permitiendo la desvalorización de las mujeres, la cosificación, la violencia simbólica a través de los medios de comunicación y de los discursos formadores de opinión, será una sociedad que más allá de las declamaciones, tolera y sostiene una estructura social patriarcal de

sometimiento de un género.

En nuestro país el delito de feminicidio ha crecido 137% en los últimos 5 años según datos de la Fiscalía General de la República, en tanto diariamente se comenten 10 feminicidios de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sabemos que nuestro Estado no está exento de esta realidad, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional en su último reporte de diciembre 2019, coloca **a Nuevo León como el 4to Estado** de la Republica con mayor incidencia feminicida.

Los feminicidios son el grado más extremo de un conjunto de actos de violencia histórica y sistémica que han padecido las mujeres toda la vida, la tipificación del feminicidio no puede ni debe desaparecer de los códigos penales, no podemos silenciar una realidad que lastima y que también reclama justicia para miles de mujeres y sus familias.

En este mismo sentido, hace unos días fuimos testigos de un acto atroz que conmociono a todos los mexicanos, y me refiero al feminicidio de la ciudadana Ingrid de 25 años de edad, quien fue asesinada, mutilada y desollada en la Ciudad de México por su pareja. Lamentablemente, parte del expediente, la confesión de su asesino y las imágenes de su cadáver fueron irresponsablemente filtradas, por lo que fueron difundidas en las primeras planas de periódicos de nota roja, redes sociales y otros medios de información.

Con lo anterior, se presenció una clara re victimización de Ingrid y su familia, pues filtración de toda esa información e imágenes, ofreció la oportunidad de difundir nuevas formas de agresión hacia la víctima

Bajo este contexto, tenemos que lamentablemente en muchas ocasiones son los propios servidores públicos miembros de una institución policiaca o de administración y procuración de justicia, quienes a través de las áreas de comunicación ofrecen información que no debiera filtrarse, así como también datos relevantes acerca del hecho.

Sabemos que la violencia contra las mujeres y los feminicidios no deben silenciarse, al contrario, deben visibilizarse. Por otro lado, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 38, 41 y 42, señala a las dependencias que estarán encargadas de vigilar que los medios de comunicación, promuevan lo siguiente:

CAPÍTULO 11 DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, A TENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a Jos derechos humanos y la dignidad de las mujeres;

Art. 41 Son facultades y obligaciones de la Federación:

XVIII. Vigilar que Jos medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia.

Art.42 corresponde a la secretaria de Gobernación:

X. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres;

Además de lo establecido en la Ley para prevenir y eliminar la discriminación que señala en su art. 9 y 20 lo siguiente:

Art. 9 Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción 111 de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en Jos medios de comunicación;

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:

XXXII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio;

No obstante a lo anterior, dentro del marco legal que es aplicable a la Ciudad de México, debemos destacar que ni a nivel federal y local existen sanciones para los funcionarios públicos que manejan la información de una manera inadecuada, razón de más para legislar de manera pronta y emitir una nueva

norma que lo sanciones, a fin de que no vuelva a presentarse por parte de la autoridad esta serie de hechos que re victimizan a las mujeres.

Las leyes deben ser preventivas, no reactivas, y en ese tenor recurrimos a esta tribuna para presentar iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León, para tipificar como delito, que todo servidor público que difunda o comparta información sensible relacionada con el delito de feminicidio, sean sancionados de manera penal y administrativamente.

Lo anterior, para quedar como sigue:

DECRETO:

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 331 Bis 7, al Código Penal para el Estado de Nuevo León; para quedar como sigue:

Artículo 331 Bis 7. Al servidor público, miembro de una institución policiaca o de administración y procuración de justicia que reproduzca difunda, comparta, comercialice, oferte, intercambie publique o exhiba imágenes, videos, audios, o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal del delito de feminicidio, con personas ajenas a la investigación o proceso penal, se le impondrá una pena de prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas

Además, en caso de ser material audiovisual de cadáveres o partes de ellos, de una o más víctimas de feminicidio, la sanción antes prevista se incrementará hasta en una tercera parte, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Las sanciones, previstas en el párrafo anterior aumentaran hasta en una mitad si el material difundido involucra el feminicidio de una niña o adolescente.

Atentamente

Monterrey Nuevo León 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández.

[redacted]

14:11
24 SEP 2021

163

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar:

Lo anterior, al tenor de la presente: "INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DEL TITULO VIGESIMO OCTAVO QUE CONTIENE LOSARTICULOS 446 Y 447 DEL CODIGO PENAL PARA ELESTADO DE NUEVO LEON".

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son*

competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, identificándose bajo el expediente Expediente: 12260/LXXV, presentada en sesión el 07

DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y Desarrollo Urbano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de noviembre del año 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual fija las normas básicas para planear, regular y ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.
Nuestro Congreso, en cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley General, expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, el 27 de noviembre de 2017.

A pesar de contar con un nuevo ordenamiento, continúan las quejas de los ciudadanos respecto a construcciones irregulares en todo el Estado, debido, principalmente, a que las obras no cuentan con las licencias municipales correspondientes; los estudios, las medidas de seguridad, o se realizan en áreas naturales protegidas.

Es de conocimiento general, la tragedia ocurrida recientemente en la Ciudad de Monterrey, por el derrumbe de una plaza comercial en construcción, causando la muerte a varios trabajadores, así como lesiones graves a otros.

Las primeras indagatorias arrojaron que la construcción no contaba con los permisos municipales para realizar los trabajos y por ende no garantizaba la seguridad de la misma.

Por otra parte, los medios de comunicación han dado a conoce múltiples casos en los cuales se han clausurado obras que realizaban particulares en el interior de la Huasteca, esto al no contar con permisos

de cambio de uso de suelo. Obras que incluso ya contaban con trabajos de nivelación de terreno y tierra amarilla, además de construcción de barda perimetral con block y concreto, lo cual atenta contra los principios de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano y sobre todo, pone en peligro la integridad física de los trabajadores, ya que operan en la absoluta ilegalidad.

Algunas obras incluso se desarrollan en el Cerro de la Silla; el cual fue decretado como Área Natural Protegida, con la categoría de Monumento Natural, el 26 de abril de 1991, mediante un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 del mismo mes y año, la cual tiene por objeto conservar las áreas que por contener uno o varios elementos naturales de importancia nacional, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional de interés estético, de valor histórico o científico, se considere necesario incorporar a un régimen de protección *en el que únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación ambiental.*

Por ello, estimamos que es necesario tipificar como delito y sancionar de forma ejemplar a las personas que incurran en dichas conductas. Lo anterior, ya se encuentra regulado en la Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, entre otras.

Sin duda, también debe existir sanción a los servidores públicos que otorguen autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, parcelaciones, sin reunir las condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o bien que los expidan sin estar autorizados para ello.

Por ello, es necesario adicionar nuestro Código Penal, para incorporar el Título Vigésimo Octavo con la denominación de "Delitos Contra el Desarrollo Urbano" en el cual se incluye la imposición de pena de prisión al Director responsable de obra o corresponsable de obra que *autorice* o *permita el desarrollo de una construcción,* sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o a la normativa vigente relativa a asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para el Estado de Nuevo León, así como suspensión para desempeñar

profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.

La pena de prisión se impondrá de igual manera *al propietario del inmueble donde* se *desarrolla la construcción, su representante legal* o *el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego* a *la licencia, autorización, permiso,* o a la normativa vigente relativa a asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para el Estado de Nuevo León, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitidas, *siempre que no lo denuncie* a *la autoridad.*

Se propone sanción severa a los fraccionadores que sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos.

También es necesario penalizar a los servidores públicos que valiéndose de su encargo expidan, autoricen u otorguen licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, que permita fraccionar sin reunir las condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o *bien que los expidan sin estar autorizado para ello;* o bien, permita el uso del suelo o la edificación de construcciones respecto de lotes previamente fraccionados.

Asimismo deben ser privados de la libertad aquellos que realicen actividades de trazado tendientes a fraccionar, *sin cerciorarse previamente de que el propietario cuenta con el permiso necesario de la autoridad administrativa para ello,*

Nuestra propuesta también incluye sanciones a aquellos que a sabiendas, *ordene cualquier tipo de publicidad ofreciendo lotes de un fraccionamiento no autorizado.* Tratándose de personas morales las sanciones serán impuestas al gerente, director, administrado representante o responsable de ella que hubiere intervenido en los hechos relacionados en las fracciones anteriores.

Se precisa que por fraccionar, debe entenderse la división de terrenos en lotes, dentro de los centros de población y zonas conurbadas.

Por último se propone aplicar penas más severas al que realice las conductas anteriores en un lugar declarado de *reserva ecológica* o *área natural protegida.*

Por lo anterior y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, así como que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

SEGUNDO. Que la fracción V, inciso f) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para otorgar licencias y permisos para construcciones.

TERCERO. Que el Artículo 4, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los principios de política pública de *Sustentabilidad Ambiental,* que obliga a promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. *Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas* o *bosques.*

Que el artículo 60 de la Ley citada, señala que la legislación local en las materias objeto de dicha Ley, establecerá los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística.

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III, de Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, se entiende por Área no urbanizable a *las áreas naturales protegidas;* distritos de riego, zonas de recarga de mantos acuíferos, tierras de alto rendimiento agrícola, pecuario o forestal, derechos de vía; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, los terrenos inundables y las que tengan alto riesgo que no sea mitigable, y se encuentran señalados como tales en los Atlas de Riesgo, así como los demás que como tales defina el plan o programa de desarrollo urbano respectivo que no deban ser urbanizados.

QUINTO. Que el artículo 11, fracciones XII y XVIII, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, establece que corresponde a los municipios el otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, parcelaciones, así como conjuntos urbanos, y demás tramites que regule dicha Ley y los reglamentos municipales en la materia, de acuerdo con los planes o programas de desarrollo urbano; así como que corresponde a los Municipios aplicar criterios ambientales de conservación de áreas naturales y de prevención y control de la contaminación ambiental en los permisos, licencias o autorizaciones de las distintas acciones urbanas; en los términos de las Leyes ambientales respectivas.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

DECRETO

ÚNICO- SE REFORMA POR ADICIÓN DEL TÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO, QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 446 Y 447 EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

TÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO

ARTICULO 446. AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA O CORRESPONSABLE DE OBRA QUE AUTORICE O PERMITA EL DESARROLLO DE UNA CONSTRUCCIÓN, DE LA QUE OTORGÓ SU RESPONSIVA, SIN APEGO A LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN,

PERMISO, REGISTRO O LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA A ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SE LE IMPONDRÁ DE CUATRO A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE MIL A DIEZ MIL CUOTAS, ASÍ COMO SUSPENSIÓN PARA DESEMPEÑAR PROFESIÓN U OFICIO HASTA POR UN PERIODO IGUAL A LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA.

LA MISMA SANCIÓN SE IMPONDRÁ AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE SE DESARROLLA LA CONSTRUCCIÓN, SU REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONSTRUCTOR, QUE TENIENDO CONOCIMIENTO PERMITA LA EDIFICACIÓN SIN APEGO A LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN, PERMISO, REGISTRO O LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA A ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RELACIÓN A LA ALTURA, NÚMERO DE NIVELES, ÁREA LIBRE PERMITIDA Y LAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO, CON EL OBJETO DE TRANSFERIR LA POSESIÓN, LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRO DERECHO RELACIONADO CON LOS LOTES DIVIDIDOS

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIÉNDOSE DE SU ENCARGO EXPIDA, AUTORICE U OTORGUE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN ANÁLOGA, QUE PERMITA FRACCIONAR SIN REUNIR LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LAS LEYES, PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO VIGENTES, O BIEN QUE LOS EXPIDAN SIN ESTAR AUTORIZADO PARA ELLO;

III.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE EXPIDA LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN ANÁLOGA, PERMITIENDO EL USO DEL SUELO O LA EDIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES RESPECTO DE LOTES PREVIAMENTE FRACCIONADOS, SIN EL PERMISO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, O QUE CONTÁNDOSE CON ÉSTE, NO SE HAYAN OBSERVADO LAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO; IGUALMENTE, INCURRIRÁ EN EL DELITO EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LOS OTORGUE SIN ESTAR AUTORIZADO PARA ELLO;

IV.- EL QUE POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, REALICE ACTIVIDADES DE TRAZADO TENDIENTES A FRACCIONAR, SIN

CERCIORARSE PREVIAMENTE DE QUE EL PROPIETARIO V.- EL QUE A SABIENDAS, ORDENE CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD OFRECIENDO LOTES DE UN FRACCIONAMIENTO NO AUTORIZADO. CUANDO EL INFRACTOR DE ESTE DELITO, FUERE UNA EMPRESA, SOCIEDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA MORAL, LAS SANCIONES SERÁN IMPUESTAS AL GERENTE, DIRECTOR, ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE O RESPONSABLE DE ELLA QUE HUBIERE INTERVENIDO EN LOS HECHOS RELACIONADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE TÍTULO, POR FRACCIONAR, DEBE ENTENDERSE LA DIVISIÓN DE TERRENOS EN LOTES, DENTRO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS CONURBADAS.

LA PENA SE INCREMENTARÁ HASTA UNA TERCERA PARTE AL QUE REALICE LAS CONDUCTAS ANTERIORES EN UN LUGAR NO URBANIZABLE O ÁREA NATURAL PROTEGIDA QUE ESTÉ BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO O DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

TRANSITORIO

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

13:36

24 SEP 2021

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N.L.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 164

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICITIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN CAPITULO TERCERO DENOMINADO "VIOLENCIA OBSTETRICA" DENTRO DEL TITULO DECIMO QUINTO BIS, QUE A SU VEZ CONTIENE LA ADICION DE LOS ARTICULOS 331 BIS 8, 331 BIS 9 Y 331 BIS 10 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto*

las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

AÑ0:2019 EXPEDIENTE: 12530/LXXV

PROMOVENTE: DIP. CELIA ALONSO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGIALLTIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONA DE LA LXXV LEGISLATURA.
ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICITIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN CAPITULO TERCERO DENOMINADO "VIOLENCIA OBSTETRICA" DENTRO DEL TITULO DECIMO QUINTO BIS, QUE A SU VEZ CONTIENE LA ADICION DE LOS ARTICULOS 331 BIS 8, 331 BIS 9 Y 331 BIS 10 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON., SE TURNA CON CARÁCTER DE URGENTE.
I

NICIADO EN SESIÓN: 19 de Marzo del2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En México la falta de personal capacitado, de instalaciones adecuadas y de equipo médico apto para proporcionar atención obstétrica parecen ser la regla.

El concepto de violencia obstétrica como un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumano o degradante por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

En México, la identificación de la violencia obstétrica y el acceso a la justicia en casos de violación a los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio aún se encuentra en una etapa incipiente. A pesar de que existe una amplia gama de procedimientos de queja y sanción, éstos no cuentan con una perspectiva de derechos humanos y son mecanismos de reparación segmentados que obligan a las mujeres a recurrir a más de un procedimiento.

Es de exponer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 22 recomendaciones por casos de violencia obstétrica registrada en diferentes instituciones de salud desde 2016 a enero de 2018. En 2016, se emitieron 11 de los recursos; cinco dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); dos al gobierno de Oaxaca, y uno a los gobiernos de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero e Hidalgo. Durante 2017 se realizaron 1O recomendaciones, siendo 5 para el IMSS; 2 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); una para Petróleos Mexicanos (Pemex), una para los gobiernos de Tabasco y Baja California, y una más para la Procuraduría General de la República (PGR).1

En los últimos años se han presentado varias iniciativas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a la Ley respectiva en el Estado.

Al respecto cabe señalar que la violencia obstétrica se puede encuadrar en las figuras de violencia institucional y de género ya existentes en la Ley. En ese sentido, a pesar de que no estuviera definida de manera explícita, la normativa referente a estos tipos de violencia supone la obligación del Estado de tomar las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia obstétrica.

Una de las medidas propuestas para visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica ha sido la de reformar los códigos penales para tipificarla como un delito, con sanciones privativas de la libertad y multas para el personal de salud que incurra en estas prácticas.

Hasta mayo de 2015, en tres códigos penales se considera la violencia obstétrica un delito: Veracruz, Guerrero y Chiapas. En el caso de Veracruz, dicha tipificación se realizó en el marco de una serie de modificaciones propuestas a este ordenamiento para lograr un acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las penas contempladas van de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta doscientos días de salario, y otras conforme a su gravedad van de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario mínimo.

Si bien consideramos oportuno la presente reforma al Código Penal para sancionar este tipo de violencia, pero también coincidimos que es necesario incorporar a nuestras leyes administrativas la definición de violencia obstétrica, para dar una certeza jurídica y diversas vías de sanción a la Violencia Obstétrica, por lo que es de exponer que a través de diversas iniciativas ya se encuentran en el debate de la presente Legislatura, por lo que es necesario abordar el estudio de la sanción penal y no desproteger a las mujeres ante la negligencia o mala atención con dolo que pudiera darse en la atención médica y ocasionar lesiones u hasta homicidio.

Así mismo es de señalar que el delito a integrar de violencia obstétrica consideramos que es necesaria integrarla dentro del TÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS denominado DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIGNIDAD DE
. LA MUJER, adicionando el Capítulo Tercero la

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Finalmente, estimo indispensable agregar que esta iniciativa se encuentra relacionada con el Tercer eje temático de la agenda legislativa de MORENA para este segundo periodo ordinario de sesiones. Dicho punto se describe de la siguiente manera:

3.- PLENO RESPETO Y PROMOCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

PARA LOGRAR LA JUSTICIA SOCIAL. En este eje se refleja el compromiso de MORENA con respecto a los Derechos Humanos, así como en punto 3.2 donde establecemos el impulso de reformas para reconocer la Violencia Obstétrica dentro de nuestro marco normativo.

Por los argumentos ya descritos, nos permitimos someter a la consideración de ésta comisión el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por adición de un Capítulo Tercero denominado "Violencia Obstétrica" dentro del Título Décimo Quinto Bis, que a su vez contiene la adición de los artículos 331 Bis 8, 331 Bis 9, 331 Bis 10, al Código penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS

DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIGNIDAD DE LA MUJER

CAPÍTULO TERCERO VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Artículo 331 BIS 8.- Comete el delito de Violencia

Obstétrica el personal

de salud público o privado que, en el ejercicio de su profesión u oficio,
Iniciativa de retorma al COdigo Penal para el Estado de Nuevo León

dañe, lastime o denigre de forma física, verbal, psicológica y/o emocional a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

A quien realice las conductas señaladas se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos Unidades de Medida y Actualización;

Artículo 331 BIS *9.-* Se equipará a la violencia obstétrica y se sancionará con las mismas penas a quien:

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas;
11. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
111. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad;

Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, mediante la negación

a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer; y

Aun cuando existan los medios necesariospara la

realización del parto vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas.

A quien realice las conductas señaladas en las fracciones 1, 11, 111 y IV, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario; y quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones IV y V será sancionado con prisión de seis meses a tres años y multa de hasta doscientas Unidades de Medida y Actualización.

Si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 331 BIS 10.- Comete el delito de Violencia Reproductiva a quien ejecute acciones que vulneren el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, al implantarle métodos

anticonceptivos, o realice procedimiento de ligadura de trompas de Falopio o extracción de matriz u ovarios de la mujer sin que esta otorgue su consentimiento o se encuentre plenamente informada."

A quien realice las conductas señaladas se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de

hasta trescientas Unidades de Medida y Actualización.

TRANSITORIOS.

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

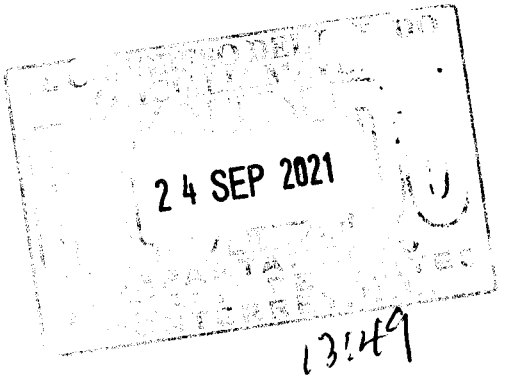
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 166

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 16 BIS EN RELACIÓN CON LOS DELITOS GRAVES, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 204 BIS Y 204 BIS 1, ASI COMO SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 202, SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 203, Y SE ADICIONA UN CAPITULO 111 BIS, PARA CREAR EL DELITO DE LENOCINIO INFANTIL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC

establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente13368LXXV, presentada en sesión el 26 de febrero del 2020, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2020, Expediente: 13368LXXV

PROMOVENTE: DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ E INTEGRANTES DEL PARTIDO DEL TRABAJO, SUSCRIBIENDOSE LOS DIPUTADOS ROSA ISELA CASTRO FLORES, LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES, MERCEDES CATALINA GARCÍA MANCILLAS, ALEJANDRA LARA MAIZ, NANCY ARACELY OLGUIN DÍAZ, TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA Y MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS.

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 16 BIS EN RELACIÓN CON LOS DELITOS GRAVES, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 204 BIS Y 204 BIS 1, ASI COMO SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 202, SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 203, Y SE ADICIONA UN CAPITULO 111 BIS, PARA CREAR EL DELITO DE LENOCINIO INFANTIL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.
INICIADO EN SESIÓN: 26 de febrero del 2020
SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

.

Exposición de Motivos
El término de lenocinio infantil consideramos es el apropiado, pues nos remite al concepto de explotación de la prostitución ajena, tal y como lo maneja el Derecho Internacional, permitiéndonos castigar a aquél que utiliza a un menor de edad para obtener ingresos económicos comerciando con el cuerpo de éste.
Como marco jurídico internacional he de referirme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, vigente en México desde 1980, que establece en su artículo 26 el principio "Pacta Sunt Servanda", cuya esencia es que todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas, el cual es admitido en nuestra Constitución Política Federal conforme al 133.

Para nuestro Grupo Legislativo, es importante tener presente lo anterior al señalar que en 1989 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial, que define como niño "a todo ser humano menor de dieciocho años".

Dicha Convención es considerada por diversos especialistas en el tema como "la Revolución Francesa para los niños, 200 años después" cuyo mayor logro es reconocer al niño como

sujeto de Derecho.

Además de reconocer lo anterior la Convención establece en su artículo 34 la obligación de los Estados parte de tomar las medidas para impedir y castigar la explotación sexual comercial infantil, entendida como la utilización de niños en la pornografía, la explotación por la prostitución infantil y la venta de niños con fines sexuales.

Un panorama mundial sobre la situación que guarda el abuso sexual en los niños lo brinda la Organización Mundial de la Salud, quien menciona que hasta septiembre de 2016 una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia.

México ratifico la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en el 2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.A pesar de la firma en algunos casos la ratificación de los convenios antes mencionados, de acuerdo con cifras de la OCDE, México ocupa el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. En el país existieron 4.5 millones de infantes víctimas de este delito, lo más grave es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos.

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte, señala en su informe anual 2014 que México registra de los más bajos presupuestos para atender este mal social, sólo uno por ciento de los recursos destinados a la infancia se dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.

En nuestra perspectiva, la utilización de una niña o un niño en actividades sexuales o a cambio de dinero u otra forma de retribución constituye una de las conductas más infames y degradantes de la sociedad en que vivimos.

Con esta iniciativa se propone establecer al lenocinio infantil como figura delictiva con propia definición y sanción, con la intención de castigar la conducta de aquellos que utilicen menores de edad para cometer estos delitos, independientemente de los efectos de esta conducta en el menor.

Asimismo, al realizar esta reforma estaremos protegiendo como bien jurídico el proceso del normal desarrollo sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, etapa que se ve permanentemente afectado por la realización de las conductas anteriormente mencionadas, consideradas como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional que en su artículo séptimo incluye en este tipo de delitos a la "violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable".Compañeras y compañeros legisladores

Con la presente iniciativa, pretendemos reforzar los mecanismos que protegen a las niñas, niños y adolescentes y que castigan a quienes los utilicen y comercien con ellos, tiene sustento en el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes del estado de Nuevo León.

En este sentido, sólo podremos castigar este delito de acuerdo con su gravedad si comenzamos llamando las cosas por su nombre.

Que este tema no sea más un tabú, digámoslo con todas sus letras el lenocinio de menores existe, e involucran a miles de niños y niñas cada día y sólo podremos disminuir las cifras que acabamos de escuchar si somos claros: el lenocinio infantil es un delito con características propias que ameritan una sanción propia debido a la gravedad del daño que provocan en nuestra niñez, el cual además tiene un costo social aún no cuantificado.

Finalmente, la Revista Quorum Legislativo, cuyo título "Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente", del autor Juan Ramírez Marín, citando a Elena Azaola, del Centro de Investigaciones sociales la cual afirma que, "Los dueños de muchos de esos bares son diputados, banqueros, alcaldes, personas poderosas" que actúan en la sombra y obtienen importantes ingresos, con la complacencia de "autoridades federales, estatales y municipales"

Por estas consideraciones, solicito a ésta Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por modificación la fracción primera del artículo 16 bis, se deroga la fracción cuarta del artículo 202, se deroga el segundo párrafo del artículo 203, se reforma el Título Quinto con la adición de un capítulo tercero Bis, así como los artículos 204 bis y 204 bis 1, para crear el delito de lenocinio infantil, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 16 bis.- Para todos /os efectos legalos se califican como delitos graves consignados en este código:...
I...
204 BIS, 204 BIS 1...

Artículo 202.-...
...

Fracción IV.- (Se deroga)

Artículo 203.-...
Párrafo segundo (se deroga)

Articulo 204.- (Se deroga)

Capitulo III BIS

Del Lenocinio Infantil o de Personas que no tienen capacidad para comprender El significado del hecho o de Personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Artículo 204 BIS. - Comete el delito de lenocinio infantil o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que

no tienen capacidad para resistirlo:

I.- Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera;

II.- Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para que comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para gue se entregue al lenocinio infantil, y

III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar el lenocinio infantil o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de doce a 20 años y de mil a dos mil quinientas veces el valor diario el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III.

Artículo 204 BIS 1.- Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en el artículo anterior.

Asimismo, las sanciones señaladas en el artículo anterior se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima,alguna de las siguientes relaciones:
a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;
b) Ascendienfes o descendienúes sin límite de grado;
c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;
d) Tutores o curadores;
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relacion laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que Implique una subordinación de la víctima;

f) Quien se valga de función pública para cometer el delito;
g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima;
h) Al ministro de un culto religioso;
i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima;y
i) Quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de ésta.

En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, tutela o curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponderle por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de ésta.

En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se !e prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

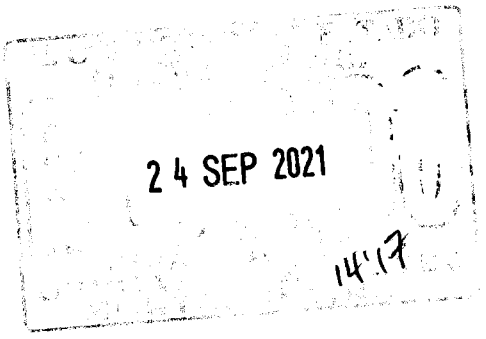
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



167

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION AL ARTICULO 140 Y POR DEROGACION DE LOS ARTICULOS 122 AL 139 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ADICIONAR UN MARCO LEGAL QUE GARANTICE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITO EN LA ENTIDAD, COMO LO SON LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, SUJECIÓN A PROCESO Y AENTENCIA DE LOS RESPONSABLES DE HABER COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY CALIFIQUE COMO DELITO EN LA ENTIDAD, ELIMINANDO LA FIGURA JURIDICA DE LA PRESCRICION DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.
Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:
Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.
Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.
Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se

sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:
Turno a comisiones para su estudio.
Elaboración del dictamen correspondiente.
Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:
Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…
Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será*

presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, identificándose bajo el expediente 12220/LXXV, presentada en sesión el 29 de Octubre del 2019, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pùblica y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La bancada Movimiento Ciudadano, una vez habiendo visto y

analizado que fuera la situación de administración e impartición de justicia en nuestra entidad, encontramos una grave problemática acaecida en el uso de la figura jurídica de la prescripción de los delitos, contenida en el código penal vigente. Esto, trae como consecuencia el reforzamiento de la impunidad, con la que la quienes han cometido hechos delictivos se han visto favorecidos, evadiendo mediante el uso de tal figura la acción de la justicia y sus consecuencias al haber delinquido, vulnerando a su vez los derechos de las víctimas de delito en Nuevo León.

Antes de continuar, debemos hacer un paréntesis para recordar el significado de la figura
jurídica de Prescripción. Esta es una figura jurídica que existe en materia penal (aunque tambien conocida en otras materias), la cual consiste en la pérdida de la pretensión punitiva (que es la facultad de los Estados para ejercer la acción penal) y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, por parte del Estado o la autoridad judicial respectivamente, por el simple paso del tiempo. Esto significa, que en la legislación penal vigente, tanto en la de las Entidades Federativas, como en la Federal, se llega al extremo de convalidar un hecho delictivo **únicamente** por transcurrir un determinado lapso de tiempo, sin que éste haya sido analizado judicialmen

Dicho de otro modo, un delito que en el mundo fáctico ha sido cometido, se vuelve "legal", al transcurrir los años, impidiendo que el Estado pueda investigar o acusar al responsable y por ello, mucho menos podrá ser juzgado y condenado.

Con ello se ha ido flagelando a las víctimas de delito, quienes ante el paso del tiempo ven cómo sus atacantes quedan sin castigo, no obstante de haber perpetrado en su contra actos que menoscabaron su esfera de derechos. De tal suerte que de seguir existiendo dicha figura jurídica en el código penal del Estado, se seguirá permitiendo que aquellas personas que delinquen continúen impunes y evadan, como lo hacen hoy en día, su responsabilidad.

Por otra parte, no es dable que las víctimas de delito se vean indefensas y carentes de una reparación del daño que resulta del procesamiento de su agresor por el solo paso del tiempo. A su vez, una de las grandes problemáticas que encuentran los Agentes del Ministerio Público al momento de integrar una Carpeta de Investigación,

es la fecha de comisión del hecho delictivo, ya que cuando dicha fecha cruza un determinado lapso de tiempo, se actualiza la figura llamada Prescripción, que evita poder llevar un caso ante el Juez Penal, que determine su responsabilidad, esto aún y cuando puedan existir pruebas que acrediten fehacientemente que el delito se ha cometido.

Nuestra entidad se ha visto vulnerada particularmente por servidores públicos que actúan bajo esta primicia, sabiendo que sus delitos quedarán sin castigo por el simple paso del tiempo, debido a que cuando sus acciones materia de delitos son denunciadas, ya estará operando la prescripción en su favor, quedando impunes de sus crímenes contra el Estado.

Si se pretende hacer frente a la delincuencia en todos sus ámbitos, incluyendo la corrupción, debemos de generar las condiciones jurídicas para que cualquier hecho delictivo, si importar la fecha de su comisión, pueda investigarse y someterse a consideración de un Jue Penal.

No se pretende que todas las denuncias sean sentenciadas, condenando a toda persona imputada de forma arbitraria. Se tiene por objeto que todas las denuncias puedan iniciarse, investigarse, y si existen elementos probatorios, que también exista la posibilidad de sancionar a aquella persona responsable de la comisión de hechos delictivos, para que el tiempo no sea un enemigo de la vlctima.

Si bien es cierto que con el transcurso del tiempo, las evidencias de un hecho delictivo podrán ir desapareciendo, no menos cierto es que existe la posibilidad que ellas permanezcan o aun existan, y si tienen la suficiente fortaleza probatoria para condenar al responsable, entonces ¿por qué impedir jurídicamente que ese caso sea procesado? A final de cuentas, será un Juez quien resuelva.

Actualmente el catálogo penal vigente para el Estado de Nuevo León establece:

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN P.O. 28 DE JULIO DE 2004) CAPÍTULO VI/ PRESCRIPCIÓN, EXTEMPORANEIDAD Y ABANDONO

DE LAS QUERELLAS

ARTICULO 122.- POR LA PRESCR/PC/ON SE EXTINGUEN LA ACC/ON PENAL Y EL DERECHO PARA EJECUTAR LAS SANCIONES, CONFORME A LOS SIGUIENTES ARTICULO$.

ARTICULO 123.- LA PRESCRIPC/ON ES PERSONAL, Y PARA ELLO BASTARA EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO SEÑALADO POR LA LEY.

LA PRESCRIPCION PRODUCIRA SU EFECTO AUNQUE NO LA ALEGUE EL ACUSADO. TRATANDOSE DE LA ACCION PENAL, LOS JUECES LA SUPURAN DE OFICIO EN TODO CASO, TAN LUEGO COMO TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, SEA CUAL FUERE EL ESTADO DEL PROCESO.

LA PRESCRIPCION DE LA SANCION SE DECRETARA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE LA HUBIERA IMPUESTO.

ARTICULO 124.- LOS TERMINO$ PARA LA PRESCRIPC/ON DE LA ACCION PENAL COMENZARAN A CONTAR DESDE EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION U OM/SION.

ARTICULO 125.- LOS TERMINO$ PARA LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES SERAN IGUALMENTE CONTINUOS Y CORRERAN DESDE EL OIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE EL SENTENCIADO SE SUBSTRAIGA A LA ACCION DE LA AUTORIDAD, SI LAS SANCIONES SON PRIVATIVAS DE LIBERTAD; Y S/ NO LO SON, DESDE LA FECHA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA.

ARTICULO 126.- LA ACC/ON PENAL PRESCRIBE EN UN AÑO, S/ EL DELITO SOLO MERECIERE MULTA. Si EL DELITO MERECIERE, ADEMA$ DE ESTA SANCION, LA PRIVA TIVA DE LIBERTAD, O FUERE AL TERNATIVA, SE A TENDERA EN TODO CASO A LA DE PRIVAC/ON DE LA LIBERTAD, Y LO MISMO SE OBSERVARA CUANDO CORRESPONDA ALGUNA OTRA SANCION ACCESORIA.

ARTICULO 127.- LA ACCION PENAL PRESCRIB/RA EN PLAZO IGUAL AL SEÑALADO EN EL ARTICULO 139.

ARTICULO 128.- S/ EL DELITO SOLO MERECIESE DESTITUCION, SUSPENS/ON, PERDIDA DE DERECHOS O INHABILITACION, LA

PRESCRIPC/ON SE CONSUMARA EN EL TERMINO DE DOS AÑOS.

ARTICULO 129.- TRATANDOSE DE DELITOS QUE SOLO PUEDEN PERSEGUIRSE POR QUERELLA, ESTA DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE UN PLAZO DE UN AÑO, CONTANDO DESDE EL DIA EN QUE LA PARTE OFENDIDA TENGA CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE, Y EN TRES AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA CIRCUNSTANCIA.

PRESENTADA EN TIEMPO LA QUERELLA, SE OBSERVAN LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCION PARA LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO. LAS QUERELLAS PRESENTADAS FUERA DE TERMINO NO TENDRAN EFICACIA ALGUNA, Y POR TANTO EL MINISTERIO PUBLICO ESTARA IMPEDIDO PARA EJERCITAR LA ACCION PENAL.

ARTICULO 130.- CUANDO HAYA CONCURSO DE DELITOS, LAS ACCIONES PENALES QUE DE ELLOS RESULTEN SE PRESCR/BIRAN SEPARADAMENTE EN EL TERMINO SEÑALADO A CADA UNO.

ARTICULO 131.- CUANDO PARA DEDUCIR UNA ACCION PENAL, SEA NECESARIO QUE ANTES SE TERMINE UN JUICIO DIVERSO DE CUALQUIER NATURALEZA, NO COMENZARA A CORRER LA PRESCRIPC/ON SINO HASTA QUE EN EL JUICIO PREVIO SE HAYA PRONUNCIADO SENTENCIA EJECUTORIADA.

(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)

ARTÍCULO 132.- LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SE INTERRUMPE POR LAS DILIGENCIAS QUE SE PRACTIQUEN EN LA AVERIGUACIÓN DEL DELITO Y DELINCUENTE, AUNQUE POR IGNORARSE QUIENES SEAN ÉSTOS, NO SE PRACTIQUEN DICHAS DILIGENCIAS CONTRA PERSONAS DETERMINADAS. S/ SE DEJARA DE ACTUAR, LA PRESCRIPCIÓN COMENZARÁ DE NUEVO DESDE EL DIA DE LA OLTIMA DILIGENCIA. EL TIEMPO EMPLEADO EN LA CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN, INTERRUMPE LOS TÉRMINOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL TÉRMINO TOTAL PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN, NUNCA PODRÁ EXCEDER DEL QUE CORRESPONDA SEGÚN EL ARTÍCULO 139 DE ESTE CÓDIGO. Y UNA MITAD MÁS.

ARTICULO 133.- S/ PARA DEDUCIR UNA ACCION PENAL EXIGIERE LA LEY PREVIA DECLARACION DE ALGUNA AUTORIDAD. NO COMENZARA A CORRER LA PRESCRIPCION SINO HASTA QUE SE EMITA TAL DECLARACION.
(REFORMADO, P.O. 8 DE JULIO DE 1992)

ARTICULO 134.- UNA VEZ CONSIGNADA LA INVESTIGACION A LA JUR/SDICCION, LA PRESCRIPC/ON SOLO SE INTERRUMPE POR LAS ACTUACIONES PRACTICADAS Y ORDENADAS POR EL JUEZ PARA LA COMPROBACION DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. ES APLICABLE EN EL SUPUESTO DE ESTE ARTÍCULO, LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 132.

ARTICULO 135.- LAS PREVENCIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR, NO CORRESPONDEN AL CASO EN QUE LAS ACTUACIONES SE PRACTIQUEN DESPUES DE QUE HAYA TRANSCURRIDO LA MITAD DEL LAPSO NECESARIO PARA LA PRESCRIPCION: ENTONCES, ESTA NO SE INTERRUMPIRA SINO POR LA APREHENSION DEL INCULPADO.

(REFORMADO, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)

ARTÍCULO 136. LA MULTA PRESCRIBE EN DOS AÑOS; EN IGUAL FORMA PRESCRIBEN LAS SANCIONES NO SUJETAS A TÉRMINO. LAS DEMÁS SANCIONES PRESCRIBEN POR EL TRANSCURSO DE UN PERIODO IGUAL AL QUE DEBIAN DURAR Y UNA CUARTA PARTE MÁS. PERO NUNCA EXCEDERÁN DE SESENTA AÑOS.

(REFORMADO, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)

ARTICULO 137. CUANDO EL REO HUBIERE EXTINGUIDO YA UNA PARTE DE SU SANCIÓN, SE NECESITARÁ PARA LA PRESCRIPCIÓN TANTO TIEMPO COMO EL QUE FALTARE DE LA CONDENA. Y UNA CUARTA PARTE MÁS DEL QUE FALTE POR EXTINGUIR; PERO ESTOS DOS PERIODOS SUMADOS. NO EXCEDERÁN DE SESENTA AÑOS.

ARTICULO 138.- LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD SOLO SE INTERRUMPE APREHENDIENDO AL REO. AUNQUE LA APREHENSION SE

EJECUTE POR OTRO DELITO DIVERSO.
LA PRESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS IMPUESTAS AL REO. SOLO SE
INTERRUMPE POR EL EMBARGO DE BIENES PARA HACERLAS EFECTIVAS.

ARTICULO 139.- PARA LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES PENALES SE TENDRA COMO BASE EL TERMINO MEDIO ARITMETICO DE LA SANCION SEÑALADA AL DELITO DE QUE SE TRATE. PERO EN NINGUN CASO BAJARA DE TRES AÑOS.

(SE ADICIONA, P. O. 13 DE MARZO DEL 2007)

LA ACCIÓN PENAL Y LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS SANCIONES, EN RELACIÓN CON LOS DELITOS TIPIFICADOS POR LOS ARTICULOS 165 BIS Y 176 DE ESTE CÓDIGO. PRESCRIBIRÁN EN UN PLAZO DOBLE AL SEÑALADO POR ESTE ORDENAMIENTO.

De lo anterior podemos apreciar que en unos casos la prescripción opera si se trata d delitos que se persiguen previa querella en el lapso de un año. En otros casos se habla de qu para fijarla se estará a operaciones aritméticas que dependen del tiempo de privación de libertad
que el tipo específico del delito contemple. En sí, se aprecian diversos escenarios mediante los cuales aquellas personas que cometen un hecho delictivo pueden verse sustraídas de la acción de la justicia por el solo paso del tiempo, evadiendo su responsabilidad y dejando a sus víctimas u ofendidos en un estado de indefensión absoluta.

Por otro lado, y analizando la figura jurídica de la prescripción en materia penal, encontramos que ésta tutela de manera preponderante la zozobra que pudiera resultar en la persona del infractor social que comete un hecho calificado por la ley como delito, lo que jamás debe estar por encima de su obligación de responder ante la sociedad por su quebranto a los bienes que protege en sus demás artículos el catálogo sustantivo de la materia.

A mayor abundamiento se citan los derechos de las víctimas, mismos que se consideran en momento alguno deben estar supeditados a ser

disminuidos o prescritos en su reclamo y reparación bajo el supuesto de no ejercer zozobra en el delincuente.

Más aún, con esta reforma no se está prejuzgando sobre la responsabilidad de la persona que se denuncie, sino se está dejando abierto el marco temporal de su investigación, procesamiento y sentencia, el cual no debe ser limitado y menos a un año como lo marca nuestro código en tratándose de los delitos perseguibles por querella.

Esta bancada considera que, en un amplio marco de protección garantista de las víctimas y ofendidos en la entidad, no debe existir un término temporal para que se les administre justicia, por lo que la figura jurídica de la prescripción en materia penal resulta violatoria de los derechos en cita.

Así, podemos señalar que se trata de un concepto que abarca dos aspectos de la realidad. Por un lado, la prescripción de la acción pública: es decir, el vencimiento de cierto plazo tras la comisión de un delito y que constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal pública, para el enjuiciamiento y la eventual condena. Y por otra parte, la prescripción puede referirse también a las sanciones (o penas) aplicadas a los responsables de un tipo penal: el vencimiento de cierto plazo constituye un obstáculo para la ejecución de una condena penal.[1]

Entonces, la prescripción es la sanción jurídica que opera en un proceso penal por habe transcurrido un plazo determinado, sin que se haya enjuiciado a un imputado, o bien, sin que se haya hecho efectiva la aplicación de la condena a un sentenciado.

La prescripción, y sus efectos así planteados, resulta cuestionable desde el comienzo, pues aceptarla como una institución legítima dentro de la normativa protectora de los derechos humanos, constituiría una segunda violación más de esos mismos derechos, pues la persona víctima (como el centro del ordenamiento) se ve doblemente afectada, por el crimen y por la impunidad que implica la falta de sanción (y a veces también la falta de la investigación misma).

El fundamento teleológico del Derecho Penal es lograr la protección de los derechos esenciales de la persona en toda la comunidad con base a principios elementales; Verdad, Debido Proceso, Justicia, Sanción (sin impunidad) y Reparación. La finalidad de no aplicar la prescripción en materia de violación del derecho es velar por la justicia y evitar la impunidad en su más amplio sentido.

En robustecimiento de lo anterior, se esgrime que nuestro catálogo penal vigente ya contempla varias figuras delito como imprescriptibles las cuales se encuentran enunciadas en el artículo 140 el cual se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 140.- SERAN IMPRESCRIPTIBLES, TANTO LA ACCION COMO LA SANCION EN LOS CASOS SIGUIENTES:

(REFORMADA, P.O. 09 DE ABRIL DE 2018)

1.- LA COMISIÓN DE DELITOS DE TERRORISMO, SABOTAJE, VIOLACIÓN Y FIGURAS EQUIPARADAS, DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARRICIDIO, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, HOMICIDIO CALIFICADO, Y LOS SEÑALADOS EN LOS ART{CULOS 201 BIS, 201 BIS 2, Y 331 BIS 2 DE ESTE CÓDIGO;

II.- LOS DELITOS DOLOSOS CAUSADOS POR INUNDACION, INCENDIO, MINAS, BOMBAS O EXPLOSIVOS; Y

III.- LOS DELITOS DOLOSOS QUE SE COMETAN POR ENVENENAMIENTO, ASFIXIA, GAS, CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD INCURABLE, O ENERVANTES CUANDO SEAN DOS O MAS LAS VICTIMAS.

Es decir, el ordenamiento penal vigente tiene ya insertas diversas figuras delictivas q e califica de imprescriptibles, lo que resalta que la prescripción no es dable por favorecer la impunidad, la revictimización, la sustracción de la acción de la justicia y la evasión de la responsabilidad del infractor social. Por lo tanto, no debe existir distinción alguna entre los diversos tipos de delincuentes y delitos que permita que unos queden impunes y otros sean procesados con base al simple transcurso del tiempo.

Consideramos que todo delito debe ser perseguible, investigable, procesable y sentenciable sin importar si éste se denuncia dentro de determinado periodo procesal, ya que de dejarse sin lo apuntado a determinados delitos, se está favoreciendo a la implementación de un marco de impunidad que a la fecha ha servido como herramienta para que los responsables de diversos hechos delictivos evadan la acción de la justicia e incumplan con su responsabilidad de reparar los daños provocados en sus víctimas. Por lo que no se cuenta con una razón lógica jurídica, por la cual se justifique el contar con la figura de la prescripción en el Código penal para el Estado de Nuevo León.

Ante ello, proponemos una reforma por modificación al artículo 140 y por derogación de los artículos 122 al 139 del código penal del Estado de Nuevo León, a fin de adicionar un marco legal que garantice no se vulneren los derechos de las víctimas de delito en la entidad. Así mismo, la presente iniciativa se plantea en concordancia y relación con la Agenda 2030 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible: *Aspiramos a un mundo en el que*
sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación;... un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más *vulnerables.*

Es por lo que sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se *reforma por modificación al artículo 140 y por derogación de los artículos 122 al 139 del Código penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:*

Articulo 122.- Se deroga.

Articulo 123.- Se deroga.

Articulo 124.- Se deroga.

Articulo 125.- Se deroga.
Articulo 126.- Se deroga.

Articulo 127.- Se deroga

Articulo 128.- Se deroga.

Articulo 129.- Se deroga.

Articulo 130.- Se deroga.

Articulo 131.- Se deroga.

Articulo 132.- Se deroga.

Articulo 133.- Se deroga.

Articulo 134.- Se deroga.

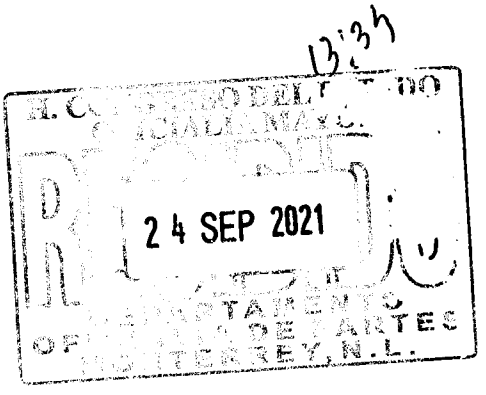
Articulo 135.- Se deroga.

Articulo 136.- Se deroga.

Articulo 137.- Se deroga.

Articulo 138.- Se deroga.

Articulo 139.- Se deroga.



Artículo 140. En el Estado de Nuevo León todos los delitos contenidos en éste código son imprescriptibles.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enriquez Hernández

[redacted]

168

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION AL CAPITULO 1 DEL TITULO NOVENO DENOMINADO RESPONSABILIDAD MEDICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ADICIONANDO LOS ARTICULO$ 228 BIS, 228 BIS 1, 228 BIS 11 Y 228 BIS 111 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.
Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:
Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.
Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.
Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:
Turno a comisiones para su estudio.
Elaboración del dictamen correspondiente.
Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que

establece:
"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."
"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."
Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, identificándose bajo el expediente 12062/LXXV, presentada en sesión el 23 de Octubre del 2018, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pùblica y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.
Referencia:
Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestro Código Penal vigente en el estado de Nuevo León encontramos que en el Título Noveno, denominado RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en su Capítulo 1 relativo a la RESPONSABILIDAD MÉDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se establecen las figuras jurídicas que describen qué hechos cometidos por profesionales de la medicina y técnicos de la salud serán considerados como figura delictiva, enmarcándolos en un catálogo descriptivo que carece del enfoque adecuado, a fin de que pueda tutelar todo concepto que es calificado como delito por nuestra normativa en ese

rubro de forma específica y pormenorizada. A mayor abundamiento, exponemos a continuación los elementos que actualmente configuran el tipo delictivo que nos ocupa.

Al respecto, los artículos 227, 228, 229 y 231 del Código Penal para el Estado de Nuevo
León disponen lo siguiente:

Artículo 227.- Los médicos, cirUJanos y demás profesionales similares y auxiliares, serán pena/mente responsables en la práctica de la profesión, en los términos siguientes:

1.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicara suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión, o definitiva en caso de reincidencia; y

1/.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus ayudantes, enfermeros, o practicantes, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos o cuando resulte un daño ocasionado con motivo de un diagnóstico evidentemente inapropiado al padecimiento, debiéndose comprender tos gastos médicos y funerarios en su caso, que resultetJ en la comisión de este delito.

Artículo 228.- El artículo anterior se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente.

Artículo 229.- Se sancionará con prisión de dos a seis años y multa de diez a cincuenta cuotas a
los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, en los casos
siguientes:

I.-Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, pretextando adeudos de cualquier índole;
II.- Retener, sin necesidad, a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la
fracción anterior; y
III.- Retardar o negar, por cualquier motivo, la entrega inmediata de un cadáver, excepto cuando se

requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias, que aduciendo adeudos o por cualquier otro motivo injustificado, retarden o nieguen la entrega de uno o varios cadáveres.

Artículo 231.- Igualmente serán responsables, en la forma que previene el artículo 227, todos los que causen daños indebidos en el ejercicio de una profesión, arte o actividad técnica.

A mayor ilustración nos permitimos transcribir la siguiente tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época Registro: 2006245 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1
Materia(s): Penal, Administrativa Tesis: 1a. CLXXV/2014 (10a.)
Página: 810

NEGLIGENCIA MÉDICA. SUS CONSECUENCIAS EN EL PROCESO PENAL. En algunos
casos *la negligencia médica puede dar lugar a la configuración de diversos delitos, dependiendo de las circunstancias del caso en concreto. Así, algunos de los tipos penales en los que pueden incurrir los médicos por actuar negligentemente son: responsabilidad profesional, lesiones. y homicidio, y su objeto es imponer alguna pena al personal médico que hubiera actuado delictuosamente. De ahí que si en el proceso penal/a víctima tiene derecho a la reparación del daño,* éste *deberá ser reparado por el médico pena/mente responsable y no por la entidad pública para la que labora.*

La tesis anterior describe a detalle los supuestos que pueden derivar de la llamada negligencia médica. En algunos casos la negligencia médica puede dar lugar a la configuración de diversos delitos, dependiendo de las circunstancias del caso en concreto.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. DISTINCIÓN ENTRE ERROR Y MALA
PRÁCTICA PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. *Suele señalarse que la medicina no* es *una ciencia exacta, pues existen matices en el*

curso de una enfermedad o padecimiento que pueden inducir a diagnósticos y terapias equivocadas. Así. una interpretación errada de los hechos clínicos por parte del médico puede llevar a un diagnóstico erróneo que. aunque no exime de responsabilidad al médico que lo comete. no reviste la gravedad de la negligencia médica. por lo que se habla entonces de un error excusable. pues lo que se le pide al "buen médico" es aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas con diligencia, compartiendo con el paciente la información pertinente, haciéndole presente sus dudas y certezas, tomando en cuenta sus valores y creencias en la toma de decisiones y actuando con responsabilidad y prudencia. Por otro lado. el término malpraxis (mala práctica médica} se ha acuñado para señalar conductas impropias del profesional frente a un paciente y que no sigue las normas o pautas que señala la /ex artis médica. pero no hay aquí un error de juicio. sino que. o la actuación del médico que está en posesión de conocimientos y habilidades ao ha sido diligente. o éste ha actuado con impericia e imprudencia frente a una situación clínica para la cual no está capacitado: este tipo de conducta médica constituve un error médico inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta inapropiada. Por tanto. la responsabilidad profesional está subordinada a la previa acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios. independientemente del resultado.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. SIGNIFICADO DEL CONCEPTO LEX ARTIS PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. De los artículos 9o. del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 2o., fracciones XIV y XV, del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. se advierte que la /ex artis médica o "estado del arte médico". es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico. en posesión de conocimientos. habilidades y destrezas. debe aplicar diligentemente en la situación concreta de un enfermo y que han sido universalmente aceptados por sus pares. Esto es, los profesionales de la salud han de decidir cuáles de esas normas, procedimientos y conocimientos adquiridos en el estudio y la práctica, son aplicables al paciente cuya salud les ha sido encomendada, comprometiéndose únicamente a emplear todos los recursos que tengan a su disposición, sin garantizar un resultado final curativo. Lo contrario supondría que cualquier persona, por el simple hecho de someterse a un tratamiento, cualquiera que éste sea, tendría

asegurado, por lo menos, una indemnización por responsabilidad profesional en el supuesto de que el resultado obtenido no fuera el pretendido, por Jo que es necesario romper, en ocasiones, la presumida relación de causalidad entre la no consecución del resultado pretendido, es decir, el restablecimiento de la salud del paciente y la actuación negligente o irresponsable del médico, puesto que, además, no son pocos Jos casos en que las consecuencias dañosas producidas tienen su origen, no en la asistencia prestada por éste, contraria a la /ex artis, sino en las patologías previas y a menudo gravísimas que presentan los pacientes.

La primera de las tesis versa sobre los preceptos que deben analizarse cuando se trate de dirimir sobre la punibilidad de un hecho derivado de la actuación médica, pues se deben ponderar diversos conceptos y supuestos jurídicos para verificar que efectivamente se está ante una conducta que deba ser o no castigada.

Asimismo, las tesis anteriores dejan en manifiesto la necesidad de contar con un articulado que contenga la descripción especifica del delito en que pueden incurrir los médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares cuando causen daños indebidos en el ejercicio de su profesión o actividad técnica, provoquen lesiones o priven de la vida a una persona derivado del ejercicio de sus labores por no seguir los procedimientos o prácticas establecidas y aceptadas para el tratamiento de determinada enfermedad o lesión, de tal suerte que no se ocasiona un menoscabo al paciente con la intención de afectarlo, sino de la inaplicación e inobservancia de dichos criterios. Es decir, se debe especificar, de una manera precisa y certera, qué se entiende por delito cometido por médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares derivados
del ejercicio de su empleo o profesión por la omisión de aplicar o conducirse en apego a los lineamientos y procedimientos establecidos, así como la pena asequible a tal hecho.

Es necesario comprender que los médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares del área de sanidad tienen como objetivo fundamental el cuidar y salvaguardar la vida. Por lo tanto, hablar de médicos, cirujanos y demás profesionales similares y auxiliares del área de salud, estamos hablando de personas comprometidas con velar por el bienestar humano en sus más altos estándares de calidad y cuya instrucción académica fue enfocada a dicho fin. Por ende, en el momento en que el médico o cualquier otro profesional de la salud actúa de forma contraria a la *Lex Artis* Médica,

es decir cuando se actúa contrariamente al conjunto de normas y protocolos que rigen su profesión, es cuando nos vemos ante la configuración de un daño derivado de 1negligencia médica.

En México la atención médica, hospitalaria y prehospitalaria no siempre se lleva a cabo conforme a la normativa oficial, de tal suerte que es muy común ver víctimas de la mala práctica médica, tanto en hospitales privados como en instituciones de seguridad social públicos. En nuestro país alrededor del 80% ochenta por ciento de las negligencias médicas no se denuncian, según datos recabados y proporcionados por organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, según medios de información se tiene que durante el 2016, se interpusieron más de 14 mil quejas por negligencias médicas, obteniendo según la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que los Estados de Michoacán, Jalisco y Estado de México son los que cuentan con más demandas, mientras que, a nivel institucional, el primer lugar lo ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2.

Entre septiembre de 201O y agosto de 2011, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) ha estimado concluir 12,003 doce mil tres asuntos relacionados con inconformidades de usuarios de servicios de salud. Algunos de los resultados de presuntas irresponsabilidades médicas son secuelas orgánicas y psicológicas, lesiones irreversibles e y fallecimiento. Las quejas más frecuentes se deben a la falta de medicamentos, equipo y material; saturación de servicios de especialidad; sobresaturación en las clínicas de primer nivel; falta de especialistas y costo excesivo en hospitales privados, entre otros.3

En concordancia con el espíritu de los criterios de la nueva legislación adjetiva penal, la justicia hoy en día debe ser restaurativa, teniendo a la pena privativa de libertad como la última opción, por lo que se debe primar a la reparación del daño al tratarse de este tipo de conductas, donde no se tenía la intención de causar un menoscabo a la persona del paciente. ya que el ejercicio de la medicina implica oer se la acción de hacer todo lo posible para salvaguardar la vida. es decir. cuando se obró con culpa, mas no con la intención de dañar.

Justamente aquí es donde se debe procurar un equilibrio entre las leyes y las instituciones que responda a las demandas de justicia por parte de las

víctimas y sus familiares, pero a su vez observando que la norma comprende el tazar una de las labores más loables, altas y complejas\ del ser humano, que es el ejercicio de la medicina, cuya finalidad primordial consiste en preserva la vida y combatir la enfermedad, por lo que, como legisladores y sociedad tenemos la obligación de encontrar dicho equilibrio entre ambas partes y sus derechos. \
\

Por lo anterior, hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de obtener el antes mencionado equilibrio es brindándole a los profesionales de la salud la certeza de que, en caso de homicidio o lesiones culposas productos de un error razonable o de un imprevisto en el desempeño de su función, ni la legislación ni la autoridad presupongan el dolo en el ejercicio de su profesión y, por lo tanto, no sean sujetos a penas de prisión preventiva, sino que sean investigados
por la autoridad persecutora como lo es el representante social en la figura del Ministerio Público para que éste determine eficientemente la culpa y, por consiguiente, se avoque a la consecución de la reparación del daño derivado del acto médico negligente.

Por otra parte, creemos necesario el establecer efectivamente los lineamientos legales que sirvan como sustento y fundamento de las investigaciones y sanciones que se apliquen a loshechos derivados de la práctica médica, debiendo separar aquellos que resultan de la culpa, donde no se tiene la intención de lesionar a un paciente pero por causa de no seguir los procesos establecidos para la atención medica especifica se ve soslayada la integridad del mismo; de aquellos que resultan donde aún y cuando, habiéndose seguido los pasos y procedimientos establecidos y reconocidos por la propia *Lex Artis* médica, el resultado fue la muerte o la lesión de la persona que se encontraba bajo el cuidado médico, y de donde no se obtendría culpabilidad o responsabilidad alguna por parte del galeno. La misma suerte debe primar cuando se analice un caso en donde sea posible acreditar que el profesional médico obró con la plena intención de quitar una vida o causar un menoscabo a quien se encontraba bajo su cuidado, apareciendo entonces la figura que se vea revestida de dolo, con sus agravantes y sanciones corporales inherentes.

Por lo anteriormente expuesto, se estima que se debe insertar al Capítulo 1 del Título Noveno, denominado Responsabilidad Médica, Técnica y Administrativa, los artículos 228 BIS, 228 BIS 1, 228 BIS 11 y 228 BIS 111 al Código Penal del Estado de Nuevo León sobre la negligencia médica, a fin de dotar de certeza y efectividad a la investigación, persecución y procesamiento de los asuntos cuyos hechos ahí se encuadren, brindando

un marco legal justo y equitativo, tanto a las víctimas y sus familiares, como a los médicos y demás profesionales de la salud; así como la hipótesis jurídica que contemple el resultado de que, aún habiendo obrado con apego a la */ex artis* médica, acontezcan lesiones o incluso la muerte del paciente, no resulte responsabilidad alguna.

Por lo anterior que sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:

DECRETO

Artículo 228 BIS.- Cometen el delito de negligencia médica, los médicos, cirujanos y demá profesionales similares, técnicos y auxiliares de la salud, cuando obrando sin dolo, por· motivo del ejercicio de su empleo, causaren lesiones de cualquier tipo o incluso la muerte a un paciente, o un menoscabo a su capacidad mental, de forma que ésta se vea disminuida, por haber realizado actos no apropiados o no haber actuado con la pericia requerida para el caso particular, no haber cumplido con los parámetros y estándares para enfrentar el caso, no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión médica, vulnerando ;las prácticas médicas aceptadas como adecuadas y vigentes para tratar a los enfermo al momento del cometimiento del delito.

Artículo 228 BIS I- El delito de negligencia médica se perseguirá únicamente a petición de parte afectada.

Artículo 228 BIS II.- Al responsable del delito de negligencia médica se impondrá una pena de 3 tres meses a 2 dos años de prisión y se condenará además a la reparación del daño y gastos originados derivados de la mala práctica.

Articulo 228 BIS III.- No se considerará delito de negligencia médica ni se perseguirá aquella acción que ocurre cuando el profesional de la salud, similares, técnicos y auxiliares que habiendo actuado bajo los estándares de la */ex artis* medica o estado del arte médico, no hayan podido evitar la muerte o la lesión, o disminución de la capacidad mental o de los sentidos del paciente; así mismo no tendrán obligación de reparación del daño, indemnización o gastos a las personas que, pensándose víctimas u ofendidos, denuncien actos

médicos ocurridos bajo este supuesto.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

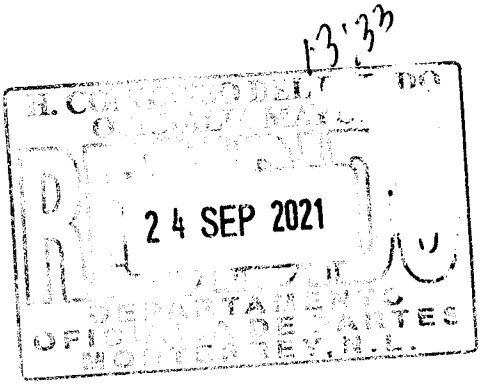
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

169

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 228 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos*

pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 13S85/LXXV, presentada en sesion: 01 DE JULIO DE 2020 y turnada a la comisión de: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención institucional del parto, conlleva en muchas ocasiones la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres lo que se manifiesta a través de regañós, burlas, ironías, insultos, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, omisión en la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el . curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, así como el manejo del dolor durante el parto, como castigo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI}, 38.1% del total de nacimientos ocurren mediante cesáreas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 refiere que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en 2016 realizó un estudio que muestra que 29 de cada cien mujeres reportan algún tipo de abuso durante la atención del parto, 19 de cada cien refirieron algún tipo de abuso verbal, con frases intimidatorias y que limitan el derecho de las mujeres a expresar sus emociones y proceso natural de dolor que conlleva el trabajo de parto; pero sobre todo cuando analizaron el contexto en el cual se expresaron dichos comentarios, afirmaron se configura claramente el escenario de abuso al cual someten a las mujeres en la atención del parto.

Retomo un testimonio de dicho estudio, en el cual las pacientes señalaron que el personal de salud les decía:

> "... *no llore, aguántese, acuérdese como lo estaba haciendo, ahí si lo gozaba...*"

En otro testimonio, el personal médico refirió:

> "...*por que no lloró cuando abrió las piernas...*"

La OMS afirma que en promedio las maternidades deberían tener entre un 10 y un 15o/o de cesáreas; en este estudio de la Comisión Nacional

Por ello, se ha buscado visibilizar el concepto de violencia obstétrica como un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

La violencia obstétrica se genera en los servicios de salud públicos y privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género.

Aunado a que en muchas ocasiones la atención deficiente en la prestación de los servicios se debe a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así como los procesos de enseñanza para el personal médico que favorecen una visión autoritaria que fomenta el maltrato y en la que las opiniones de las mujeres no son
tomadas en cuenta durante los procesos
obstétricos.

La violencia obstétrica según expertos se presenta en dos modalidades:

---

[1] REVISTA CONAMED 11 VOL. 21 Suplemento 1, 201611 PUBLICADO PRIMERO EN LfNEA 11 ISSN 2007-932X

1) Por un lado, la física, la cual se "configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico.

2) El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio, humillante, cuando la mujer requiere atención médica, o en el transcurso de una práctica obstétrica.

En Nuevo León, existen algunos hospitales que no cuentan con recursos humanos y materiales necesarios para que el personal de salud efectúe su trabajo. La falta de estos recursos técnicos y humanos constituye un obstáculo para la adecuada atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el período posterior al parto, con lo cual el Estado estaría

incumpliendo con la obligación de poner a disposición de toda la población los medios necesarios a fin de que pueda ejercer su derecho a la salud, lo que implica la existencia de responsabilidad institucional.

La ausencia de una atención gineco-obstétrica oportuna, debido a la escasez de médicos de base en turno para atender las emergencias, cubrir guardias, o suplir al personal; constituye también responsabilidad institucional.

La carencia de personal médico de base (obstetras), provoca que algunos tengan que doblar turno, lo que puede ocasionar el cansancio del personal, que puede impactar en la atención médica. Del mismo modo, da lugar a que médicos residentes, efectúen sus labores sin la supervisión de un superior, ***situación que puede favorecer los actos constitutivos de violencia obstétrica.***

La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a México incluir el concepto de violencia obstétrica en las definiciones de violencia en la Ley General y las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Afirman que es mediante el reconocimiento explícito de su práctica, que podrán encontrarse los mecanismos para su atención y erradicación

Es de hacer notar, que entidades como Veracruz, Durango, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Coahuila, Zacatecas y la Ciudad de México, ya cuentan en su ordenamiento con el concepto de violencia obstétrica.

El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano reconoce la labor de los médicos de nuestra entidad y sus grandes aportaciones. No se pretende criminalizar la labor médica; sólo sancionar y erradicar conductas del personal de salud que violen los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en la atención del embarazo, parto y puerperio.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 4° de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud.

SEGUNDO: Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido al derecho a la protección de la salud "como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

TERCERO. Que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General No 24, recalcó que: "es obligación de los Estados garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos, a servicios obstétricos de emergencia, y deben asignarse a esos servicios el máximo de recursos disponibles.

Por lo anterior se propone el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por adición de UN ARTÍCULO 228 bis el Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TITULO NOVENO RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

CAPITULO 1 RESPONSABILIDAD MÉDICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 228 BIS. COMETE EL DELITO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA, EL PERSONAL DE SALUD, QUE CON SU CONDUCTA, ACCIÓN U OMISIÓN, EJERZA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, Y QUE AFECTE A LAS MUJERES DURANTE LOS PROCESOS DE EMBARAZO, PARTO O

PUERPERIO, EXPRESADA EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:

I. EFECTÚE PRÁCTICAS QUE NO CUENTEN CON EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO E INFORMADO DE LA MUJER;

II. OMITA OTORGAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ EN EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO O EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS;

III. OBSTACULICE SIN CAUSA MÉDICA JUSTIFICADA EL APEGO PRECOZ DEL NIÑO O NIÑA CON SU MADRE, NEGÁNDOLE LA POSIBILIDAD DE CARGARLO Y AMAMANTARLO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE NACER;

IV. ALTERE EL PROCESO NATURAL DE PARTO DE BAJO RIESGO, MEDIANTE EL ABUSO DE MEDICACIÓN, USO DE TÉCNICAS DE ACELERACIÓN, SIN OBTENER EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO E INFORMADO DE LA MUJER; Y

V. PRACTIQUE EL PARTO VÍA CESÁREA CUANDO EXISTAN CONDICIONES PARA EL PARTO NATURAL SIN OBTENER EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO, EXPRESO E INFORMADO DE LA MUJER.

SE SANCIONARÁ CON PRISION DE DOS A SEIS AÑOS Y MULTA DE DIEZ A CINCUENTA CUOTAS AL PERSONAL DE SALUD QUE COMETA EL DELITO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA.

TRANSITORIO

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

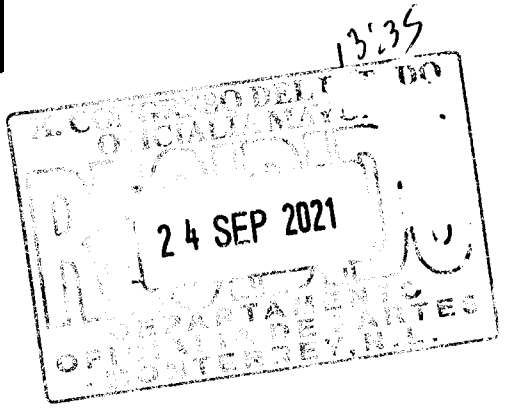
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



170

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.

- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: **Expediente**: 13513/LXXV **presentada en sesion**: 21 de mayo del 2020 y turnada a la comisión para la Igualdad de Género

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Nuevo León es la entidad que ocupa el primer lugar en abuso sexual con 148 casos; el segundo lugar en el delito de violación con 84 casos y el quinto lugar con 88 casos en acosos sexual.

Somos el cuarto lugar en presuntas víctimas mujeres de corrupción de menores y el quinto lugar en trata de personas.

En el contexto de violencia que viven las mujeres de Nuevo León, agravado por la situación de la pandemia, presentamos dos iniciativas.

En el contexto de violencia que viven las mujeres de Nuevo León, agravado por la situación de la pandemia, presentamos dos iniciativas:

1.- De reforma a la fracción IV del artículo 5°; al primer párrafo del artículo 15; el primer párrafo artículo 23; la fracción X del artículo 28; fracción 1, V, VI, y VIII del artículo 35; fracción VI del artículo 36. Y por adición de una fracción XVII al artículo 5°; al artículo 17 BIS; fracción XII, XIII, XIV y XV del artículo 32; el Capítulo X denominado "REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" integrado de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2.- De reforma por modificación al último párrafo del artículo 108, la fracción 11 del artículo 143. Y por adición a un inciso F) al artículo 86; el Capítulo VI. denominado "Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de Nuevo León" integrado de los artículos 98 TER y 98 TER 1; un quinto párrafo al artículo 111; y un artículo 260 BIS. Todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Ambas tienen la finalidad de incorporar a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como al Código Penal para el Estado de Nuevo León, un REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN que será un sistema de información de carácter público que contendrá los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal en delitos como Abuso Sexual, Violación y Feminicidio.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos personales de las víctimas o datos que hagan posible su localización e identificación y ocasionen una revictimización.

Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.

Los organismos internacionales han llamado a los gobiernos a visibilizar la violencia para la toma de decisiones, debemos contar con información exhaustiva y actualizada que permita tomar las mejores decisiones para abordar la violencia contra las mujeres, en las leyes y políticas públicas y para lograr su erradicación, sin dejar de considerar que la información y datos estadísticos son indispensables para las investigaciones y la labor periodística.

Puesto que, este conjunto de datos será indispensable para la orientación de políticas públicas; y de igual manera, visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres

Considerando todo lo anterior, y velando por la protección a las mujeres a una vida libre de violencia, es necesario adaptar nuevas disposiciones a nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como a continuación se menciona:

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
ARTICULO 86.- SON MEDIDAS DE SEGURIDAD: A) INTERNACION Y CURACION DE PSICOTICOS Y ENFERMOS MENTALES; B) INTERNACION Y EDUCACION DE SORDOMUDOS; C) INTERNACIÓN Y CURACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES, ALCOHÓLICOS, PERVERSOS SEXUALES E INADAPTADOS; D) TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA; Y E) MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY.	ARTICULO 86.- SON MEDIDAS DE SEGURIDAD: A) INTERNACION Y CURACION DE PSICOTICOS Y ENFERMOS MENTALES; B) INTERNACION Y EDUCACION DE SORDOMUDOS; C) INTERNACIÓN Y CURACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES, ALCOHÓLICOS, PERVERSOS SEXUALES E INADAPTADOS; D) TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA; Y E) MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY. **F) ORDENAR SE REGISTRE AL SENTENCIADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE ESTE CÓDIGO PARA EFECTOS DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.**
Sin correlativos	CAPITULO VI REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ARTÍCULO 98 TER.- EL JUEZ TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS, POR LOS DELITOS DE FEMINICIDIO, EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 331 BIS 2 FRACCIÓN I, VIOLACIÓN, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS

	265, 266, 266 BIS, 267 Y 268, TODOS DE ESTE CÓDIGO, ORDENARÁ INVARIABLEMENTE SU REGISTRO, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA. DICHO REGISTRO TENDRÁ UNA DURACIÓN MÍNIMA DE DIEZ Y MÁXIMA DE 30 AÑOS. **DICHO REGISTRO SUBSISTIRÁ DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, AUNQUE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA SEA SUSTITUIDA O SUSPENDIDA EN TÉRMINOS DE LEY; Y SE EXTENDERÁ POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DIEZ AÑOS Y MÁXIMO DE 30 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE EL SENTENCIADO, POR CUALQUIER MOTIVO DIVERSOS A LOS YA SEÑALADOS, OBTENGA SU LIBERTAD.** **ARTÍCULO 98 TER 1.- EL REGISTRO DE LOS SENTENCIADOS POR LOS DELITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO QUE ANTECEDE, SE HARÁ EXTENSIVO SIN IMPORTAR EL SEXO DE LA VÍCTIMA O VÍCTIMAS DEL DELITO Y CUANDO SEA MENOR DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.**
ARTÍCULO 108.- LA CONDENA CONDICIONAL, SUSPENDE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR SENTENCIA DEFINITIVA, DE ACUERDO CON LAS FRACCIONES SIGUIENTES, TOMANDO EN CUENTA LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE ESTE CÓDIGO. I a VII... QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 153, 154, 164, 165, 165 BIS, 176, 265, 267, 268, 313, 322, 403 Y 406 BIS DE ESTE CÓDIGO.	ARTÍCULO 108.- LA CONDENA CONDICIONAL, SUSPENDE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR SENTENCIA DEFINITIVA, DE ACUERDO CON LAS FRACCIONES SIGUIENTES, TOMANDO EN CUENTA LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE ESTE CÓDIGO. I a VII... QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 153, 154, 164, 165, 165 BIS, 176, 265, **266**, **266 BIS**, 267, 268, 313, 322, **331 BIS 2**, 403 Y 406 BIS DE ESTE CÓDIGO.

ARTÍCULO 111.- EL PERDÓN OTORGADO POR LA VÍCTIMA, OFENDIDO O POR QUIEN SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA OTORGARLO, EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I a III... ... ... ADEMÁS NO PROCEDERÁ EL PERDÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: A) a C)	ARTÍCULO 111.- EL PERDÓN OTORGADO POR LA VÍCTIMA, OFENDIDO O POR QUIEN SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA OTORGARLO, EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I a III... ... ... **NO APLICARÁ LA EXCEPCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES** ADEMÁS NO PROCEDERÁ EL PERDÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: A) a C) ... ...
ARTICULO 143.- LA REPARACION DEL DAÑO COMPRENDE: I.- ... II.- LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL CAUSADO, INCLUYENDO EL PAGO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA DE LA PERSONA AGREDIDA, QUE COMO CONSECUENCIA DEL DELITO SEA NECESARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD; III a V... ...	ARTICULO 143.- LA REPARACION DEL DAÑO COMPRENDE: I.- ... II.- LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL CAUSADO, INCLUYENDO EL PAGO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA DE LA PERSONA AGREDIDA, QUE COMO CONSECUENCIA DEL DELITO SEA NECESARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD; **CON INDEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE LAS AUTORIDADES PROPORCIONEN A LAS VÍCTIMAS. DICHA REPARACIÓN NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES, CUANDO SEA PROCEDENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE CÓDIGO;**

	III a V... ...
Sin correlativo	**ARTÍCULO 260 BIS 1.- PARA LOS DELITOS SEÑALADOS EN ESTE CAPÍTULO EL JUEZ ORDENARÁ QUE EL SENTENCIADO SEA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD; SALVO QUE SEAN PERSEGUIDOS POR QUERELLA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 98 TER Y 98 TER 1 DE ESTE CÓDIGO**

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 1°, segundo y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

SEGUNDO.- Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad.

TERCERO.- Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Belém doPará", en su artículo 1 se refiere a que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en México.

Además, dicho organismo, recomendó que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es necesario generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas.

CUARTO.- Que el Artículo 5, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es de hacer notar que existe un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito, con el rubro:

PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONCULCA ESE DERECHO.

El artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es una disposición de orden público y de observancia obligatoria que impone el deber al Poder Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias, incluso aquellas que no hayan causado estado o ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, el hecho de que se publiquen las resoluciones que se emitan en un juicio de amparo, no conculca el derecho de privacidad, ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la información que la ley clasifica como confidencial, esto porque la finalidad de la ley es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; de no ser así, se haría nugatorio el fin superior de transparentar y dar publicidad a las sentencias, que redunda en preservar la seguridad jurídica y hacer prevalecer un Estado democrático de derecho.

Por lo expuesto, y considerando que es necesaria la reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León, proponemos el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma por modificación al último párrafo del artículo 108, la fracción II del artículo 143. Y por adición a un inciso F) al artículo 86; el Capítulo VI denominado "registro público de personas agresoras sexuales del estado de nuevo león" integrado de los artículos 98 TER y

98 TER 1; un quinto párrafo al artículo 111; y un artículo 260 BIS 1. Todos del **Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:**

ARTICULO 86.- SON MEDIDAS DE SEGURIDAD:

A) INTERNACION Y CURACION DE PSICOTICOS Y ENFERMOS MENTALES;
B) INTERNACION Y EDUCACION DE SORDOMUDOS;
C) INTERNACIÓN Y CURACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES, ALCOHÓLICOS, PERVERSOS SEXUALES E INADAPTADOS;
D) TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA; Y
E) MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY.
F) ORDENAR SE REGISTRE AL SENTENCIADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE ESTE CÓDIGO PARA EFECTOS DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

CAPITULO VI

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ARTÍCULO 98 TER.- EL JUEZ TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS, POR LOS DELITOS DE FEMINICIDIO, EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 331 BIS 2 FRACCIÓN 1, VIOLACIÓN, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 265, 266, 266 BIS, 267 Y 268, TODOS DE ESTE CÓDIGO, ORDENARÁ INVARIABLEMENTE SU REGISTRO, EN EL REGISTRO

PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES, A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA. DICHO REGISTRO TENDRÁ UNA DURACIÓN MÍNIMA DE DIEZ Y MÁXIMA DE 30 AÑOS.

DICHO REGISTRO SUBSISTIRÁ DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, AUNQUE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA SEA SUSTITUIDA O SUSPENDIDA EN TÉRMINOS DE LEY; Y SE EXTENDERÁ POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DIEZ AÑOS Y MÁXIMO DE 30 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE EL SENTENCIADO, POR CUALQUIER MOTIVO DIVERSOS A LOS YA SEÑALADOS, OBTENGA SU LIBERTAD.

ARTÍCULO 98 TER 1.- EL REGISTRO DE LOS SENTENCIADOS POR LOS DELITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO QUE ANTECEDE, SE HARÁ EXTENSIVO SIN IMPORTAR EL SEXO DE LA VÍCTIMA O VÍCTIMAS DEL DELITO Y CUANDO SEA MENOR DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO 108.- LA CONDENA CONDICIONAL, SUSPENDE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR SENTENCIA DEFINITIVA, DE ACUERDO CON LAS FRACCIONES SIGUIENTES, TOMANDO EN CUENTA LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE ESTE CÓDIGO:

I a VII ...

QUEDAN EXCLUIDOS DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 153, 154, 164, 165, 165 BIS, 176, 265, 266, 266 BIS, 267, 268, 313, 322, 331 BIS 2, 403 Y 406 BIS DE ESTE CÓDIGO.

ARTÍCULO 111.- EL PERDÓN OTORGADO POR LA VÍCTIMA, OFENDIDO O POR QUIEN SE ENCUENTRE LEGITIMADO PARA OTORGARLO, EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I a III...

...

...

...

NO APLICARÁ LA EXCEPCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES .

ADEMÁS NO PROCEDERÁ EL PERDÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

A a C)...

...

...

ARTICULO 143.- LA REPARACION DEL DAÑO COMPRENDE:

I...

II.- LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL CAUSADO, INCLUYENDO EL PAGO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DIRIGIDO A LA REHABILITACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA DE LA PERSONA AGREDIDA, QUE COMO CONSECUENCIA DEL DELITO SEA NECESARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD; CON INDEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE LAS AUTORIDADES PROPORCIONEN A LAS VÍCTIMAS. DICHA REPARACIÓN NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES, CUANDO SEA PROCEDENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE CÓDIGO;

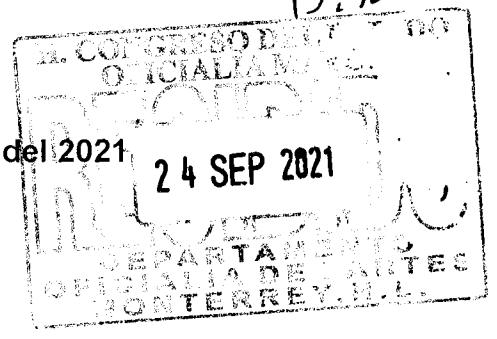
III a V...

...

ARTÍCULO 260 BIS 1.- PARA LOS DELITOS SEÑALADOS EN ESTE CAPÍTULO EL JUEZ ORDENARÁ QUE EL SENTENCIADO SEA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD; SALVO QUE SEAN PERSEGUIDOS POR QUERELLA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 98 TER Y 98 TER 1 DE ESTE CÓDIGO.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.



Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

171

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFOR A AL ARTÍCULO 203; ADICIÓN DE UN CAPÍTULO 111 BIS QUE CONSTA DE L OS ARTÍCULOS 203 BIS Y 204 Y POR DERROGACIÓN A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCUL O 202, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son*

competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, identificándose bajo el expediente Expediente: 13391LXXV, presentada en sesión el 09 de marzo del 2020,

turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública
y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

Que con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 **d** junio de 2011, en el Artículo 1°, se otorgó rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales, y ss ordenó una interpretación pro persona de las obligaciones de derechos humanos. Asimismo, se prohíbe toda discriminación motivada, entre otra por **el género, o** cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las1 personas.

El término violencia hacia la mujer, definido por la Convención de Belem! do Pará en 1994, es cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado que constituye una violación a su dignidad y a sus derechos y al ejercicio en libertad de su existencia.

México es un país de origen, destino y tránsito para la comisión del delito de lenocinio y trata de personas, existiendo un número creciente día a día,: de víctimas, entre las cuales la población más vulnerable son los niños,¡ niñas y mujeres, debido a que autoridades de justicia no cuentan con) grupos de inteligencia para investigar y detectar la creciente participacióni de grupos del crimen organizado en estas actividades ilícitas que dej ingresos millonarios.

Las personas que son sometidas y obligadas a ejercer el oficio de prostitución mediante el lenocinio o trata se encuentran en una peor situación: son maltratadas física y psicológicamente, son torturadas,: amenazadas y no disponen de libertad.

Ambos delitos se asemejan y tienen en común que el delincuente se beneficia económicamente del intercambio sexual de otra persona con un tercero. Sin embargo, el lenocinio no involucra, necesariamente, el uso de la fuerza, solo se castiga al intermediario de la relación sexual; y el delit de trata incluye trabajos forzados, esclavitud y tráfico de órganos, por que es más grave

Destacando que la comisión del delito de trata es tan significativa que, en el 2012, el Congreso de la Unión emitió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

En cuanto al lenocinio, el delito más entrelazado a la trata de personas dado que sanciona la explotación sexual, su esencia se encuentra en el acto de mediar, entre dos o más personas, a fin de que una de ellas facilite la utilización de su cuerpo para actividades lascivas; este delito tiene la ventaja de no requerir la comprobación de ningún medio comisivo como violencia, rapto, engaño etc. Sin embargo, **la sanción es menor a¡ la que prevé el delito de trata de personas.**

Hablar de maltrato infantil forzado trae consigo consecuencias físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y económicas. Cabe señalar, que Nuevo León, es una de las ocho entidades federativas, que aún no armoniza sus disposiciones legales con las normas federales lo cual resulta indispensable para proteger a los menores y garantizar el principio del interés superior de la niñez, lo cual es una obligación ineludible de todas las autoridades.

Por lo anterior y,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 4°, párrafos cuarto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho¡ a la protección de la salud y garantiza que en todas las decisiones Y actuaciones del Estado se vele y cumpla con el principio del **interés superior de la niñez,** garantizando de manera plena sus **derechos.!** Asimismo, señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación

y sano esparcimiento para su **desarrollo integral.** Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las **políticas públicas dirigidas a la niñez.**

Que el artículo 1°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que se entiende por niño **todo ser humano menor de! dieciocho años** de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad

Que el artículo 19 de la citada Convención, establece que los Estados! Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, socialesi y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma del perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Que el artículo 5 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualqUier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de' Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad.

Que el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y ·Adolescentes, hace alusión que, para garantizar la protección de los! Derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley.

Para tal efecto, deberán:

Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y

programas del gobierno. Y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados, internacionales en la materia.

Así como su artículo 6 se menciona que, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferente interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma por derogación a la fracción IV del artículo¡ 202, modificación del artículo 203, y adición de un Capitulo III bis que consta del artículo 203 bis, 204 y 204 bis del Código Penal para elj Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 202.- COMETE EL DELITO DE LENOCINIO:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- (Se deroga).

ARTICULO 203.- EL LENOCINIO SE SANCIONARÁ CON PRISION DE TRES A DIEZ AÑOS Y MULTA DE CINCUENTA A QUINIENTAS CUOTAS.

SE DEROGA, ÚLTIMO PARRAFO.

CAPÍTULO III BIS LENOCINIO DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO.

ARTICULO 203 BIS.- COMETE EL DELITO DE LENOCINIO DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO:

I.- TODA PERSONA QUE EXPLOTE EL CUERPO DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS, POR MEDIO DEL COMERCIO CARNAL U OBTENGA DE ÉL UN LUCRO CUALQUIERA;

II.- AL QUE INDUZCA O SOLICITE A CUALQUIERA DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS, PARA QUE COMERCIE SEXUALMENTE CON SU CUERPO O LE FACILITE LOS MEDIOS PARA QUE SE ENTREGUE A LA PROSTITUCIÓN, Y

III.- AL QUE REGENTEE, ADMINISTRE O SOSTENGA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PROSTÍBULOS, CASAS DE CITA O LUGARES: DE CONCURRENCIA DEDICADOS A EXPLOTAR LA PROSTITUCIÓN DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA! COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO, U OBTENGA CUALQUIER BENEFICIO CON SUS PRODUCTOS.

AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO SE LE IMPONDRÁ PRISIÓN DE OCHO A QUINCE AÑOS Y DE MIL A DOS MIL QUINIENTAS CUOTAS, ASÍ COMO CLAUSURA DEFINITIVA DE ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN LA FRACCIÓN III

ARTICULO 204.- SI EL DELINCUENTE FUERE ASCENDIENTE,;

ADOPTANTE, TUTOR O CURADOR, CONYUGE O CONCUBINARIO O CONCUBINA, O TUVIERE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD SOBRE LA PERSONA EXPLOTADA, SE LE IMPONDRA PRISION DE DOCE A VEINTE AÑOS Y SERA PRIVADO DE TODO DERECHO SOBRE LOS BIENES DE AQUELLA, EN SU CASO, E INHABILITADO

PARA SER TUTOR O CURADOR, PARA EL EJERCICIO DE LA! PATRIA POTESTAD O PARA EJERCER LAS FUNCIONES OCUPACION EN VIRTUD DE LAS CUALES EJERCIA AQUELLAI AUTORIDAD.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:38

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar reforma a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Ivonne Bustos Paredes y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia: Exp. 12989

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El daño al medio ambiente, es uno de los problemas torales que actualmente se presentan en el Estado de Nuevo León. La negligencia con la que las autoridades han actuado en las últimas décadas, hacen que la entidad en contraste con otras entidades federativas o países, haya desperdiciado años de crecimiento en el conocimiento y atención en la materia, colocándonos en una situación alarmante, que, al día de hoy, solo en el tema de contaminación del aire causa más de 5 mil muertes por año.

Al ser un Estado con vocación industrial, con diversidad de actividades económicas, las alertas suenan en todos los ámbitos: deforestación irregular de zonas boscosas, contaminación de mantos acuíferos por descargas contaminantes, crecimiento exponencial de plásticos de un solo uso, afectaciones a la vida silvestre, depredación de áreas naturales protegidas para instalar pedreras, emisiones contaminantes por la industria no controladas, incumplimiento de obligaciones de remediación ambiental y de las normas ya establecidas entre otras.

Con todo lo anterior el Estado incumple uno de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 4o de nuestra Carta Magna y en nuestro artículo 3 de la Constitución Política del Estado: **el derecho a un medio ambiente sano:**

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."

Dicho derecho tiene su génesis en el Articulo 11 del Protocolo de San Salvador de 1988, el cual estableció que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, y que los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

En este instrumento internacional, vinculante para el Estado Mexicano, se reconoce que los Estados tienen obligaciones relativas a la protección del medio ambiente, mismas que son necesarias para el cumplimiento de otros derechos garantizados por los instrumentos del Sistema Interamericano.

Por su parte, nuestra Carta Magna incluyó el Derecho a un medio ambiente adecuado en el año 1999, pero fue hasta la reforma del año 2012 en materia de derechos humanos, que se estableció el ***"derecho a un medio ambiente sano"*** como una garantía individual al ser un derecho Fundamental contenido en los artículos ya antes mencionados.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Magistrados del Poder Judicial Federal, ya se ha pronunciado en diversas Tesis sobre lo que significa el Derecho a un medio Ambiente sano.

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO.

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. ***Tal mandato vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente.***

Amparo directo en revisión 545212015. Inammi, S.A. de C. V. 29 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María /barra Olguín.

De la lectura de la tesis anterior, se clarifica que los tres poderes del Estado, tienen la obligación de garantizar la existencia de un medio ambiente adecuado y propicio para el desarrollo humano.

Por lo anterior, el Derecho Humano a un medio ambiente sano, no solo implica que él tenga la obligación de no afectar indebidamente el ambiente, sino que debe de implementar una procuración en defensa del medio ambiente efectiva, que combata las conductas de los particulares que dañan al ambiente. Sirve para fundamentar dicho argumento la siguiente Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR LAS MEDIDAS POSITIVAS TENDIENTES A PROTEGERLO CONTRA ACTOS DE AGENTES NO ESTATALES.

El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de que las autoridades estatales se abstengan de afectar indebidamente el ambiente -deber de "respetar"-, sino que conlleva también la diversa obligación de tomar todas las medidas positivas tendientes a protegerlo contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro -deber de "proteger"-. En efecto, el deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos cometidos por agentes no estatales, forma parte del fundamento mismo del régimen

internacional de derechos humanos, y dicho deber exige que el Estado asuma una función esencial de regulación y arbitraje de las conductas de Jos particulares que afecten indebidamente el medio ambiente, por ejemplo, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Sobre esa base, se concluye que el Estado mexicano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una legislación ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados, pues permitir que terceros puedan incidir de manera desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la conducta mínima esperada de un gobierno.

Amparo en revisión 64112017. Abe/ Núñez Ramírez y otros. 18de octubre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanue/ Muñoz Acevedo.

Dicha tesis mandata deberes claros a las autoridades del Estado, exigiendo que asuman su función especial de regulación de las conductas de los particulares. Sin embargo, al día de hoy, la regulación ambiental en el Estado solo da pie a que se interpongan sanciones administrativas por conductas prohibidas en la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

Lo anterior, es atendido por la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, el cual, es un órgano que depende de La Secretaria de Desarrollo Sustentable que concentra aparato burocrático de inspectores insuficiente para atender todos los reportes realizados.

Lo que deja a los infractores en clara ventaja frente a la autoridad y que, en caso de encontrarles responsables, solo serían acreedores a sanciones administrativas y monetarias.

Sin embargo, con la aprobación del Capítulo de los Delitos Ambientales en nuestro Código Penal, realizado ya por esta Soberanía y que en días posteriores tendrán que ser publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se abre una nueva vía con la cual es Estado podrá proteger y sancionar a los depredadores del ecosistema.

Dicha reforma promete ser un parteaguas en nuestra legislación Estatal, con lo cual, el derecho fundamental a un medio ambiente sano podrá tener mayores medidas coercitivas para su cumplimiento. Sancionando penalmente con uno a nueve años de prisión, por ejemplo, a quienes ocasionen incendios, tale o destruya árboles y/ o afecte recursos forestales, descargue contaminante en mantos acuíferos, realice obras sin contar con los permisos de impacto ambiental o en su caso, no cumpla con las medidas establecidas para mitigar el daño ocasionado.

Lo anterior promete ser un camino que, con medidas sanciones considerables que podrá desincentivar aquellas conductas contaminantes que la sociedad Neolonesa, de todos los estratos sociales, no considera dañinas.

Sin embargo, es importante considerar que para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León[1], pueda ejercer su función de Ministerio Público, persiguiendo y castigando los delitos ambientales, se necesita de áreas especializadas en la materia, que tengan conocimiento técnico en todas las variables de delitos ambientales.

Revisando la estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se puede observar que de acuerdo a su artículo 1O, se tienen cuatro Fiscalías Especializadas:

1. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
2. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
3. Fiscalía Especializada Antisecuestros; y
4. Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Las cuales surgen para atender comisiones de delitos muy particulares y para su persecución se necesitan de equipos especializados y en constante capacitación sobre un tema.

---

[1]ARTÍCULO S. El Ministerio Público es la institución que tiene como fin, en representación de la sociedad, dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y protección a las víctimas; perseguir a los posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios; intervenir en asuntos del orden civil, familiar, penal y de adolescentes, en los casos en que señalen las leyes; efectuar las intervenciones que le correspondan en materia de extinción de dominio y realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan.
ARTÍCULO 6. La Institución del Ministerio Público en el Estado de Nuevo León, es indivisible y se organizará en una Fiscalía General que ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público, respeto a los derechos humanos y sus servidores públicos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Es por lo anterior que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado de Nuevo león, tiene a bien proponer una iniciativa de reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, con la intención de crear la fiscalía Especializada en Protección al Ambiente, la cual, al igual que la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Feminicidios, dependerá del Fiscal General del Estado de Nuevo León.

Sin embargo y como sino distintivo de la misma, se añade que, para ser el Titular de la misma, además de los reunir los requisitos requeridos a los Agentes del Ministerio Público, deberá de contar con experiencia o conocimientos en materia de protección al ambiente, en el ámbito público o privado. Esto con el objetivo de que el Fiscal tenga conocimientos técnicos y especializados y pueda procurar la sanción a los delitos cometidos.

Si bien, dicha figura no es tan común en nuestro país, algunos Estados ya han optado por incluirla en los organigramas de las Fiscalías Estatales, resaltando el caso de Michoacán, Jalisco y Ciudad de México que la incluyeron en la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal. Aunado a lo anterior, es importante que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, que incorpora una Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforma por modificación de la fracción VII del artículo 2°; de los párrafos segundo y tercero del artículo 10; por adición de una fracción VII al artículo 10, recorriéndose las posteriores de manera subsecuente y de una fracción III al artículo 43 recorriéndose las posteriores de manera subsecuente, todas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2....

Ia VI ...

VII. Fiscalías Especializadas: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales del Estado de Nuevo León; la Fiscalía Especializada Antisecuestros, la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la *Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente* y las demás Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León;

VIII a X ...

ARTÍCULO 1O•...

Ia VI ...

VI/. Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente;

VIII. Órgano Interno de Control;

IX. Visitaduría General;

X. Centro de Evaluación y Control de Confianza;

XI. Agencia Estatal de Investigaciones;

XII. Instituto de Criminalística y Servicios Periciales;

XIII. Direcciones Generales;

XIV. Direcciones;

XV. Unidades;

XVI. Coordinaciones;

XVII. Agencias del Ministerio Público; y

XVIII. Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento Interno y otras disposiciones normativas aplicables.

Los titulares de las unidades administrativas señaladas en las fracciones 1, 11, V, VI, VII, VIII IX, X, XI y *XII* anteriores, dependerán directamente del Fiscal General, con las excepciones establecidas en esta Ley, su Reglamento Interno y demás normas aplicables.

Las unidades administrativas señaladas en las fracciones 1, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y *XVII,* auxiliarán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en los casos en que estas lo soliciten.

ARTÍCULO 43....

1 a II •••

III. El titular de la Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente, además de los reunir los requisitos requeridos a los Agentes del Ministerio Público, deberá de contar con experiencia o conocimientos en materia de protección al ambiente, en el ámbito público o privado; y

IV. El Director del Centro de Evaluación y Control de Confianza y el Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones, deberán contar con título profesional y la correspondiente cédula profesional, en disciplinas afines a la seguridad pública, la procuración o la administración de justicia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tendrá un plazo de sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, para realizarlas modificaciones a sus disposiciones normativas para dar cumplimiento al mismo.

TERCERO. -El Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tendrá un plazo de setenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Protección al Ambiente.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León a 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

14:21
24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION AL ARTICULO 24, 32, 35 Y 50 DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.

- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 13325/LXXV, presentada en sesion: 12 de febrero del 2020 y turnada a la comisión de: Justicia y Seguridad Pública

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad de género aún no se logra en Nuevo León, no existe voluntad política ni conciencia social al respecto, las mujeres hoy enfrentan múltiples y numerosos obstáculos para acceder a cargos. públicos de primer nivel.
Por ello, hacemos la presente propuesta legislativa que tiene como objeto revertir las brechas que separan a mujeres y hombres.

No obstante que de acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoce además del principio de igualdad, el derecho de todas los ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos.

Además, debe atenderse la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, elaborada por ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, conocida como el modelo de democracia en el que *la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres* son *los* ejes *vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo,* que contiene como uno de sus fines un nuevo equilibrio social entre hombre y mujer en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública.

Las mujeres alcanzan más del 50% de la población en México y en Nuevo León, y, por ende, de su potencial. La igualdad de género que se establece en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva a acceder en igualdad de oportunidades a posiciones de liderazgo y cargos públicos.

Nuevo León, no debe permanecer al margen, ni dejar a nuestras mujeres y niñas rezagadas en tan importantes avances.

Estamos obligados a observar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, que establece el mismo esquema para las entidades federativas, así como para la integración de los Ayuntamientos desde una **doble dimensión: vertical y horizontal** y paridad en los tres poderes de toda s las entidades federativas, municipios y organismos autónomos locales.

Históricamente las mujeres han sido discriminadas, prueba de ello es que hasta el día de hoy sólo han sido electas 8 mujeres gobernadoras; los gabinetes de las entidades federativas sólo se encuentran integrados por un 15% de mujeres; por

primera vez la integración de nuestro Congreso es paritaria; sin embargo, las legislaturas estatales cuentan sólo con un 28% de mujeres entre sus integrantes; y en los ayuntamientos sólo el 12% está conformado por alcaldes.

Lo anterior se debe en gran medida a las barreras estructurales que enfrentan las mujeres por su condición de género; barreras que han sido analizadas a partir de diversas categorías:

1. **Techo de cristal,** barreras invisibles consistentes en discriminaciones y prejuicios tan sutiles que impiden confiar en las mujeres puestos de responsabilidad, o bien, las prácticas patriarcales que limitan que las muJeres avancen en sus profesiones, independientemente de sus méritos o logros laborales.
2. **Suelo pegajoso,** se refiere al trabajo doméstico y de cuidado en el cual las mujeres se ven inmersas a raíz de los estereotipos de género y debido al cual enfrentan múltiples jornadas laborales.
3. **Techo de cemento**, engloba la educación sexista, estructuras laborales, horarios y dinámicas masculinas.
4. **Techo de diamante,** impide que se valore a las mujeres por criterios estrictamente profesionales sino de acuerdo a sus características físicas, lo que las deja en una situación de desventaja y de subordinación para aspirar a un puesto de decisión.

Por lo anterior y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 1o y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada, entre otras por el género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, consagra que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.

SEGUNDO.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconoce que la discriminación representa un gran obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en

el desarrollo de sus países y de la humanidad. En su Recomendación General 19, la CEDAW, reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades.

TERCERO.- Que los artículos 5° y 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do " establece que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos politicos , económicos, sociales y culturales así como contar con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, que los Estados Partes deberán tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, *garantizarán* a las *mujeres, en igualdad de condiciones con* los *hombres.*

CUARTO.- Que nuestro máximo Tribunal sostiene el criterio en la tesis bajo el rubro DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, que el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación.

Es imperativo que este tema se regule a nivel legal, pues existe en la actualidad el riesgo latente de que los puestos de toma de decisiones sigan siendo conducidos predominantemente por hombres, una situación que es necesario corregir.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por modificación al artículo 24, 32, 35 y 50 de LEY ORGÁNICA DE LA FISCAIÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 24....

I a
IV...

V. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción respetando el **principio de paridad,** con las excepciones establecidas en esta Ley y demás normatividad aplicable, en términos de las políticas y lineamientos sobre la administración de recursos humanos que establezca la Fiscalía General;

VI a XL
...

ARTÍCULO 32. El Fiscal Especializado en Delitos Electorales, tendrá las siguientes facultades:

1 a III...

IV. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales **respetando el principio de paridad,** con las excepciones establecidas en esta Ley y demás normatividad aplicable, en términos de las políticas y lineamientos sobre la administración de recursos humanos que establezca la Fiscalía General;

Va XXV...

ARTÍCULO 35. Las designaciones, se realizarán mediante procedimientos transparentes, **paritarios** y públicos, en los término que establece la Constitución Política del Estado y esta Ley, y sujetarán al siguiente procedimiento:

A) ...

I a III...

La lista de cuatro candidatos que integre el Congreso **deberá respetar el principio de paridad,** se remitirá al Gobernador del Estado a fin de que en un plazo de cinco días envíe al Congreso del Estado la terna **paritaria** definitiva.

IV...

B)...

la IV...

ARTÍCULO 50. Tratándose de los titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía General, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, podrán ser removidos libremente por quien tenga atribución para nombrarlos **observando el principio de paridad,** salvo que la Ley o Reglamento disponga de un procedimiento especial.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:18 hrs

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 237

Presente. –

El suscrito, Felipe Enríquez Hernández, [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE ÓRDEN DE PROTECCIÓN DE TRASLADO

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

Articulo 108. Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…

Articulo 67. El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.

Articulo 53. Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.

Articulo 54. Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.

Articulo 56. Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislativo del PRI y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2019; Expediente: 13213/LXXV; PROMOVENTE DIP. ÁLVARO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASUNTO: INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE ORDEN DE PROTECCIÓN DE TRASLADO; INICIADO EN SESIÓN: 26 de noviembre del 2019; SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública y Legislación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace 13 años, se impulsó de manos de las legisladoras y de grupos de la sociedad civil, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismo que fue un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año.

Inició con ello, para el Estado Mexicano, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género.

En relación a lo anterior, refiero que la Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran

con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo y de gran envergadura en nuestro país en la defensa de los Derechos Humanos.

Se reconoció así en el país el derechó de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Como vemos, esta Ley significó un cambio de paradigma, por lo que se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la "familia", bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.

En este sentido, podemos mencionar que la violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad, y es el Estado el principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres.

La violencia se vuelve recurrente y sistemática, y esta violencia contra las mujeres, trasciende todas las fronteras relacionadas con condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, territoriales u otras y ha sido vivida en alguna de sus manifestaciones por toda mujer en algún momento de su vida. Su naturaleza universal no sólo se le confiere al hecho de estar presente en la mayoría de las culturas, sino porque además se erige como patrón cultural que se aprende y se manifiesta en las relaciones humanas.

Esto llevo a los Estados a comprometerse a través de la firma y ratificación de diversos instrumentos tanto internacionales como es el caso de la convención de Belem Do Pará, que ya se mencionó, así como legislaciones nacionales, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también ya le dediqué unas líneas, con el deber de proteger a las mujeres de los actos de violencia en su contra, contrayendo el deber de atender, sancionar, prevenir y erradicar dicha violencia.

En nuestro Estado, posterior a la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no mucho después, en el año 2007 en el mes de septiembre, se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que fortaleció la protección de acceso de las mujeres del Estado de Nuevo León, a Acceder a una igualdad de

derechos y a fortalecer su protección en contra de la violencia que desde años ha vivido el género femenino no sólo en Nuevo león, sino en nuestro país.

Lo anterior en razón del artículo 2 de la Ley General, en el que nos faculta a las entidades para legislar en la materia, artículo que me permito reproducir para su mayor claridad:

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

En este sentido, es que me permito proponer la siguiente iniciativa, para fortalecer las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia. Cabe mencionar que una iniciativa similar la presente en el Congreso de la Unión, en la que se propone de igual forma, fortalecer las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual sigue con su proceso legislativo y en esta legislatura, presente otra que ya fue aprobada y que incluso ya es texto vigente, sin embargo considero que no debemos de limitarnos en buscar la mayor protección posible de las mujeres víctimas de violencia, por ello me permito presentar esta iniciativa que tiene un fin similar.

Para entrar un poco en detalle, me permito explicar que esta iniciativa busca reducir el tiempo en que deberán expedirse las órdenes de protección de emergencia, en razón de que actualmente se puede expedir en las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho que las genera, sin embargo al tratarse de asuntos que pueden detonar en mayor violencia hacia la mujer es necesario reducir el tiempo para expedirse, por ello, propongo que en lugar de 24 horas, estas se decreten a las 8 horas de tener conocimiento del hecho que las genera. Cabe mencionar que con esta disposición se armoniza el texto de nuestra Ley de protección de la violencia en contra de la mujer al de la Ley General.

Por otro lado, es necesario referir y establecer dentro de nuestra Ley vigente, que dichas órdenes de protección podrán prorrogarse hasta que cese el riesgo de violencia, en razón de que muchas veces, el que sólo duren 72 horas, no garantizan la seguridad de la víctima, y por represarías podría sufrir un daño mayor, por parte del agresor. Cabe mencionar que de acuerdo al estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos denominado *"Las*

órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, panorama 2018" se establece que 22 Entidades federativas de nuestro país, ya contemplan la posibilidad de prorrogar dichas medidas de protección.

Por otro lado, proponemos establecer como una orden de protección de emergencia, que se le brinde apoyo a la víctima, para que se traslade a un refugio donde ella se encuentre segura y en su caso sus hijos. Esto en razón de que si bien ya existen ordenes de emergencia para prohibir al agresor acercarse al domicilio o incluso que el agresor desocupe el domicilio conyugal, es necesario y urgente incluir esta medida de emergencia, porque, ya que, aunque existan las prohibiciones ya mencionadas, en diversas ocasiones la víctima tiene miedo de las represalias que se puedan tomar en

contra de ella o de sus hijos, y se siente mucho más segura y protegida estar fuera del domicilio conyugal en donde el agresor no pueda agredirla.

Cabe mencionar que, en la actualidad, la ley vigente ya establece la posibilidad de canalizar a las víctimas a refugios temporales, sin embargo, en esta iniciativa llevamos más allá dicha protección, ya que proponemos establecerla como una orden de protección de emergencia, lo que llevará que dicho traslado a los centros se haga a más tardar a 8 horas del conocimiento del suceso de violencia y con el apoyo de la autoridad.

Por otro lado, se propone armonizar dichas órdenes de protección de emergencia en el Código Penal de nuestro Estado, para que se fortalezca la protección de las mujeres que sufran violencia familiar u hostigamiento sexual, con ello se refuerza y se cierra la pinza de protección a las mujeres víctimas de violencia en cuanto a órdenes de protección de emergencia, así mismo se armoniza que no se decreten en las primeras 24 horas, sino en las primeras 8 horas, para evitar conductas delictivas de mayores dimensiones.

Por otro lado, esta iniciativa apoyará a mejorar los aspectos emocionales de las víctimas que se encuentren en una situación de emergencia derivada de la violencia en su contra, se sentirán más protegidas, y con el respaldo tanto de las instituciones de justicia.

Para ejemplificar mejor mi propuesta, me permito establecer el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
ARTÍCULO 19.- ... Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.	ARTÍCULO 19.- ... Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las **8** horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. **Las órdenes de protección podrán prorrogarse hasta que cese el riesgo de sufrir violencia.**
Artículo 20. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: I. Desocupación, por el probable responsable, del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar, incluidos la vía telefónica, cualquier otro medio electrónico de comunicación o tecnologías de la información y comunicación, así como cualquier otra manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente contra la víctima, realizada por el agresor a través de terceras personas.	ARTÍCULO 20.- ... I. a II. ... III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar, incluidos la vía telefónica, cualquier otro medio electrónico de comunicación o tecnologías de la información y comunicación, así como cualquier otra manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente contra la víctima, realizada por el agresor a través de terceras personas; y **V. Apoyo a la víctima, y en su caso facilitar los medios para trasladarla a ella y a sus hijas e hijos a un refugio que garantice su seguridad y dignidad en términos de las disposiciones establecidas en esta Ley.**
Código Penal para el Estado de Nuevo León	
ARTICULO 98 BIS 2. SON ÓRDENES DE PROTECCION DE EMERGENCIA LAS SIGUIENTES:	ARTÍCULO 98 BIS 2 SON ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA LAS SIGUIENTES:
I. a III. ...	I. a III. ...
IV. PROHIBICION DE INTIMIDAR O MOLESTAR A LA VÍCTIMA U OFENDIDO, ASÍ COMO A CUALQUIER INTEGRANTE DE SU NUCLEO FAMILIAR; Y	IV. PROHIBICION DE INTIMIDAR O MOLESTAR A LA VÍCTIMA **EN SU ENTORNO SOCIAL** ASÍ COMO A CUALQUIER INTEGRANTE DE SU NÚCLEO FAMILIAR, **INCLUIDOS LA VÍA TELEFÓNICA, CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO DE**

	COMUNICACIÓN O TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MANIFESTACIÓN O EXPRESIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ATENTE CONTRA LA VÍCTIMA, REALIZADA POR EL AGRESOR A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS;
	V. APOYO A LA VÍCTIMA, Y EN SU CASO FACILITAR LOS MEDIOS PARA TRASLADARLA A ELLA Y A SUS HIJAS E HIJOS A UN REFUGIO QUE GARANTICE SU SEGURIDAD Y DIGNIDAD EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY; Y
V. SUSPENSIÓN TEMPORAL AL AGRESOR, DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA CON SUS DESCENDIENTES.	VI. **SUSPENSIÓN TEMPORAL AL AGRESOR, DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA CON SUS DESCENDIENTES.**
ARTÍCULO 98 BIS 4. ...	ARTÍCULO 98 BIS 4. ...
I. a III. ...	I. a III. ...
LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA Y PREVENTIVAS TENDRÁN UNA TEMPORALIDAD DE HASTA TREINTA DÍAS Y DEBERÁN EXPEDIRSE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE LAS GENERAN.	LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA Y PREVENTIVAS TENDRÁN UNA TEMPORALIDAD DE HASTA TREINTA DÍAS Y DEBERÁN EXPEDIRSE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO **OCHO** HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE LAS GENERAN.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 19; se reforman las fracciones 111 y IV y se adiciona una fracción V al artículo 20, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19.- ...

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Las órdenes de protección podrán prorrogarse hasta que cese el riesgo de sufrir violencia.

ARTÍCULO 20.-
I a II...

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad;

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a

cualquier integrante de su núcleo familiar, incluidos la vía telefónica, cualquier otro medio electrónico de comunicación o tecnologías de la información y comunicación, así como cualquier otra manifestación o expresión de cualquier naturaleza que atente contra la víctima, realizada por el agresor a través de terceras personas; y

V. Apoyo a la víctima, y en su caso facilitar los medios para trasladarla a ella y a sus hijas e hijos a un refugio que garantice su seguridad y dignidad en términos de las disposiciones establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V recorriéndose la subsecuente para ser una fracción VI del artículo 98 Bis 2 y se reforma el segundo párrafo del artículo 98 Bis 4, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 98 BIS 2. SON ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA LAS SIGUIENTES:

I a III...

IV. PROHIBICIÓN DE INTIMIDAR O MOLESTAR A LA VÍCTIMA EN SU ENTORNO SOCIAL, ASÍ COMO A CUALQUIER INTEGRANTE DE SU NÚCLEO FAMILIAR, INCLUIDOS LA VÍA TELEFÓNICA, CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN O TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MANIFESTACIÓN O EXPRESIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ATENTE CONTRA LA VÍCTIMA, REALIZADA POR EL AGRESOR A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS.

V. APOYO A LA VÍCTIMA, Y EN SU CASO FACILITAR LOS MEDIOS PARA TRASLADARLA A ELLA Y A SUS HIJAS E HIJOS A UN REFUGIO QUE GARANTICE SU SEGURIDAD Y DIGNIDAD EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY; Y

VI. SUSPENSIÓN TEMPORAL AL AGRESOR, DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA CON SUS DESCENDIENTES.

ARTÍCULO 98 BIS 4....

I. a III. ...

LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA Y PREVENTIVAS TENDRÁN UNA TEMPORALIDAD DE HASTA TREINTA DÍAS Y DEBERÁN EXPEDIRSE DENTRO DE LAS

VEINTICUATRO OCHO HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE LAS GENERAN.

TRANSITORIOS

PRIMERO. -El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - La autoridad estatal contará con 180 días después de haber entrado en vigor el presente decreto, para actualizar sus reglamentos correspondientes conforme a lo establecido en el mismo.

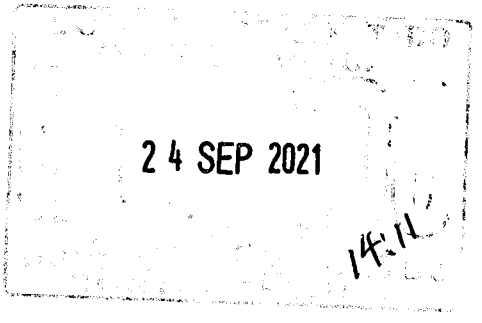
Atentamente

Monterrey Nuevo león 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández.

[redacted]



274

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 9 BIS A LA LEY PARA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2018 **Expediente: 12295/LXXV**

PROMOVENTE: DIP. ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 9 BIS A LA LEY PARA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 20 de noviembre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la ciudadanía neolonesa, la corrupción es el segundo problema más importante que aqueja hoy en día al Estado, justo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, siendo nuestro deber atender esta preocupación de la ciudadanía.

Lamentablemente, las políticas públicas que se han implementado en el pasado poco han aportado para acabar con el problema de la corrupción, pues sabemos que lejos de acabarse ha ido en aumento en todos los niveles de gobierno, tan es así que en la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada (2017), se muestra que en nuestro Estado el 89.8% de la población percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente, por lo que sin duda alguna el problema existe y tenemos que atenderlo.

Para esto, la columna vertebral para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas públcias que incentiven y motiven la participación ciudadana, toda vez que es la ciudadanía la mejor aliada para alzar la voz y señalar a todos aquellos funcionarios que ensucian nuestras instituciones.

Sin embargo, a pesar de que el pasado 29 de junio de 2013 se publicó la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, las denuncias contra actos de corrupción no aumentaron, sino al contrario, pareciera que la ciudadanía se alejó más, toda vez que el 84.1% de los afectados por actos relacionados con la corrupción no los denunció; lo anterior,

porque en su mayoría consideraron que denunciar es inútil, porque las autoridades no le dan seguimiento y es una pérdida de tiempo, además de los riesgo que hacerlo conlleva.

Es muy importante fomentar la denuncia de actos de corrupción, razón por la cual debemos de crear mecanismos jurídicos sólidos que verdaderamente protejan a los denunciantes y testigos y les garantice que no se verán perjudicados, pues sabemos que los funcionarios y trabajadores del sector público se detienen de denunciar por miedo a represalias.

Como un primer paso, creemos esencial que el marco jurídico aplicable en la materia debe reconocer expresamente una serie de derechos de los denunciantes, ya que si los dejamos a interpretación como actualmente se encuentran seguiremos siendo cómplices de la falta de efectividad de esta ley.

Pretendemos mediante esta iniciativa que desde el momento en que una persona acuda ante la Contraloría o la autoridad correspondiente a denunciar un acto de corrupción, se les garantice el derecho a mantener su puesto de trabajo, a un asesoramiento jurídico de calidad, a recibir atención psicológica y que sobre toda denuncia recaiga una resolución para evitar la incertidumbre que puede generar el que los expedientes no sean revisados o se pierdan.

Esta iniciativa de reforma a Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León pretende reconocer expresamente los derechos de los denunciantes y los testigos, para que se encuentren tutelados en todo momento y se evite que se conviertan en víctimas por cumplir con su deber de señalar los actos de corrupción que les toque presenciar.

Por todo lo anteriormente señalado, se somete a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 9 Bis.- Derechos del Denunciante y del

Testigo. Todo Denunciante y Testigo tiene derecho a:

I. Conocer y tener acceso en todo momento al expediente que se inicie con motivo de la denuncia que interpuso o al cual aportó información en relación con una denuncia sobre actos de corrupción de uno o varios servidores públicos;

11. Que sobre toda denuncia recaiga una resolución fundada y motivada que ponga fin al procedimiento instaurado por razón de esta, lo anterior en los términos y plazos establecidos dentro de la presente Ley;

111. Recibir a costa del Estado la asistencia legal que se requiera para los hechos relacionados con la denuncia, así como aquellos procedimientos judiciales que se pueda presumir se están iniciando en su contra como represalia para hostigarlo o amedrentarlo;

IV. Recibir desde la interposición de la denuncia hasta la terminación del procedimiento, atención psicológica o psiquiátrica y, en caso de así requerirlo, asistencia médica en los hospitales y clínicas del sector público del Estado o los Municipios, así como en las instituciones privadas con las que se haya establecido convenio para tal efecto;

V. Que se consideren nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que le causen perjuicio o menoscabo en su actividad laboral que sean consecuencia de la denuncia;

La carga de la prueba corresponderá al superior jerárquico, para acreditar que cualquiera de los actos mencionados en esta fracción no guardan relación con la denuncia presentada, en el caso del Denunciante, o con la aportación de información en relación con una denuncia sobre actos de corrupción de uno o varios servidores públicos, en caso del Testigo;

VI. Obtener indemnización por los daños y perjuicios que con motivo de la denuncia le sean causados, en los términos de lo establecido en el artículo 1825 del Código Civil para el Estado de Nuevo León; y

VII. Recibir las medidas de protección necesarias para salvaguardar su

integridad física y sus derechos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

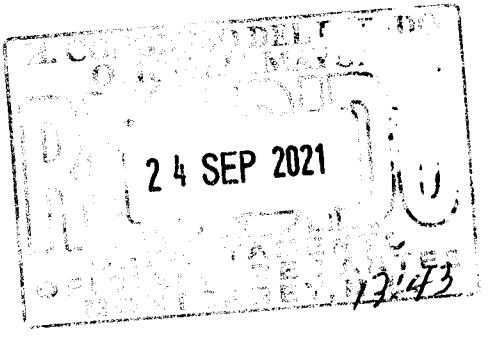
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



278

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION AL ARTICULO 34 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.

- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por*

caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PT, identificándose bajo el expediente**11995/LXXV**, presentada en sesión el 03 de Octubre del 2018, turnada a las comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2018 , Expediente: 11995/LXXV

PROMOVENTE: DIP. ESPERANZA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, SUSCRIBIENDOSE LOS DIP. MERCEDES CATALINA GARCIA MANCILLAS, DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA, DIP. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ, DIP. ROSA ISELA CASTRO FLORES Y DIP. SAMUEL VILLA VELAZQUEZ.

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION AL ARTICULO 34 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES.
EN EL ESTDO DE NUEVO LEON, ASI *C9fAO* ADICIÓN DE UNA FRACCION VIII, AL

ARTICULO 35 DE LA LEY PARA LA rROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 03 de octubre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Salud y Atención a Grupos Vulnerables

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es inevitable desatender tanto a personas adultos mayores, como personas con discapacidad, son sectores vulnerables de la población mexicana, ambos con el paso del tiempo se convertirán en un sector prioritario a consecuencia de su inevitable crecimiento.

En México hay alrededor de 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de los cuales alrededor de 31.5% están en etapa de pre-vejez (60 a 64 años); 41.1% se encuentra en vejez funcional (65 a 74años); 12.3%

en vejez plena (75 a 79 años), y 15.1% transita por una edad avanzada de 80 años y mas).

Estadísticas de CONAPO, refieren que el 2010, había 21 adultos mayores por cada 100 jóvenes; 24 en 2103, y se prevé que en 2030, haya aproximadamente 47 adultos mayores por cada 100 jóvenes; esta situación ubica a Nuevo León en el Onceavo lugar de envejecimiento poblacional.

En los últimos ocho años, la población de adultos mayores de 60 años de edad, ha aumentado un 39% en Nuevo León, un porcentaje de estos adultos mayores labora por cuenta propia, algunos son asalariados, otros han logrado apenas subemplearse y el resto no tienen ingresos, no reciben ni pago, ni apoyo alguno.

Por otro lado, estimaciones de la Secretaria de Desarrollo Social en el estado, refieren que alrededor de 27 mil personas, en condición de alguna discapacidad se encuentran en el padrón de beneficio y apoyo, mas sin embargo las necesidades y la situación de pobreza son por demás, apremiantes para este sector de la población, ya que muchos de ellos tienen accesos limitados a incrementar sus ingresos.

Por lo que es condición necesaria, el brindarles mayores oportunidades, a fin de evitar que ambos grupos de la población se ven inmersos en carencias por acceso a la seguridad social, carencias por acceso a la alimentación, carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda, carencias por acceso a los servicios de salud, carencias por calidad y espacios de la vivienda, carencias por rezago educativo, discriminación y exclusión social.

Tanto el envejecimiento, como las limitaciones que padecen las personas con discapacidad son una realidad, es inminente trazar una ruta que permita generar más acciones gubernamentales que nos preparen para enfrentar un nuevo panorama demográfico y así poder garantizar una estabilidad social y económica que les permita tanto a nuestros adultos mayores, como a las personas con discapacidad, llevar una vida digna y justa con verdadera calidad de vida.

Una viable movilidad para los adultos mayores y personas con discapacidad representa menores costos en cuanto a los traslados a realizar, además de mayor seguridad en cuanto a la integridad del usuario en su traslado, puesto que muchos adultos mayores y personas con discapacidad, tienen enormes dificultades para abordar unidades del transporte colectivo, debido a problemas de salud o discapacidad, o simplemente porque resulta imposible abordar el transporte colectivo, sin compañía alguna.

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de la personas con discapacidad, debe ser en todo momento primicia de las políticas públicas de todo Gobierno en turno.

Se hace necesario dignificar tanto a las personas adultos mayores como a las personas con discapacidad, a través de la protección en movilidad, certidumbre patrimonial, canasta básica, seguridad social, además de suficiente pensión para su manutención y sobrevivencia.

Ahora bien la iniciativa de reforma que nos ocupa refiere precisamente la intervención del Gobierno del Estado y la Agencia del Transporte, a fin de lograr vincular a los aproximadamente 32 mil concesionarios empadronados, que operan dentro del lineamiento del servicio de automóvil de alquiler modalidad establecida en el sistema de transporte tradicional en nuestra entidad, con la finalidad de crear, diseñar, implementar mecanismos necesarios tanto para nuestros Adultos Mayores como personas con discapacidad, que a la fecha pueden rebasar los 58 mil y 27 mil, documentados por la Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que ambos tengan la posibilidad de beneficiarse con al menos un servicio diario de un vehículo de alquiler, mediante tarifas preferenciales o subsidiadas, la que al menos pueda ser del 50% en sus traslados.

Para ello, será necesario que a los propietarios del servicio de automóviles de alquiler, se les subsidie y/o descuente alguna cantidad a cubrir, por conceptos en cuanto a los pagos de la expedición o refrendo de concesión, pagos en la tramitación de la cesión de derechos de concesión, renovación de licencia de taxi, pago por renovación del documento en el que consta la concesión, pago por cambios de vehículos objeto de concesión, así como por alguna de las 44

infracciones reglamentadas y sancionadas por la Ley del Transporte y la Agencia del Transporte respectivamente, sancionadas entre las 5 y 500 cuotas.

Ahora bien deseamos citar que el artículo 37 de la Ley del Trasporte para la movilidad sustentable, establece fijar tarifa especial y/o otorgar gratuidad en el transporte, tanto a personas adultos mayores, personas discapacitadas, viudas, jubilados y pensionados, en los términos emitidos y reglamentados por la Ley de la Agencia para la racionalización y modernización del sistema de transporte público, empero nos parece muy oportuno ampliar mayores prerrogativas al menos a quienes por su edad avanzada y su condición de discapacidad, sufren mayores dificultades para su movilidad, tanto física como económicamente.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de las personas Adultas, en el estado de Quintana Roo, ha puesto en marcha convenios con diferentes confederaciones del transporte del volante, a fin de que los adultos mayores en aquella entidad, se vean beneficiados con el pago de hasta al menos el 50% del costo de este servicio de vehículo de alquiler, lo anterior, es ejemplo de cómo es posible sumar esfuerzos, respecto de la protección en la movilidad de nuestros adultos mayores, por lo que creemos de suma importancia que nuestra contribución con el citado pronunciamiento pueda ser bien visto por esta Representación Popular.

Por todo antes expuesto es que sometemos a Ustedes el siguiente proyecto de:

DECRETO

Primero.- Se reforma por modificación el artículo 34 de la Ley de los Derechos de las personas Adultos Mayores en el Estado, para quedar como sigue:

Articulo 34.- Las Personas Adultas Mayores, tendrán derecho a obtener tarifas preferenciales al hacer uso del servicio público de transporte colectivo, así como en el servicio de vehículo de alquiler, de conformidad con las disposiciones aplicables de la materia.

Segundo: Se adiciona una fracción **VIII**, al artículo 35 de la Ley para la protección de los derechos de personas con discapacidad en el estado, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, las siguientes:

VIII.- Promover el derecho a obtener tarifas preferenciales o subsidiarias respecto del uso en los servicios de vehículo de alquiler, modalidad establecida dentro del sistema tradicional del transporte.

TRANSITORIO

Primero.- Esta iniciativa entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

10:13 hrs

293

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 57 Y 143 DE LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS, AUTOMÓVILES BLINDADOS Y CUALQUIER TIPO DE TRATO ESPECIAL Y PERSONALIZADO, DE SEGURIDAD O SIMILARES, PARA FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.

- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2019 Expediente: 12952/LXXV

PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 57 Y 143 DE LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS, AUTOMÓVILES BLINDADOS Y CUALQUIER TIPO DE TRATO ESPECIAL Y PERSONALIZADO, DE SEGURIDAD O SIMILARES, PARA FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS.

INICIADO EN SESIÓN: 21 de octubre del 2019
SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original,

dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Exposición de Motivos

La utilización de recursos en cada administración es responsabilidad de todos. Debemos vigilar su aplicación de manera correcta en la ejecución de políticas y programas que beneficien a la comunidad en general, en temas de suma prioridad como son la seguridad, educación, salud, desarrollo social y humano.

En la actualidad observamos como la asignación de escoltas y elementos de seguridad de algunos funcionarios o sus familias es exagerada, de acuerdo a las funciones que desempeñan, volviéndose un derroche innecesario para el erario público.

El establecer personal de seguridad pública a funcionario o servidores públicos, nació de una necesidad de hace algunos años, derivado de la crisis de inseguridad que sufría nuestro país a manos de la delincuencia organizada, donde ésta amenazaba y atentaba contra la vida de cada servidor público que decidía hacerles frente.

Actualmente la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, permite que el Poder Ejecutivo, Magistrados, Jueces y Presidentes Municipales, tengan estos privilegios por tiempo determinado, después de haber terminado su mandato, haciendo una discrecionalidad en el uso de recursos humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

artículo 21 menciona sobre en quien recaerá la seguridad pública y habla de una función coordinada entre la Federación, las Entidades

Federativas y los Municipios, cuyo fin primordial es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, dándole prioridad a los ciudadanos y sus familias, que son quienes eligen a los gobernantes y servidores públicos.

Es importante que este Congreso sea reflexivo para darle prioridad a la seguridad de la ciudadanía en general, pues vemos como los delitos siguen a la orden del día en nuestra metrópoli. Esto sin dejar de mencionar que somos una de las entidades que tiene alerta de género, siendo un delito que por su importancia debe ser atendido con prioridad.

Actualmente la ley establece que, de acuerdo a la naturaleza del riesgo, de la amenaza recibida o bien por las funciones que desempeña, también tendrán derecho a recibir las medidas de protección y seguridad el cónyuge del servidor público y los familiares en línea recta descendente hasta el primer grado, durante el mismo período de tiempo en que la reciba el servidor público.

Además, permite que, a la conclusión del encargo, se pueda continuar aplicando las medidas de seguridad y protección, siempre que subsista el riesgo de daño, amenaza o peligro, previa autorización del Titular del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, según corresponda, conforme a los siguientes plazos:

De hasta **seis años** posteriores a la conclusión del encargo, para el Gobernador del Estado;

De hasta **tres años** posteriores a la conclusión del encargo, para el

Procurador General de Justicia y el Secretario General de Gobierno;

e) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta **tres años** posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para Presidentes Municipales; o

d) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta **dos años** posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para Magistrados, Jueces del Poder Judicial y cualquier otro supuesto.

La actual redacción del artículo es excesiva, y de ninguna manera respeta todos los principios que señala el artículo 134 de la Constitución Federal para el ejercicio de recursos económicos, mismos que deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Como fundamento de esta Iniciativa, también debe considerarse que el proporcionar escoltas a ex funcionarios públicos, cuyos sueldos emergen del erario, coloca a dicho ex funcionarios en una situación de privilegio, de la cual carecen los ciudadanos en general.

Aquí cabe la simple y contundente pregunta de por qué un ex funcionario y sus familiares directos, pueden contar con protección personalizada de escoltas pagados con recursos públicos, cuando la gente en general, que también puede ser víctima en cualquier momento de la delincuencia, no goza de esta protección.

Porque independientemente del supuesto riesgo que corra un ex funcionario público por las labores que anteriormente ejerció en materia de seguridad, los ciudadanos también corren a diario estos mismos riesgos, sin contar con ninguna protección personalizada.

Igualmente, el seguir proporcionando el servicio de escoltas personalizados a ex funcionarios y sus familiares, contraviene del todo la Austeridad Repúblicana necesaria en todo nuestro país y una de las banderas de nuestro actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo Federal, ha puesto el ejemplo de la necesaria reducción de los gastos en seguridad personalizada para funcionarios y exfuncionarios, al renunciar al aparato de protección que antes le brindaba el Estado Mayor Presidencial. Recordemos que antes de López Obrador, los Presidentes de México contaban para su protección personal, con 8 mil miembros del Estado Mayor Presidencial, corporación disuelta por nuestro actual Presidente y cuyos miembros, todos militares de elite, se reincorporaron al servicio activo en beneficio de todos los mexicanos.

Más recientemente, en mayo de este año, López Obrador rechazó la creación de otro cuerpo militar de elite para protegerlo, según proponía el Senado de la República, pues para nuestro Presidente, todos estos recursos públicos estarán mejor utilizados, en reforzar las corporaciones nacionales de seguridad, las acciones y programas en el tema, al servicio de los ciudadanos.

Como líder de la Cuarta Transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado más muestras de que esta Austeridad Republicana, se está convirtiendo en una realidad. La cancelación de las pensiones vitalicias a ex Presidentes de México, es otro ejemplo de esto.

La óptica de López Obrador es la correcta y los hechos demuestran que esta asignación generalizada de escoltas personales a ex funcionarios, representa una pesada carga para el erario, recursos que bien podrían destinarse a programas y acciones de real beneficio social.

El propio Presidente de México sustentó lo anterior, al revelar en abril de este año que, sólo en los escoltas que protegían a los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón hasta antes del 1 de diciembre de 2018, se gastaban 55 millones de pesos al año por cada uno.

A la fecha y según las nuevas disposiciones del Gobierno Federal, esta protección personalizada a Fox y Calderón, se ha reducido al mínimo indispensable, abatiendo con ello el gasto público involucrado.

Hay otras consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, para dimensionar el brutal gasto que representa para los ciudadanos, esta protección personalizada a funcionarios y ex funcionarios públicos.

Según notas recientes de un destacado medio local de comunicación, el Ayuntamiento de Monterrey ha programado la adquisición de 6 nuevas camionetas blindadas, a un costo total de 18.3 millones de pesos.

Esto significa que, en una aritmética básica, cada una de estas camionetas blindadas costará más de 3 millones de pesos, cada una.

Estas unidades blindadas proporcionarán protección a funcionarios del actual Ayuntamiento de Monterrey, pagadas de los impuestos que, a su vez, son aportados por los ciudadanos, que no cuentan con este tipo de privilegios para su seguridad.

Esto, pese a que la Administración Municipal regiomontana, ya cuenta con otras 16 camionetas blindadas, que en su momento implicaron un alto costo para el erario público.

Todo esto nos lleva a concluir que, acatando la Austeridad Republicana enarbolada y representada por el Presidente Andrés

Manuel López Obrador y que es indispensable para destinar cada vez más recursos a programas y acciones que realmente respondan a las necesidades de los mexicanos, se debe ir eliminando gradualmente la asignación de escoltas, automóviles blindados y cualquier tipo de trato especial y personalizado, de seguridad o similares, para funcionarios y ex funcionarios públicos en todo México.

¡No podemos ni debemos, ni destinar recursos públicos a este oneroso privilegio de ex servidores públicos, ni éstos merecen contar con ventajas a las que los mexicanos en lo general, no pueden acceder!

¡Ni un Escolta, ni un Auto Blindado más para Ex Funcionarios Públicos! ¡Ese debe ser nuestro objetivo común!

Por los razonamientos antes citados, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Único. • Se reforman los artículos 57 y 143 de Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 57.- ...

A la conclusión del encargo, cesarán las medidas de seguridad y protección. contenidas en este capítulo.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la seguridad del servidor. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será motivo del retiro de la protección.

Artículo 143.- La protección y escolta de servidores públicos y demás personas que gocen de este beneficio, dentro de su respectivo ámbito de competencia, se observará lo dispuesto en el Capítulo Quinto del

Título Tercero de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: La protección a ex servidores públicos que hubiese sido otorgada previamente a la entrada en vigor del presente decreto, en los términos del CAPÍTULO QUINTO denominado DE LA COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, correspondiente al TÍTULO TERCERO denominado DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, seguirá prestándose en los términos vigentes al momento de su otorgamiento.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:44

24 SEP 2021

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

294

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en materia de paridad de género en la carrera judicial en el Estado.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del

RGIC:

> ***Artículo 24.***. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la

presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Claudia Tapia Castelo y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2020 Expediente: 13314/LXXV

PROMOVENTE: DIP. CLAUDIA TAPIA CASTELO, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO INDEPENDIENTE PROGRESISTA

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA CARRERA JUDICIAL EN EL ESTADO.

INICIADO EN SESIÓN: 11 de febrero del 2020

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El techo de cristal continúa siendo inquebrantable para las mujeres en casi todos los sectores profesionales; sobre todo en las cúpulas de los poderíos desde los cuales se toman las decisiones que mueven el mundo.

Dentro del campo jurídico, los Poderes Judiciales son el ejemplo por antonomasia de la opresión profesional que padecen las mujeres, quienes llegan con dedicación y esfuerzo, pero se quedan ancladas a la base.

Así, el Poder Judicial no es otra cosa que "una estampa judicial en blanco y negro propia de otros siglos en los que las mujeres tenían menos derechos que nuestros menores de hoy." (Poyatas Matas, 2017)

La falta de representación de las mujeres en el ámbito público es un fenómeno innegable que repercute en la perpetuación de la desigualdad de género.

Específicamente en la judicatura mexicana, las mujeres han estado siempre excluidas de participar como Juzgadoras, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en los de las entidades federativas.

Existen ya diversas iniciativas que enfrentan específicamente la problemática de la falta de mujeres Juzgadoras dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León; es decir, que proponen paridad de género para Magistradas, Juezas de Primera Instancia y Menores.

Sin embargo, dichas Iniciativas dejan fuera a todo el personal del Poder Judicial que trabaja apoyando a las Magistraturas y Juzgados; se dejan fuera a las Secretarias de Acuerdos, las Actuarias y las Escribientes.

Por ello, en esta Iniciativa abordo específicamente la problemática de la falta de mujeres en la **carrera judicial** en el Estado de Nuevo León; es decir, de mujeres Secretarias de Pleno o de Sala, Secretarias de Juzgado de Primera Instancia, Secretarias de Juzgado Menor, Actuarias y Escribientes.

Este tema trasciende en la práctica, porque se necesitan mujeres en la judicatura para que haya justicia para las mujeres.

"La ausencia de mujeres en los puestos de relevancia social es una patología de las democracias de este siglo. Los cambios necesarios para lograr una sociedad igualitaria se aceleran cuando las mujeres se incorporan en todos los ámbitos sociales, políticos, culturales o judiciales de forma equilibrada y justa, y especialmente en las altas jerarquías de la judicatura desde donde se toman las decisiones de mayor trascendencia para la ciudadanía." (Poyatas Matas, 2017)

De ese modo, la paridad de género en el Poder Judicial local es un asunto de envergadura porque no sólo protege y beneficia a las mujeres en la judicatura, sino que también favorece a las justiciables.

Asimismo, el Poder Judicial local ha cobrado especial relevancia frente a un Ejecutivo desinteresado en los asuntos locales y enfocado en la carrera política personal de su titular.

Recordemos que sin un órgano juzgador de los actos de la autoridad y de las leyes -es decir, sin un Poder Judicial-, estaríamos en peligro de vivir una regresión autoritaria.

Así, siendo el Poder Judicial del Estado una institución fundamental para aplicar el Derecho y hacer justicia a la ciudadanía neoleonesa, resulta importante garantizar que dentro de ella se den las condiciones para que

las mujeres (más de la mitad de la población) obtengan justicia.

De acuerdo a la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Nuevo León "las prácticas, las políticas, la estructura y la organización judiciales, se ejecutan en un contexto social determinado y el conocimiento de su problemática y de las desigualdades que en él se producen, se convierten en factores determinantes para resolver de manera justa o injusta los conflictos, por tal razón, los Poderes Judiciales no pueden permanecer ajenos a los problemas de la población."

Es por ésto que presento esta Iniciativa, para que se garantice la paridad de género en la carrera judicial del Estado de Nuevo León, para que de forma complementaria a la paridad de género en las Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial, del Estado, también se resuelva la problemática de la falta de mujeres Secretarias, Actuarias y Escribientes.

En congruencia con lo anterior, se pone a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente **Proyecto de Decreto,** para su turno a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, según lo estipula el artículo 39, fracción cuarta, inciso b), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León:

DECRETO

Único.- Se reforman los artículos 125 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO 125.- El ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización, evaluación y reconocimiento de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se dará en el contexto del Sistema de Carrera Judicial que establece el presente Título y las disposiciones

aplicables, mismo que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, **paridad de género,** profesionalismo e independencia."

"ARTICULO 129.- El ingreso y permanencia en las categorías señaladas en las fracciones 111 a VII del artículo 126, se sujetará a lo siguiente:

I. (...)
(...)
(...)

Para el nombramiento definitivo se considerará el resultado aprobatorio de la evaluación que el Consejo de la Judicatura haga al interesado, acerca de la calidad y trayectoria en el desempeño de la función, así como **el principio de paridad de género y** lo establecido en los reglamentos aplicables.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado titular de la Sala, en su caso, una vez cumplidos los trámites señalados con anterioridad, harán la designación provisional o definitiva de los servidores públicos adscritos a las áreas a su cargo, **debiendo observar el principio de paridad de género.**

El Consejo de la Judicatura hará la designación del resto del personal del Poder Judicial que no _tenga señalado un procedimiento específico, **debiendo observar el principio de paridad de género.**

(...)
(...)

II. (...)
(...)

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Segundo.- El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León deberá modificar su Reglamento Orgánico Interno dentro de un plazo de 60 días hábiles, para que se adecue en lo conducente al presente Decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

13:25 h.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
RECIBIDO
24 SEP 2021
OFICIALIA MAYOR

301

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] notificaciones [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 79, 116 Y 225 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.

- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período*

inmediato de sesiones...

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 13242LXXV, presentada en sesion: 10 de diciembre del 2019 y turnada a la comisión de: Justicia y Seguridad Pública y Anticorrupción.

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOCISION DE MOTIVOS:

1.- Contexto.-

El fenómeno de la corrupción ocupa hoy en día el segundo lugar de las preocupaciones que aqueja a la sociedad neolonesa justo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, siendo nuestro deber atender esta preocupación de la

ciudadanía. Lamentablemente, el problema de la corrupción, lejos de acabarse, ha ido en aumento en todos los niveles de gobierno, motivando un profunda desconfianza y desprestigio sobre el funcionamiento de las instituciones, tan es así que se señala en el Barómetro de la Corrupción de América Latina y el Caribe 2019 elaborado por Transparencia Internacional que el 44% de las y los encuestados consideraron que la corrupción en México había aumentado durante el último año.

Así mismo, en la últimaEncuesta Nacional de Calidad Gubernamental realizada (2017) se muestra que en el Estado de Nuevo León 89.8% de la población percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente, por lo que sin duda el problema continúa agravándose y es necesario trabajar en la regulación para atenderse.

De acuerdo con el informe elaborado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía General de la República, entre enero y julio del 2019, se registraron 95 carpetas de investigación, en las que se tienen como imputados a candidatos, dirigentes y/o militantes de partidos políticos, así como alrededor de 258 expedientes determinados por el Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos electorales.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada indicó que Nuevo León encabeza la lista de mayor incidencia en delitos electorales del país, con 260 denuncias (2018), recibiendo reportes relacionados con la coacción, obstrucción del ejercicio electoral y compra de votos.

Conforme lo anterior, la Dra. María Marván Laborde, ex-Consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) e investigadora de la UNAM, ha manifestado en el pasado que *"hay que tener claridad sobre Jo que le toca a las autoridades electorales y Jo que toca a los partidos. (...) Los problemas de integridad son principalmente de partidos políticos. En México no tenemos partidos comprometidos con la democracia ni con las reglas. Hemos cambiado las reglas desde 1977 y Jos partidos siempre han encontrado la manera de darles la vuelta."* Por otra parte, en el marco del pasado Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó que *"/os partidos políticos no están siendo suficientemente sensibles del daño que la corrupción y la impunidad, así como los ataques sistemáticos a las autoridades electorales están provocando en la recreación de la democracia como el principal mecanismo civilizatorio de las sociedades modernas."* [1]

Sin embargo, incluso y cuando los partidos políticos están profundamente enraizados en las redes de corrupción sistémica, éstos son en definitiva necesarios para la democracia representativa, tan necesarios como su radical renovación, que en el

mundo actual no es posible tener una democracia directa, intermediarios, como la hubo en su momento en la Edad Antigua. Como escribió Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, filósofo del Derecho y profesor universitario: *"prescindir de los partidos políticos en los grandes Estados* contemporáneos equivale a prescindir de la representación (...). Vivimos en un mundo quebrado, fraccionado, partido (...), no es para maravillarse que exist n partidos si antes tomamos en cuenta que el mundo está partido."[2]

Es por ello, que la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos en la vida nacional y en el desarrollo del país, es necesaria y debiera estar ejercida en caso de que el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tengan nos sean suficientes, así como cuando no cumpla con la responsabilidad administrativa o se rehusé a su cumplimiento.

2. Propuesta.-

Mencionado lo anterior y tomando en consideración que los partidos políticos son imprescindibles para nuestra democracia representativa, pero que actualmente están inmiscuidos en redes de corrupción profundas, es que se propone en esta Iniciativa hacerlos subsidiariamente responsables de las responsabilidades administrativas que por hechos de corrupción se les finquen a los servidores públicos que hayan emanado de ellos; es decir, que si a un servidor público (por elección popular) le es fincada una responsabilidad administrativa por hechos de corrupción, el partido político que lo haya postulado será obligado subsidiario en esa responsabilidad fincada.

Los partidos políticos tienen la obligación para con la ciudadanía de postular los mejores perfiles como candidatos a los puestos de elección popular, no a los allegados y cómplices de sus dirigentes.

Con la presente propuesta, se incentivaría a que los partidos políticos postulen a los mejores cuadros en los Procesos Electorales, en lugar de seguir postulando a sus incondicionales, que generalmente son políticos que incumplen con lo establecido en la Ley.

Para concretar esta propuesta, y en alcance a la Iniciativa de Reforma del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, para incluir la posibilidad de que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo regule en materia de obligados subsidiarios de los servidores públicos (en este caso a los partidos políticos).

Debe modificarse la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, misma que al efecto dispone, en este rubro, lo siguiente:

Artículo 4. *Son sujetos de esta Ley:*

I. Los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León pertenecientes a los entes públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley; y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y los que se encuentren en situación especial conforme al Capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley

Artículo 79.- *En el caso de que la falta administrativa grave o hecho de corrupción cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.*

El Tribunal determinará el pago de una reparación del daño cuando la falta administrativa grave o hecho de corrupción a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.

Artículo 116. *Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabílidad administrativa:*

I. *La Autoridad investigadora;*
II. *El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no grave;*
III. *El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y*
IV. *Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabílidad administrativa, incluido el denunciante.*

Artículo 225. *Cuando haya causado ejecutoría una sentencia en la que determine la plena responsabilidad de un servidor público por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará a sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento de conformidad con las siguientes reglas:*

I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico, Contraloría u Órgano de control interno correspondiente, a efecto de que se registre las constancias de sanciones o de inhabilitación en el sistema estatal de información y en el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional que menciona el artículo 27de la presente Ley;

II. Cuando se haya impuesto una reparación del daño y/o sanción económica al responsable, se dará vista a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o Tesorería Municipal correspondiente.

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro del término de diez días hábiles, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere la fracción 1 de este artículo.

En el caso de la fracción 11, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o Tesorería Municipal correspondiente; informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la reparación del daño y la sanción económica que corresponda.

En este sentido, la reforma contempla modificar los artículos citados para armonizarlos e incluir la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos para fines de la reparación de los daños y perjuicios en el sentido expresado en el apartado.

Del mismo modo, es procedente reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León, para fines de homologarlo a su vez con la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos, ya que actualmente el artículo 145 del citado ordenamiento establece quiénes están obligados a reparar los daños y perjuicios, como responsabilidad civil, derivados de la responsabilidad penal, sin mencionar a los partidos políticos.

Artículo 145.- Están obligados a reparar los daños y perjuicios, como responsabilidad civil, en la forma y términos que fije el código de procedimientos penales:

I.- Quienes ejerzan la patria potestad, los tutores en ejercicio y los que tengan la guarda o custodia legal de los incapacitados, en los términos del código civil del estado;

II.- Los patrones, empresas, negociaciones, personas morales, talleres, por delitos cometidos por sus funcionarios, empleados, obreros, encargados, representantes, apoderados, con los medios que se les proporcionen o en beneficio o representación de los primeros, o con ocasión de las actividades o funciones qu les fueren encomendadas;

III.- La federación, el estado y los municipios, por los delitos cometidos por sus servidores públicos en el ejercicio de sus cargos; y

IV.- Todas las personas físicas, o las morales a las que el código civil, este código o cualquier otra disposición jurídica, les confiera responsabilidad por actos de terceros.

Por lo tanto, se propone mediante la presente iniciativa que los partidos políticos sean subsidiariamente responsables de las faltas administrativas graves o hechos de corrupción cometidas por los servidores públicos que hayan sido postulados en el Proceso Electoral inmediato anterior por ellos, así como sean sujetos de responsabilidad civil por los delitos cometidos por dichos servidores públicos. La finalidad es incentivar que los partidos políticos postulen a sus mejores cuadros en los Procesos Electorales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se modifica las fracciones **11 y 111** del artículo **4,** la fracción **IV** del artículo **116,** se adiciona una fracción **IV** al artículo **4,** un párrafo al artículo **79** y un último párrafo al artículo **225,** todos ellos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"Artículo 4. *Son sujetos de* esta *Ley:*

I.- ...

II. *Aquellas personas que, habiendo fungido como Servidores Público Estado y Municipios de Nuevo León,* se *ubiquen en los supuestos* a *que refiere la presente Ley;*

III. Los *particulares vinculados con faltas administrativas graves* o *hechos de corrupción y los que* se *encuentren en situación especial conforme al Capítulo IV del*

Título Tercero de la presente Ley; ***y***

IV. ***Los partidos políticos en forma subsidiaria a los Servidores Públicos que se hayan postulado en el Proceso Electoral inmediato anterior, cuando se trate de Servidores Públicos que ejerzan un cargo de elección popular y se ubiquen en los supuestos del Título Tercero, Capítulo II, a que se refiere la presente Ley."***

"Artículo 79. (...)
(...)
Así mismo, son subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios causados, los partidos políticos que hayan postulado en el Proceso Electoral inmediato anterior a los Servidores Públicos que hayan cometido faltas administrativas graves o hechos de corrupción y que ejerzan un cargo de elección popular"

"Artículo 116. Son *partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:*

I a III.- (...)

IV. Los *terceros, que* son *todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante y los partidos políticos en los casos previstos en el Título Tercero, Capítulo 11 de la presente Ley.*

"Artículo 225. (...)
la II.- ...
(...)
(...)

Las obligaciones economicas que los partidos políticos llegasen a cubrir de manera subsidiaria conforme a lo dispuesto en esta Le deberán hacerse con cargo al financiamiento público anual que corresponda de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Partido Políticos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León y las demás leyes federales o locales aplicables a esta disposición.

SEGUNDO. - Se modifica el artículo **145** las fracciones **III** y IV, y se adiciona una fracción **V** del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue

Artículo 145.- *Están obligados a reparar los daños y perjuicios, con responsabilidad civil, en la forma y términos que fije el código procedimientos penales:*

I a II.- (...)

III.- *La federación, el estado y los municipios, por los delitos cometidos por* sus *servidores públicos en el ejercicio de* sus *cargos;*

IV.- Todas las personas físicas, o *las morales a las que el Código Civil, este Código o cualquier otra disposición jurídica, les confiera responsabilidad por actos de terceros;* ***y***

V. Serán responsables de manera subsidiaria, los partidos políticos que en el Proceso Electoral inmediato anterior hayan postulado a los servidores públicos que se declaren culpables por cometer cualquier delito de los descritos en el Título Séptimo de este Código."

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

13:28hrs

24 SEP 2021

Atentamente

[redacted]

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

312

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren*

debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

***Articulo 108.** Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

***Articulo 67.** El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

***Artículo 51.** para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

***Articulo 53.** Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

***Articulo 54.** Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

***Articulo 56.** Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislative del PRI y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2018 Expediente: 11987/LXXV

PROMOVENTE: DIP. FRANCISCO REYNÁLDO CIENFUEGOS MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULO$ DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ASI COMO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE CUSTODIA DE MENORES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Siguiendo las perspectivas establecidas en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que "Todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá el interés superior del niño"; resulta ineludible la

obligación a cargo de los Tribunales Jurisdiccionales, en concatenación con el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de garantizar el acceso a los menores a una justicia pronta y expedita, no obstante que éstos no sean parte en el procedimiento jurisdiccional, dado que ineluctablemente se encuentran vinculados al juicio, y en

consecuencia cualquier retraso en la impartición de justicia puede derivar en un prejuicio para el menor o menores involucrados.

Asimismo los artículos 4° y go de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha consignado que: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención";" Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto del maltrato o casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y deben adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño...Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño".

De lo anterior se puede advertir que los instrumentos internacionales, propician la intervención directa de los Poderes del Estado, al ser garantes de los derechos de la infancia, por lo que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, dentro de sus respectivas esferas de competencia deben garantizar ese interés adecuando la normatividad local, garantizando los derechos de los menores que intervienen dentro de los procedimientos judiciales.

Respecto a la preservación de los derechos de los menores en los últimos años se ha incrementado el número de procedimientos relativo al cambio de custodia y a la convivencia con menores, dado el fortalecimiento del sistema oral que ha producido resultados favorables en beneficio de los ciudadanos y para

proveer la efectiva atención de los menores, el Poder Judicial del Estado creó diversas instituciones dedicadas a tal fin, entre ellas el Centro Estatal de

Convivencia Familiar el cual constituye un órgano auxiliar en la impartición de Justicia, centro que ha constituido una herramienta fundamental para este tipo de conflictos que no son factibles resolver desde el punto de vista estrictamente jurídico, al envolver estados psicológicos sobre los cuales el juez no puede emitir un dictamen técnico, sino que necesita un experto en la materia que pueda ilustrarlo, dado la situación parental de la familia.

Ahora bien, en los últimos años por diversas circunstancias, tales como los problemas económicos, adicciones, abandono, divorcios entre otros; se ha mostrado vulnerable el núcleo familiar, requiriendo de herramientas jurídicas para fortalecer este tejido social, un claro ejemplo de avance en materia familiar fue en el año 2009 en el que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León invirtió la cantidad de $ 1O millones 300 mil pesos para la construcción del Centro Estatal de Convivencia Familiar, con el objeto de brindar un lugar seguro e instalaciones adecuadas para los padres que atraviesan la disputa legal de los hijos de forma gratuita.

En este mismo orden de ideas, se tiene que el poder judicial del Estado se cuenta con 15juzgados de Juicio Oral y 13 en la vía tradicional del primero al cuarto Distrito Judicial del Estado, y demás distritos foráneos y solamente existen dos Centros de Convivencia, en el que se presta entre otros, el servicio de evaluación psicológica y social.

Como ya se señaló con anterioridad, para garantizar el derecho fundamental de acceso a una justicia expedita, el legislador ordinario local tuvo a bien instituir, en el año 2007, el procedimiento oral, habiendo consignado en la exposición de motivos que este vendría a revolucionar la impartición de la justicia en Nuevo León, creándose procedimientos en los que se lograría la inmediatez.

Si bien el legislador proveyó a garantizar efectivamente el derecho impetrado arriba, también debemos de reconocer el problema que se enfrenta actualmente dentro de los procedimientos orales de convivencia y custodia, en los que es necesario realizar evaluaciones psicológicas con enfoque sistémico, los cuales tardan más de 04-cuato meses en ser remitidos al órgano jurisdiccional, lo que obedece a diversas circunstancias como lo son el número de citas a las que debe acudir el usuario, si se tiene o no los recursos para trasladarse al centro de evaluación, entre otros; con independencia del tiempo contando a partir de que se plantea la demanda hasta la contestación o la celebración de la audiencia preliminar, lo cual oscila de 01-uno a 02-dos meses, atendiendo a la fecha de emplazamiento

de juicio; lapsos que se estiman en demasía extensos; pues ya no imperan las mismas circunstancias desde que se inició el juicio.

Igualmente, se suscita otra problemática, cuando se impone necesario citar a menores de edad, atendiendo al Protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el sistema que impera actualmente se debe solicitar con cierto tiempo de anticipación al psicólogo que va asistir a la escucha de menores; aconteciendo que en muchas ocasiones, los usuarios llevan a sus hijos únicamente cuando van a revisar su asunto o realizar algún trámite al juzgado.

No estimándose que la solución sea la creación de otro centro de convivencia, sino que se cuente con un psicólogo y un trabajador social adscritos a cada juzgado, que actúen como auxiliares y sean independientes al juez, pero que puedan emitir sus dictámenes con la inmediatez que el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita en concatenación con el interés superior del menor, con lo cual consideramos se garantizaría en forma efectiva los derechos fundamentales de los menores inmersos en un procedimiento jurisdiccional.

Con lo anterior, se busca otorgarle expeditas a tales asuntos en aras de resolver en forma inmediata la actual problemática familiar y evitar que con el transcurso del tiempo los menores se vean más afectados.

En virtud de lo expuesto, nos permitimos someter a la atenta consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO: Se reforma la fracción XII del Artículo 3 y por modificación de la fracción IV del artículo 41, adicionando las fracciones V y VI del mismo numeral, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICUL03.-

...

XII.- El Centro Estatal de Convivencia Familiar, **los psicólogos y trabajadores sociales adscritos a cada juzgado; y**

XIII.-

ARTÍCULO 41.-

IV.- Estudiantes de Derecho, en calidad de meritorios, que discrecionalmente considere pertinente el titular del juzgado respectivo, debiéndose llevar en este caso, registro de su trabajo para los efectos del Servicio Social;

V.-Psicólogos;

VI.-Trabajadores sociales.

SEGUNDO: Se reforma por modificación el primer párrafo del artículo 1077, así como el numeral 1078, adicionando un segundo y tercer, quedando el actual segundo como cuarto párrafo del artículo 1077 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 1077.- El Juez, después de contestada la demanda y fijada la litis, fijara un régimen de convivencia provisional con el demandante, de manera libre, atendiendo al interés superior del menor involucrado; en caso de oposición expresa por parte del progenitor custodio, que implique un riesgo a la integridad física, psicológica o emocional del menor, se escuchara la opinión del psicólogo adscrito al juzgado, y de estimarse necesario, la convivencia será asistida o supervisada.

Las partes tendrán la obligación de informar al juzgador, los horarios de las actividades escolares de los menores, y extracurriculares, ambas para el caso de que las tuvieran, con el objetivo de señalar un régimen provisional de convivencia con el progenitor no custodio.

Si se decreta la convivencia asistida o supervisada mientras dure el procedimiento, cada parte deberá soportar los gastos de traslado hacia el órgano auxiliar al que se les remita, lo que podrá ser reclamado en la liquidación de los gastos judiciales para el caso de obtener resolución favorable.

La convivencia provisional cesará una vez que el juez pronuncie la sentencia definitiva.

Artículo 1078.- Durante el procedimiento deberá escucharse la opinión de los menores, pudiendo hacerse esto a partir de los cinco años, atendiendo al grado de capacidad y madurez que este muestre, quedando obligada la persona que detente la custodia a presentarlo el día y la hora señalados.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, deberá proveer en un plazo no mayor a 120 días a la entrada en vigor del presente decreto la cobertura total del personal profesional requerido para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO: El Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones necesarias a su reglamento, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de su entrada en vigor.

CUARTO: Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en proceso, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Aquellos procedimientos que no se encontraren emplazados, podrán ser tramitados conforme a esta reforma, en beneficio del menor afecto a la causa y atendiendo a lo establecido en el artículo anterior.

QUINTO: El Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Gener' del Estado deberá de proveer al Tribunal Superior de Justicia del Estado, del presupuesto necesario, ejerciendo las acciones correspondientes para que en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019, se asigne el personal correspondiente para el mejor funcionamiento del Centro Estatal de Convivencia Familiar.

Atentamente

Monterrey Nuevo león 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández.

[redacted]

19:06hrs

315

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION A LOS ARTICULOS 4 FRACCION IV, 11 FRJACCION 111, 24, 25 PARRAFO PRIMERO, 26 PARRAFO PRIMERO, 78 PARRAFO PRIMERO, 90, 91 PARRAFO PRIMERO Y 92 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.

- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente 12493/LXXV, presentada en sesión el27 de febrero del 2018, turnada a las comisión de Justicia y Seguridad Pública y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año:2019 Expediente: 12493/LXXV,
PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, E INTEGRANTES DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION A LOS ARTICULOS 4 FRACCION IV, 11 FRJACCION 111, 24, 25 PARRAFO PRIMERO, 26 PARRAFO PRIMERO, 78 PARRAFO PRIMERO, 90, 91 PARRAFO PRIMERO Y 92 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 27 de febrero del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es fundamental que día con día se esté trabajando en la actualización y modernización de los cuerpos de auxilio de nuestro Estado. Por lo cual, es indispensable integrar y facultar a los Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León. Pues es importante que los
cuerpos de bomberos queden protegidos y arropados por el Estado y sus 51 municipios, ya que representan una causa noble y heroica.
Atendiendo a la naturaleza de sus actividades las cuales los ponen en peligro constante en cada llamado de auxilio al cual deben acudir cuando se presenta alguna situación de desastre; dejando en un estado de zozobra a quienes dependen económica, moral y emocionalmente de ellos. Es por ello, que
resulta imprescindibleque el Estado en coordinación con los Municipios constituyan una Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos; la cual esté dotada de equipos de la más
alta tecnología que le permita pasar de un agente reactivo a un cuerpo
de auxilio preventivo. De tal forma este apto para cumplir con las contingencias que puedan poner en un inminente riesgo a la sociedad.
Actualmente se han estado presentado acontecimientos ocasionados en la mayoría de los casos por la falta de pericia del ser humano; y otros donde la naturaleza nos ha golpeado con fenómenos naturales catastróficos. Los cuales, nos han hecho vernos como una sociedad vulnerable a cualquier tipo de desastre} y en consecuencia a una debilitada capacidad de respuesta de nuestros cuerpos de auxilio.

Por lo anterior es importante retomar el objetivo por el cual se dio el origen al Sistema Nacional de Protección Civil: dotar a la sociedad en general de todos los elementos que le permitan hacer frente con eficiencia y eficacia a los fenómenos naturales antes} durante y después de su ocurrencia; queriendo decir con esto que el objetivo que se persigue es prevenir los desastres} disminuir sus efectos destructivos y procurar una recuperación inmediata a la normalidad.
Por *esto}* la importancia de pensar en una Dirección de Protección Civil y Bomberos dependiente del Estado. Y con ello garantizar lo que establece el

Artículo 10 de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León la cual a la letra dice lo siguiente:

Artículo 10.- El Sistema Estatal de Protección Civil tendrá como obietivo fundamental ser el instrumento de información. en materia
de Protección Civil. que reúna en conjunto los principios. normas. políticas. procedimientos y acciones. que en esa materia se hayan vertido. así como la información relativa a la estructura orgánica de los cuervos de protección civil de los sectores público. privado o social. que operen en la Entidad. su rango de operación, personal. equipo y capacidad de auxilio que permita prevenir riesgos. y altos riesgos desarrollar mecanismos de respuesta a desastres o emergencias. y planificar la logística operativa y de respuesta a ellos. Temperaturas más cálidas (la acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más v esto trae como consecuencia un alto nivel de riesgo de incendios).

Tormentas más intensas (el hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes. pero cuando se presentan sean muy intensas ocasionando inundaciones en las ciudades.)
Huracanes más peligrosos.

Dicho lo anterior, ponemos a su atenta consideración el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 4 fracción IV, 11 fracción III, 24, 25 párrafo primero, 26 párrafo primero, 78 párrafo primero, 90, 91 párrafo primero y 92 de la Ley de Protección Civil del Estado De Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran autoridades de protección civil

en el Estado a: 1 a 111...

IV. El Director de Protección Civil y Bomberos; y

V...

Artículo 11.- ElSistema Estatal de Protección Civil se integrará enunciativamente con la Información de:

I. alII...

111. La Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos;

IV. alVIII...

Artículo 24.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, dependiente de la Secretaría General de_Gobierno del Estado, tendrá como función, proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la protección civil en el Estado, así como el control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social privado, grupos voluntarios, y la población en general, en apoyo a las resoluciones que dicte el Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León, o del Centro Estatal de Operaciones.

Artículo 25.- La Dirección de Protección Civil y bomberos se integrará por:

I.alIII...

Artículo 26.- La Dirección de Protección Civil y bomberos tendrá las siguientes atribuciones:

I.al XXV...

Artículo 78.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con las unidades municipales, vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella, y aplicarán las medidas de seguridad que correspondan.

Artículo 90.- Son autoridades competentes para imponer las sanciones a que se refiere el presente CAPITULO el Director de Protección Civil y Bomberos, y en los municipios el Titular de la unidad municipal de Protección Civil.

Artículo 91.- Cuando en los establecimientos se realicen actos que constituyan riesgo a juicio de la Dirección de Protección Civil y Bomberos} o de las unidades municipales} según corresponda} estas autoridades en el ámbito de su competencia procederán como sigue:

I.al IV...

Artículo 92.- Cuando en los establecimientos} se realicen actos o servicios que constituyan alto riesgo a juicio de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, o de las unidades municipales} según corresponda} estas autoridades en el ámbito de su competencia procederán de inmediato a suspender dichas actividades; a ordenar el desalojo del inmueble; y a aplicar las demás medidas de seguridad que resulten procedentes enunciadas en el Artículo 84 de este ordenamiento} además de las sanciones que en su

caso correspondan. Lo anterior sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones señaladas en otros ordenamientos.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:52(hrs)

24 SEP 2021

321

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL, CODIGO CIVIL, LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LEY DE PREVENCION Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE AGREGAR UN NUEVO CONCEPTO DE VIOLENCIA FAMILIAR.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 12829/LXXV, presentada en session: 03 de septiembre del 2019.

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada"[1].

Se ha encontrado que las mujeres que experimentan violencia[1] sufren de una variedad de problemas de salud mental y física a largo plazo, además de que se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a sus hijos, familiares y comunidades; además de que refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.

Hasta el 70 por ciento de las mujeres en el mundo experimenta algún tipo violencia en el transcurso su vida[2]. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) y el INEGI, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.

En relación a la eliminación de la violencia contra la mujer, son de destacarse los principios consagrados dentro de la declaración emitida por la asa sesión plenaria 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas[3]. Dentro de los principios enunciados, podemos destacar en el Artículo 2, que se entenderá que la violencia contra la mujer puede abarcar los siguientes actos (aunque sin limitarse a ellos):

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

e) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La violencia familiar involucra diversas acciones y omisiones por parte del agresor, que se cometen la mayor parte del tiempo dentro de la intimidad del hogar, fuera del conocimiento del resto de la familia, amigos y sociedad, en algunos casos escalando de ofensas, golpes, injurias, amenazas, prohibiciones y/o agresiones sexuales hasta la muerte.

Las víctimas se ven inmersas en una realidad paralela difícil de entender, convirtiéndose en un círculo que las atrapa, sin importar la condición social, edad o grado de estudios.

La violencia familiar la mayor parte del tiempo es un mal silencioso hasta que es conocido por la sociedad cuando la víctima recibe graves agresiones físicas, es mutilada o asesinada. Cuando estos casos salen a la luz pública la sociedad toma conciencia por unos cuantos días de la problemática multifactorial que requiere de una prevención y atención integral del Estado.

La mayoría de las veces este tipo de violencia es aceptada y permitida por la propia víctima, ante una serie de circunstancias económicas, culturales, sociales, psicológicas y físicas que la víctima no es capaz de entender y procesar.

Como parte de las acciones que utilizan los agresores para someter a la víctima se encuentra la fuerza física, las amenazas, la prohibiciones, las injurias, la limitación económica, y el aislamiento; la víctima suele guardar silencio ante el resto de la familia, amigos y sociedad, por la incapacidad de tomar decisiones ante la vergüenza de reconocer lo que vive y miedo de su agresor, mucho menos suele denunciar estos hechos, y cuando lo hace se ven inmersa en un Sistema Administrativo o Penal de trámites burocráticos que las vuelve más vulnerable al ser revictimizada una y otra vez siendo juzgada por su silencio, y en muchos de los casos se duda de su palabra o se considera que la víctima dio causa a la agresión.

Generalmente la víctima tiene un perfil sumiso y baja autoestima, conformándose con lo que creen les tocó vivir, o bien simplemente no pueden salir por sí mismas de este círculo de la violencia.

En la intimidad del hogar como parte de la violencia que el agresor ejerce sobre su víctima, existen tanto prohibiciones de hacer como de no hacer, y es muy común que al agresor aisle psicológica y físicamente a la víctima, para mantenerla en un estado continuo de miedo y zozobra, que no le permite actuar consecuencia.

Como parte de estas prohibiciones el agresor amenaza a la víctima con denunciarla falsamente ante las Autoridades, si la víctima entre otras acciones legales, decide divorciarse, promover una separación provisional, una pensión alimenticia, denunciarlo por violencia familiar, o en general promover cualquier acción legal en contra del agresor. Logrando con esto el agresor someter a la víctima a su voluntad, ante el miedo.

El derecho debe evolucionar para permitir el libre ejercicio de las acciones legales, de otra manera es letra muerta. De qué le sirve a una víctima un divorcio incausado como un procedimiento de breve término y facilidad procesal; que existan medidas de protección en caso de violencia familiar; una separación provisional; una pensión alimenticia que garantice seguridad económica a un menor de edad; si la víctima es limitada por el agresor para que no pueda promover las acciones legales que le competan y otorguen una certeza jurídica respecto de su vida, integridad física o psicológica.

Proponemos que la legislación considere debidamente un nuevo tipo complementario de violencia, como lo es la "Violencia legal", misma que se define de la siguiente forma:

> *Es toda acción del agresor encaminada a someter a la víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos falsos, y/o la presentación de las mismas.*

A fin de integrar debidamente el concepto expuesto, nos permitimos proponer la reforma a diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León; Código Civil para el Estado de Nuevo León; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León.

Asimismo, dentro del Código Penal se propone el incrementar la pena en una mitad más, cuando la persona que realice la conducta, sea conocedora por su actividad o profesión de las leyes, o bien cuando en virtud de su profesión o cargo, pueda disponer de la fuerza pública.

Esta iniciativa es emitida con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU que pretende "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas". Particularmente, se emite en congruencia con la meta 5.2 que

consiste en "Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación".

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma por modificación el primer párrafo, así como las fracciones IV y V del artículo 287 bis; por adición de una nueva fracción VI el artículo 287 Bis, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 287 Bis. - Comete el delito de violencia familiar quien habitando o no en el domicilio de la persona agredida, realice acción u omisión, y que ésta última sea grave y reiterada, que dañe la integridad psicológica, física, sexual, patrimonial o económica o legal, de uno o varios miembros de su familia, de la concubina o concubino.

...

a) A e) ...

...

...

...

I a III ...

IV.- Patrimonial: La acción u omisión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima; puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores,.derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes;

V. Económica: es toda acción u omisión del agresor que controle o este encaminada a controlar u ocultar el ingreso de $US percepciones económica o de la víctima; **y**

VI. Legal: Es toda acción del agresor encaminada a someter a la víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos falsos, y/o la presentación de las mismas. Se incrementará la pena en una mitad más, cuando la persona que realice la conducta, sea conocedora por su actividad o profesión de las leyes, o bien cuando en virtud de su profesión o cargo, pueda disponer de la fuerza pública.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma por modificación el artículo 323 bis y las fracciones IV y V del artículo 323 Bis 1; por adición de una nueva fracción VI el artículo 323 Bis 1 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 323 Bis.- Por violencia familiar se considera la conducta o el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial, económica **o legal** , dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato; de parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, o parentesco civil.

Artículo 323 Bis 1. . .

...

I. a III. . .

IV. Patrimonial: La acción u omisión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima; puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes;

V. Económica: Es toda acción u omisión del agresor que controle o este encaminada a controlar u ocultar el ingreso de sus percepciones económica o de la víctima; y

VI. Legal: Es toda acción del agresor encaminada a someter a la víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos falsos, y/o la presentación de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma por modificación la fracción 11 del artículo 5; por adición de una nueva fracción VIII, pasando la actual fracción VIII a ser fracción IX, el artículo 6, todos ellos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5...
I...

II. Violencia contra la mujer: cualquier acción u omisión, basada fundamentalmente en su género, como la discriminación o la discriminación múltiple o agravada, y cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, ex.ual, patrimonial, económico, legal o la muerte, tanto en el ámbito privado como
en el publico;

III a XV...

Artículo 6...
I a VII...
VIII. Violencia legal: Es toda acción del agresor encaminada a someter a la víctima a su voluntad mediante la prohibición, limitación y control de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la intimidación y/o amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos falsos, y/o la presentación de las mismas.

VIII.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma por modificación el inciso a) de la fracción XII, del artículo 2 de la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 2 ...

I a XI. .....
XII...

a) Contra las mujeres: Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad; los actos encaminados a someter a la mujer mediante la prohibición, limitación y control de sus derechos coartando el ejercicio de sus acciones legales mediante la intimidación y/o

amenazas de presentación de denuncias o querellas de hechos falsos, y/o la presentación de las mismas; tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada;

b) a h) ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente Decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

375

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN AL ROBO DEL AGUA.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado;*

y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2019 Expediente: 12744/LXXV
PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVODEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA.
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN AL ROBO DEL AGUA.
INICIADO EN SESIÓN: 25 de junio del 2019
SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Justicia y Seguridad Pública y Medio Ambiente

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Lo anterior al tenor de la siguiente
El derecho humano al acceso al agua, es un derecho que se encuentra consagrado dentro de nuestro artículo 3 de nuestra Constitución local, así como símil en el Artículo 4 de nuestra Carta Magna.
Es de exponer que conforme a la Ley de Aguas Nacionales se establece cuáles son los cuerpos acuíferos que son protegidos por la federación que van de mares, manantiales, entre otros; por lo que las Entidades Federativas no son competentes para regular su protección.

Ahora, si bien es importante la protección de este elemento en materia ambiental por ser indispensable para el ser humano, es de exponer que dentro de la presente iniciativa queremos exponer un punto concerniente al servicio brindado por el Estado que es el servicio de agua potable.

Hasta el mes de julio del año pasado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se pronunció respecto a realizar brigadas para cerrar alrededor de cien mil tomas clandestinas en el Estado de Nuevo León, la estimación del volumen de ingresos que se pierde en las tomas sin registro suma 15 millones de pesos al mes, mismos que son pagados por el organismos en dicha perdida.

Es importante reconocer y destacar que no queremos afectar el derecho humano al agua, pero si con la intención de combatir a quien a través de medios ilegales quieren hacerse llegar de este recurso fundamental.

Es de exponer que actualmente nuestro marco normativo está limitado en cuanto a las facultades del organismo para presentación de denuncias, así como hacer partícipes a demás autoridades para que denuncien dichas tomas clandestinas, esto aunado a que las sanciones administrativas que se contemplan en la Ley de Agua potable y Saneamiento para el Estado son multas no han sido actualizadas desde la expedición de la norma en 1997, y nuestra norma penal de igual forma no contempla dicha conducta.

Continuando al respecto, es de mencionar que la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León se establece la creación de la Comisión Estatal de Agua Potable, misma que se encuentra integrada por el Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno, Tesorero General del Estado, los alcaldes de los ayuntamientos, el Director del Instituto Público Descentralizado denominado

"Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", así como el Consejo de Administración de dicho organismos, que entre sus principales funciones es la coordinación de políticas públicas para una mejor prestación del servicio de agua potable y saneamiento dentro del estado.

Por lo que consideramos necesario reformar la Ley en mención para integrar entre sus facultades la de interponer denuncias ya sea la comisión o alguno de sus miembros cuando exista la presunción de alguna conducta delictiva o sanción administrativa.

Aunado a lo anterior, dentro a la misma consideramos necesario reformar las sanciones administrativas respecto a las multas que se interponen dentro del catálogo regulado, además que agregamos la conducta de sancionar a quien haga mal uso del agua ya que con esto ocasiona un desperdicio del vital líquido.

Así mismo, para reforzar nuestro marco regulatorio sancionador, proponemos modificar el código penal para el Estado de Nuevo León para integrar como delito equiparable al robo a quien haga instalaciones particulares para extracción de agua potable sin contar con el permiso correspondiente así como su indebida comercialización.

No solo queremos sancionar la extracción y comercialización de agua potable, también ampliamos las conductas a quien emplee mecanismos para extracción de agua potable por sí o por persona interpósita, así como dañar, afectar o robar los mecanismos de medición encargados de brindar el agua potable dentro la jurisdicción estatal.

Dentro del estudio para imponer las sanciones penales que porponemos, consideramos equipararla a la del despojo de aguas, donde dicho delito se da entre particulares, y cuya sanciones van desde dos hasta siete años de prisión, además de que las conductas que consideramos no graves como la alteración de tuberia o de mecanismos de medición de agua, equiparamos la sanción respecto al Código Penal federal donde las sanciones van desde los 3 meses a 5 años de prisión, aunque por el tema que también se integró consideramos adecuar la pena desde 3 días de prisión hasta los 5 años, esto con el fin de presentar el principio de la proporcionalidad de la pena al daño ocasionado conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el juez tenga un parámetro necesario para aplicar conforme a derecho y los principios constitucionales de la imposición de la pena.

Recordemos que a nivel federal el Presidente de la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador realizó una estrategia para combatir el robo de combustible, mismo que es considerado como bienes de la nación. Por ende queremos también combatir la extracción ilegal de un elemento fundamental para el ser humano que es el Agua.

Por lo que creemos necesario dar el estudio correspondiente a la presente iniciativa, así como aprobarla lo más pronto posible para que el Derecho Humano al agua sea con base a legalidad y justicia para los seres humanos que hacemos uso de ella.

Por los argumentos ya descritos, nos permitimos someter a la consideración de ésta comisión el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma por adición el artículo 375 Bis; al Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 375 Bis.- Se equipara robo las siguientes conductas:

I. A quien practique, encubra o consienta que se lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como derivaciones de agua potable, sin la autorización respectiva, así como realizar modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución de agua potable;

II. A quien comercialice el agua potable suministrada por la autoridad competente a través de tomas particulares conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, si no existe o tratándose de tomas de uso no doméstico, y que la comercialización se realice sin contar con autorización correspondiente;

III. A quien emplee mecanismos para succionar agua potable de las tuberías de distribución, tratándose de tomas de uso doméstico y tratándose de tomas de uso no doméstico sin perjuicio del pago de la reparación del desperfecto causado;

IV .A quien omita solicitar la instalación o renovación de su medidor en los términos de las leyes aplicables, destruya, altere o inutilice los aparatos medidores o sus aditamentos o viole los sellos de los mismos;

V. Para los efectos de esta fracción, se considera alteración, entre otros supuestos, el hecho de que se coloque cualquier dispositivo que impida medir correctamente el consumo de agua. Se presume que la alteración es accidental cuando el contribuyente lo comunique a las autoridades fiscales en el bimestre siguiente a aquél en que ocurra, salvo prueba en contrario;

VI. Por derramar o arrojar o depositar azolve, cascajo, concreto o cualquier desecho sólido susceptible de sedimentarse y obstruir los conductos, coladeras, pozos, lumbreras y demás accesorios de la red de drenaje en la vía pública sin la autorización correspondiente;

A quienes practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o modificaciones de tomas para el abastecimiento de agua potable o agua residual tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable;

VII. El que por sí o por interpósita persona se reconecte al servicio hidráulico y se encuentre éste restringido o suspendido, ya sea en el cuadro donde se aloja el medidor o en la tubería que se encuentra en la vía pública, retire el engomado, rompa el sello o abra la válvula del lugar donde se ejecutó la restricción o suspensión; y

VIII. A quienes desperdicien el agua tratándose de uso doméstico.

Al responsable de las conductas descritas en las fracciones I, II, III y VI se le sancionará con una pena de dos a siete años de prisión y multa de cuarenta a cien Unidades de Medida y Actualización.

Al responsable de las conductas descritas en las fracciones IV, V, VII y VIII se le sancionará con una pena de tres días a cinco años de prisión y multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización.

Cuando en la comisión de las conductas señaladas en el presente artículo haya participado algún servidor público se aumentará hasta tres cuartas partes de la pena impuesta, así como destitución e inhabilitación del cargo por el mismo plazo de la pena.

SEGUNDO.- Se reforma por modificación el primer párrafo del artículo 32; el artículo 34; el artículo 57; el artículo 58; se adiciona la fracción X recorriendo la subsecuente a la fracción XI del artículo 21; al Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 21.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. a IX. (...)

X.- Presentar por parte de los miembros de la Comisión, las denuncias que correspondan ante autoridades competentes cuando, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de actos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa en materia de aguas o a las leyes penales.

XI. Las demás que ésta u otras leyes le confieran.

ARTÍCULO. 32.- Cualquier modificación que se pretenda hacer en el inmueble, giro o establecimiento que afecte a las instalaciones de los

servicios de agua y drenaje sanitario, obliga a los interesados **a dar aviso al prestador de servicios dentro de los diez días siguientes a la fecha de realizadas las manifestaciones citadas. De igual manera los interesados deberán formular la solicitud correspondiente anexando la documentación respectiva** y efectuar el pago ante el responsable de prestar los servicios.

(...)

ARTÍCULO. 34.- Las personas físicas o morales, fraccionadoras o urbanizadoras deberán tramitar ante el organismo operador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red

general de agua potable, drenaje sanitario **e hidrantes contra incendio.** Una vez obtenido, y satisfechos los demás requisitos que determine la autoridad competente conforme a los ordenamientos jurídicos que rigen el desarrollo urbano, deberán construir por su cuenta las instalaciones internas y conexiones de agua potable y drenaje sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las obras de infraestructura que en su caso se requieran, cuyo costo el interesado podrá derramar entre el área beneficiada en los términos del reglamento de esta Ley, salvo cuando el servicio sea operado por un concesionario quien tendrá las obligaciones inherentes al contrato de concesión. Las instalaciones mencionadas pasarán al dominio público para que se integren al patrimonio del organismo público operador que tenga a su cargo la operación y administración del servicio.

ARTÍCULO 57.- Para los efectos de esta Ley cometen infracción:

I. Las personas que incumplan la obligación de solicitar el servicio de agua y la instalación necesaria para efectuar las descargas correspondientes, en las condiciones establecidas en esta Ley, así como las que impidan el examen de los aparatos medidores o la práctica de las visitas de inspección.

II. Las personas que utilicen el agua potable para usos no autorizados.

III.- Las personas que causen desperfectos en un aparato medidor, alteren o dañen tubería o accesorio reductor que instale el Organismo Operador.

IV.Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización ejecuten, por sí o por interpósita persona, derivaciones de agua y conexiones al alcantarillado, o que instalen en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema, así como quienes utilicen los servicios de agua potable y drenaje sanitario de manera clandestina.

V. Las personas que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los medidores.

VI. El que por sí o por interpósita persona retire un medidor sin estar autorizado, o varíe su colocación de manera transitoria o definitiva.

VII. El que descargue aguas pluviales en la red de drenaje sanitario.

VIII. Las personas que descarguen aguas residuales en las redes de alcantarillado sin contar con el permiso de descarga correspondiente, o si teniéndolo no cumplen con las normas técnicas oficiales o condiciones de descargas establecidas conforme a la ley.

IX. El que dañe intencionalmente cualquier instalación propiedad de los organismos operadores.

X. Quien descargue a la red de alcantarillado materias sólidas que puedan obstruirla y substancias que por su composición química sean corrosivas, explosivas, tóxicas, o de cualquier manera peligrosas, y puedan, directa o indirectamente, perjudicarla, alterar la naturaleza del afluente o afectar los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

XI. Las personas que impidan la instalación de los servicios de agua y alcantarillado.

XII. Las personas que empleen mecanismos para extraer en forma ilegal agua de las tuberías de distribución.

XIII.- El que utilice el servicio de los hidrantes públicos para destinarlo a usos distintos a los de su objeto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el prestador de servicios conforme al artículo 34 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

XIV. Los que desperdicien o hagan uso inadecuado del agua.

Lo anterior sin perjuicio de que las infracciones antes señaladas puedan constituir un delito, en cuyo caso se estará a las sanciones penales relativas, además de la reparación del daño causado, considerándose en su caso, el pago de los servicios utilizados.

ARTÍCULO 58.- Las infracciones a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas administrativamente a juicio del organismo operador respectivo, conforme a lo siguiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables:

Fracción	Conducta	Sanción
I	Las personas que incumplan la obligación de solicitar el servicio de agua y la instalación necesaria para efectuar las descargas correspondientes, en las condiciones establecidas en esta Ley, asi como las que impidan el examen de los aparatos medidores o la práctica de las visitas de inspección.	**8 a 20 UMAS**
II	Las personas que utilicen el agua potable para usos no autorizados.	**10 a 200 UMAS**
III	Las personas que causen desperfectos en un aparato medidor, **alteren o dañen tubería o accesorio reductor que instale el Organismo Operador.**	**15 a 100 UMAS**
IV	Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización ejecuten por sí o por interpósita persona, derivaciones de agua y conexiones al alcantarillado, o que instalen en	**100 a 1000 UMAS**

	forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema, así como quienes utilicen los servicios de agua potable y drenaje sanitario de manera clandestina.	
V	Las personas que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los medidores.	20 a 100 UMAS
VI	El que por sí o por interpósita persona retire un medidor sin estar autorizado, o varíe su colocación de manera transitoria o definitiva.	20 a 100 UMAS
VII	El que descargue aguas pluviales en la red de drenaje sanitario.	20 a 50 UMAS
VIII	Las personas que descarguen aguas residuales en las redes de alcantarillado sin contar con el permiso de descarga correspondiente, o si teniéndolo no cumplen con las normas técnicas oficiales o condiciones de descargas establecidas conforme a la ley	50 a 500 UMAS
IX	El que dañe intencionalmente cualquier instalación propiedad de los organismos operadores.	50 a 100 UMAS

X	Quien descargue a la red de alcantarillado materias sólidas que puedan obstruirla y substancias que por su composición química sean corrosivas, explosivas, tóxicas, o de cualquier manera peligrosas, y puedan, directa o indirectamente, perjudicarla, alterar la naturaleza del afluente o afectar los procesos de tratamiento de las aguas residuales.	**100 a 500 UMAS**
XI	Las personas que impidan la instalación de los servicios de agua y alcantarillado.	**100 a 500 UMAS**
XII	Las personas que empleen mecanismos para extraer en forma ilegal agua de las tuberías de distribución.	**500 a 1000 UMAS**
XIII	El que utilice el servicio de los hidrantes públicos para destinarlo a usos distintos a los de su objeto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el prestador de servicios conforme al artículo 34 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.	**200 a 500 UMAS**
XIV	Los que desperdicien o hagan uso inadecuado del agua.	100 a 1000 UMAS

Cuando constituyan un delito los hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley y reglamentos, se formulará denuncia o querella según corresponda, ante las autoridades competentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que procedan.

En los casos del servicio público concesionado, los concesionarios no podrán determinar no aplicar sanción alguna. La infracción correspondiente deberá informarse a la autoridad Estatal o Municipal competente y ésta determinará e impondrá la sanción que proceda.

Las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas.

Cuando el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y si es trabajador no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las autoridades administrativas competentes deberán adecuar su reglamento respectivo en un plazo no mayor a 90 días naturales a la entrada vigor del presente decreto.
TERCERO- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo señalado dentro del presente Decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

24 SEP 2021
17:46

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN [redacted]

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] para oír y recibir notificaciones en [redacted] 4 para recibir llamadas relacionadas con el [redacted] [redacted] las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: *MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY VÍCTIMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,* al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, bajo el expediente 12990, iniciado en sesión en fecha 29 de octubre de 2019 y turnado a la comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, mismo que fue dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la fracción cuarta del artículo 19 apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se señala como de uno de los derechos de la víctima o del ofendido, el que se repare el daño, en los casos en que sea procedente, siendo que el Ministerio Público estará obligado a solicitarla, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda hacer directamente, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, señalándose además que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en la materia.

La Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de diciembre de 2013 señala en su Artículo 3 que las leyes de aplicación estatal que protejan a víctimas se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

Proponemos que se establezca que además de los mecanismos establecidos dentro de la propia Ley de Víctimas del Estado para el acceso al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado la autoridad jurisdiccional pueda decretar recursos a favor de la víctima, a través de la tramitación del incidente correspondiente.

La reforma planteada permitirá a las víctimas el acceso a un fondo para su protección, reduciendo obstáculos para obtener los recursos necesarios para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral.

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se propone la adición del Artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Articulo 3...

Ademas de los mecanismos contemplados en la presente ley, para el acceso al fondo de atención , auxilio y protección a las victimas del estado, lo podrá decretar la autoridad jurisdiccional a favor de la victima , a través del incidente que se tramite dentro de la propia causa penal.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente decreto.

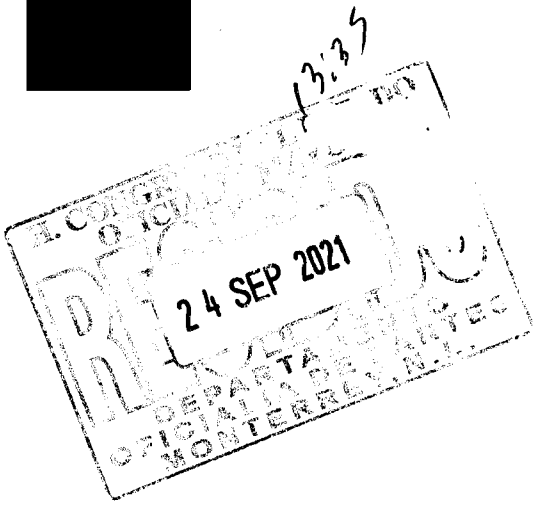
Atentamente.

Monterrey Nuevo Leon 06 de septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enriquez Hernandez.

[redacted]



329

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION A LAS FRACCIONES VII, IX Y ADICION DE UNA FRACCION X AL ARTICULO 17, Y MODIFICACION AL ARTICULO 19 DE LA LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, TURNANDOSE CON CARÁCTER DE URGENTE.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 12540/L:XXV, presentada en sesion: 19 de marzo del 2019 y turnada a la comisión de: Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por "víctimas" a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.

El tema de los derechos fundamentales de las víctimas del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos revisten especial importancia, sobre todo por el fuerte reclamo que la sociedad mexicana expresa diariamente derivado de la inseguridad pública que prevalece en nuestro país. Si bien durante mucho tiempo, las víctimas han permanecido ausentes de la mesa de debates, hoy se está produciendo un acelerado reposicionamiento en torno a la protección de sus derechos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En nuestro país los derechos de las víctimas han recorrido un largo trayecto hacia su pleno reconocimiento por parte del orden jurídico mexicano, pasando desde diversas modificaciones a la Constitución y a leyes federales.

De 1993 que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito hasta la inclusión en 2008 de un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se ha venido

construyendo una sólida base constitucional que reconoce y protege los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

La reforma constitucional ha originado la adecuación del marco legislativo y reglamentario en el tema, la más reciente es la expedición en enero de 2013, producto del impulso de organizaciones sociales y familiares de víctimas, de la Ley General de Víctimas, instrumento que recoge los estándares internacionales en la materia y prevé la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del ámbito federal, estatal, y municipal, organismos autónomos, así como organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas.

De esta forma se les reconoce el mismo nivel de jerarquía e importancia a los derechos del inculpado como los derechos de las víctimas del delito. De ninguna manera el sistema debe estar diseñado o permitir dejar a las víctimas sin justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su informe "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas" que "el concepto de "acceso a la justicia" se define como el acceso de jure y de tacto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad parámetros internacionales de derechos humanos.

Dicha Comisión ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos ***para investigar, sancionar***

yreparar las violaciones denunciadas. ... una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad."

Es de hacer notar, que el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sigue siendo muy limitado, a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional e internacional. Por lo que en muchas ocasiones, niñas y mujeres se ven obstaculizadas para ejercer sus derechos fundamentales debido al desconocimiento por parte del personal médico del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de interrupción del embarazo es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas y de incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley.

Asimismo, a sabiendas de que existen protocolos que imponen la obligación de prestar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sexual, existe personal de salud que antepone sus creencias religiosas o morales por encima de los derechos humanos de niñas y mujeres.

Muchas mujeres, frecuentemente han sufrido el maltrato y la revictimización por parte tanto del personal de salud como ministerial que consideran estar facultados para castigar y humillar a las mujeres que no cumplen desde su perspectiva con el mandato de género que

indica que, antes que otra cosa, las mujeres deben ser madres.

Es urgente que las autoridades de salud, de procuración e impartición de justicia apliquen la normativa vigente en materia de acceso a servicios de interrupción del embarazo por violación sexual y así garanticen los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la vida privada, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia.

Actualmente la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, no se encuentra armonizada con la Ley General de Víctimas, ya que no prevé expresamente la obligación de incluir los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima; así como que a toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantice el acceso a los servicios de *anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo* en los casos permitidos por la ley.

Como se observa a continuación:

Ley General de Víctimas	Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León
Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en	Artículo 17.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
I a VI	I a VI

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica psiquiátricamente;	VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la violación a sus Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica Q psiquiátrica mente;
IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima.	IX. Servicios gue se 12revean en la Le General de Víctimas en la 12resente Le
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.	

Ley General de Víctimas	Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León
Articulo 35	Articulo 19
A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de *anticonce ?_c/ón de emergencia*	A toda víctima de violación o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de la 12rofilaxis 120st ex12osición 12ara
de interrul?_ción voluntaria del embarazo en los	Virus de Inmunodeficiencia Humana y aquellos
casos permitidos por la ley	que se contemplen y prevean de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Víctimas y lo previsto en la presente Ley

Por ello, es necesario armonizar nuestra legislación con la norma general y dejar expresamente establecido que el Ministerio Público, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, acordará la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea resultado de una violación, siempre que previamente haya sido denunciado dicho delito; conforme a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Como se propone a continuación:

Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León	Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 17.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: I a VI... VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la violación a sus Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica o psiquiátricamente; VIII... IX. Servicios que se prevean en la Ley General de Víctimas y en la presente Ley	Artículo 17.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: I a VI... VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente; VIII... IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.
Articulo 19.- A toda víctima de violación o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de la profilaxis post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana y aquellos que se contemplen y prevean de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Víctimas y lo previsto en la presente Ley	Artículo 19.- A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

	El Ministerio Público, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, acordará la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea resultado de una violación, siempre que previamente haya sido denunciado dicho delito; conforme a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

TERCERO.- Que en la Recomendación General 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés), reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades.

CUARTO.- Que el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres establece

que los Estados se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

QUINTO.- Que el Artículo 30, fracción IX de la Ley General de Víctimas establece que los servicios de emergencia médica, odontológica, qU1rurg1ca y hospitalaria consistirán en servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima.

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por modificación a las fracciones VII, IX y adición de una fracción X al artículo 17, y modificación al artículo 19 de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I a VI...

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica **y/o**

psiquiátricamente;
VIII...

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

Artículo 19.- A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

El Ministerio Público, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, acordará la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea resultado de una violación, siempre que previamente haya sid denunciado dicho delito; conforme a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

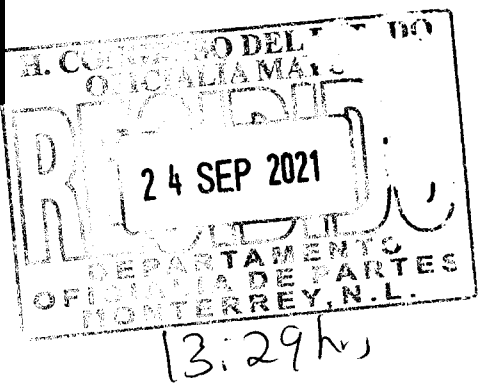
Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]



343

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman por modificación, la fracción IX del artículo 3, el tercer párrafo del artículo 27, el artículo 30, el artículo 32, el artículo 41, el artículo 46 primer párrafo y el artículo 48 segundo párrafo; y por derogación, los párrafos tercero, penúltimo y último del artículo 33, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.

- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del Panal y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa se identifica con el expediente 12792, iniciada en sesión el 7 de agosto del 2019 y turnada a comisión de justicia y seguridad pública.

Exposición de Motivos:

El 18 de julio de 2016, después de 51 días de que finalizara el plazo constitucional, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los decretos que contienen las denominadas "siete leyes" del Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que a continuación se enlistan:

- Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia anticorrupción.
- Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal
- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Para fines de la presente iniciativa, nos interesa destacar la entrada en vigor de la **Ley General de General de Responsabilidades Administrativas,** conocida también, como " **Ley 3 de 3",** la cual tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio del decreto correspondiente, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, en de los términos de lo previsto por dicho decreto.

No obstante la fecha establecida por este mandato constitucional para legislar al respecto, el pasado 15 de mayo de 2019- aproximadamente con dos años de retraso- la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado, aprobó la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León,** publicada en el Periódico Oficial del Estado, el siete de junio del año en curso.

Aunque la mayor parte del articulado de dicha ley se homologa con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; existen disposiciones que se apartan de ésta; sin el debido sustento constitucional, como más adelante se precisará.

Por ejemplo: la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, entre las sanciones para los servidores públicos por faltas graves y hechos de corrupción, incluye la "inhabilitación definitiva "o **muerte civil,** para desempeñar empleos, cargos en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras públicas.

La misma sanción se establece en el caso de particulares, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas o cualquier cargo como servidor público en el estado o municipios de Nuevo León.

Otra de las novedades de la ley, es que **el artículo 32 obliga a los particulares a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, cuando sean contratados para proporcionar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público,** en los siguientes términos:

"Artículo 32.- *Todos los Servidores Públicos,* **persona física o moral comprendiendo a éstas últimas a los socios, accionistas o propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público,** *estarán obligados* a *presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contratarla* o *respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.* ***Estarán exentos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, los accionistas de una persona moral cuando los mismos sean tenedores de acciones públicas en caso de que la persona moral cotice en bolsa de valores, excepto cuando los mismos formen parte de un órgano de decisión o sea representante legal de una persona morar.*** (Énfasis propio)

Esta disposición generó inconformidades entre el sector privado de Nuevo León, activistas sociales, medios de comunicación y académicos, por contradecir lo preceptuado por el mismo artículo 32, de la **Ley General de Responsabilidades Administrativas,** vigente, que a la letra dice:

"Artículo 32. *Estarán obligados* a *presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías* o *su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo,*

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia".

Resulta pertinente mencionar que el texto del referido artículo se modificó sustancialmente del originalmente aprobado por el H. Congreso de la Unión.

Al respecto, el 15 y 16 de junio de 2016, el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobaron respectivamente, entre otros decretos, el que contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el artículo 32, redactado en los siguientes términos:

"Artículo 32. Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley:

a) Los servidores públicos;

b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios;

e) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.

Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Los particulares deberán presentar las declaraciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, ante el órgano interno de control del Ente Público que le haya asignado los recursos o con el que haya contratado".

La Cámara de Diputados remitió el decreto correspondiente, al presidente de la república, para entrada en vigencia, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Desde un principio el artículo 32 causó controversia; ya que de acuerdo con el inciso b), los becarios del gobierno, beneficiarios de programas de combate a la pobreza, profesores de universidades públicas, o cualquier persona que recibiera dinero del gobierno, tendría que presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal; lo que se consideró una disposición impráctica, difícil de cumplir.

Además, la medida afectaba a los empresarios, ya que todas las empresas que contrataran con el gobierno también debían entregar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

El 23 de junio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto después de reunirse con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Menéndez, en ejercicio de sus facultades constitucionales, devolvió al Congreso de la Unión con observaciones, el decreto que contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exclusivamente respecto de los artículos 3 fracción VIII,4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 37,46, 73, y 81. Por lo que solicitó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un período extraordinario para solventar las observaciones

El cinco de julio de 2016, en período extraordinario, el Senado de la República con 80 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, aprobó en lo general y en lo particular, modificaciones a los artículos antes mencionados.

Del artículo 32 se eliminó la obligación de la persona física o moral, de presentar su declaración patrimonial y de intereses, al considerar que la obligación impuesta a los particulares para presentar declaración patrimonial y de intereses resulta "innecesaria".

Lo anterior, debido a "que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción".

El dictamen, presentado por las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, menciona que de no modificarse los artículos observados se aplicaría dicha obligación, de manera discriminada a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que presten servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.

Adicionalmente, se puntualiza que la obligación de presentar la situación patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, lo que pondría en riesgo, otros derechos como la vida, la seguridad y la libertad personal.

La Minuta correspondiente se remitió a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

El seis de julio de 2016, la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones, el dictamen sobre la Minuta, presentado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por lo que el artículo 32, se mantuvo en los términos aprobados por el senado.

Como se observa de esta breve relatoría, el Congreso de la Unión resolvió el diferendo sobre el artículo 32 y demás relacionados, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin embargo, de manera antijurídica, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, incluyó en el artículo 32 y sus derivados, la obligación de los particulares de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, cuando contraten con el gobierno, lo que avivó innecesariamente, el diferendo.

Con el propósito de encontrar una salida legal a la problemática generada, **la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Nuevo León, propone homologar el artículo 32 de Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, y, en vía de consecuencia, reformar los artículos de la misma ley, sobre los que dicho artículo incide.**

Consideramos que los artículos 3, fracción IX, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 46 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, contradicen los artículos 1, 6, apartado A, fracción 11, 16, párrafo primero y segundo, y 108 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como los restantes relacionados con éste, que obliga a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, a los particulares, personas físicas y morales, comprendiendo dentro de éstas a

sus socios, accionistas, propietarios y representantes legales, contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, contradice lo preceptuado por los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que transcribimos en su parte conducente

"Art. 6.- *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial* o *administrativa, sino en el caso de que ataque* a *la moral, la vida privada* o *los derechos de terceros, provoque algún delito,* o *perturbe el orden público; ...*

(...)

11.- *La información que se refiere* a *la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes"* (Énfasis propio).

"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona. familia. domicilio. papeles o posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como *regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

Toda persona tiene derecho a *la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así* como a *manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción* a *los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas* o *para proteger los derechos de terceros.* (Énfasis propio)

De los párrafos subrayados, se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la vida privada, así como la protección de los datos personales; en consecuencia, el único legitimado para autorizar la difusión de sus datos personales es su titular. Aunque este derecho, como otros, no es absoluto, cualquier intervención deberá estar plenamente justificada, de lo contrario, resulta inconstitucional.

En esta tesitura, la declaración patrimonial y de intereses a cargo de particulares representa una intromisión injustificada a la vida privada y sus datos personales; aun suponiendo que éstas no se hicieran públicas, ya que se les obliga a manifestar ante las autoridades del Estado datos puntuales de su patrimonio, que no necesariamente se encuentran vinculadas con recursos públicos.

Si bien este precepto tiene como finalidad instaurar un mecanismo para prever e investigar actos de corrupción en que participen particulares y servidores públicos, a través del seguimiento y evaluación de la evolución patrimonial de personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con el Estado mexicano, esta obligación puede constituir una intromisión injustificada en la esfera jurídica de las personas físicas y morales, particularmente en su privacidad, ya que puede imponer una carga desmedida a los particulares que reciben recursos públicos, tanto directa, como indirectamente.

Perseguir un objetivo constitucional debe necesariamente, respetar otros derechos protegidos por la misma constitución, por lo que, la obligación de presentar declaraciones de situación

patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, lo que pone en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.

A mayor abundamiento, la declaración patrimonial y de intereses, resulta innecesaria, considerando que el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, previene que los particulares no intervengan en actos de corrupción:

Artículo 44. La Contratarla y los Órganos Internos de Control, observarán el protocolo de actuación que, en su caso, emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la Plataforma Digital Nacional y en el Sistema Estatal de Información a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia. (Énfasis propio)

Con este mismo propósito, existen las declaraciones fiscales, las revisiones de gabinete, las auditorías y el dictamen de estados financieros, medidas menos gravosas para el derecho a la protección de datos personales que no exponen la totalidad de la información; por lo que la intromisión en la esfera jurídica de los particulares es mayor del beneficio que se puede alcanzar con ella.

Consecuentemente, la disposición del artículo 32 en comento, así como los demás artículos correlacionados, contradice el derecho a la protección de los datos personales. y por ello, debe tildarse de inconstitucional.

Adicionalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue, desde la denominación de su Título Cuarto, entre servidores públicos y particulares, al establecer como encabezado "De las responsabilidades de los **servidores públicos, particulares** vinculados con faltas administrativas graves y hechos de corrupción".

En este contexto, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, estableció en el párrafo quinto del artículo 108 constitucional, la obligación exclusiva, de los servidores públicos de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Para los particulares, se establecieron disposiciones especiales en el artículo 109 constitucional, fracciones III y IV.

Por ende, los particulares se encuentran en una situación distinta respecto de los servidores públicos y no es posible equipararlos con respecto a la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses.

En tal virtud, el artículo 32 y demás artículos alineados al mismo, carecen de asidero constitucional, ya que el Congreso del Estado se extralimitó en sus atribuciones, al igualar a los servidores públicos con los particulares.

Por otra parte, el artículo 32 y demás correlativos, trasgreden lo estipulado por el artículo 73 fracción XXIX-V, que alude a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que transcribimos a continuación:

"Artículo 73.- ***El Congreso tiene facultad:***

XXIX-V.- Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno ***para establecer las responsabilidades administrativas*** *de los servidores públicos,* ***sus obligaciones, las sanciones*** *aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran* ***y las que correspondan a los particulares*** *vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación."* (Énfasis propio)

Como se desprende de la lectura, **las obligaciones,** es decir, las cargas y deberes, **las responsabilidades,** que corresponden a las faltas administrativas, así como **las sanciones administrativas,** de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves, son materia exclusiva del Congreso de la Unión, a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo tanto, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado al establecer obligaciones adicionales no previstas en la Ley General, como es el caso de los particulares de su declaración patrimonial y de intereses, cuando contraten con los entes públicos, rebasa la disposición constitucional referida; por lo que resulta violatorio de la constitución federal y de paso. de la constitución local.

Demostrada por diversas vertientes, la inconstitucionalidad del artículo 32 y demás correlativos, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, mediante la presente iniciativa se propone su reforma.

Para mayor comprensión de la reforma se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Ahora bien, para reforzar la presente iniciativa, acudimos al derecho comparado, para visualizar la forma en que se homologó el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las leyes de responsabilidades administrativas de los estados y en la Ciudad de México.

El resultado de la investigación, se anexa en el siguiente cuadro comparativo:

COMPARATIVO, "LEY 3 DE 3", EN LOS ESTADOS

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León Dice:	Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León Se propone que diga
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: I.- a VII IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; X.- a XXVII.- ...	Artículo 3.- 1.- a VIII.-.... IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; X.- a XXVII.- ...
Artículo 27.- La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal, se almacenará en el Sistema Estatal de Información y en la Plataforma Digital Nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León. El Sistema Estatal de Información y la Plataforma Digital Nacional, contarán además.	Artículo 27.-...

con los sistemas de información específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su homóloga en el Estado. En el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal del Sistema Estatal de Información y de la Plataforma Digital Nacional, se inscribirán según correspondan, los datos públicos de los Servidores Públicos o particulares señalados en el artículo 32 del presente ordenamiento, obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. En el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del SistemaNacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o articulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves o hechos de corrupción en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley. Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados del Sistema Estatal de Información y de la Plataforma Digital	En el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal del Sistema Estatal de Información y de la Plataforma Digital Nacional, se inscribirán según correspondan, los datos públicos de los Servidores Públicos o particulares señalados en el artículo 32 del presente ordenamiento, obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos

Nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas	
Artículo 30. La Contraloría y los Organos Internos de Control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos y de particulares relacionados con el servicio público. De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación el servicio público. De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.	Artículo 30. La Contraloría y los Organos Internos de Control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos y de particulares relacionados con el servicio público. De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación el servicio público. De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.
Artículo 32. Todos los Servidores Públicos, persona física o moral comprendiendo a estas últimas a los socios, accionistas, propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. Estarán exentos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, los mismos sean tenedores de acciones públicas en caso de que la persona moral cotice en bolsa de valores, excepto	Artículo 32. Todos los Servidores Públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o su respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

cuando los mismos formen parte de un órgano de decisión...	
Artículo 33.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del: a) Ingreso al servicio publico por primera vez b) reingreso al servicio publico después de sesenta días naturales de la conclusión de su ultimo encargo: II.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año. III. Declaración de conclusión del encargo dentro de los sesenta días naturales a la conclusión. En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. Los participantes señalados en el articulo 32 de la presente Ley, deberán presentar las declaraciones señaladas en el presente articulo, entregando la declaración patrimonial inicial, de intereses y constancia de presentación y declaración fiscal, al menos quince días hábiles anteriores a la fecha en la cual se firme el correspondiente contrato y la declaración de modificación patrimonial, así como la de conclusión de encargo en los mismos plazos señalados en la fracción II y III de este articulo La Contraloría o los Organos internos de control según corresponda, podrán solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración de impuestos sobre la renta	Artículo 33.-... I.- a).- b).- II.- III.- DERROGADO

del año que corresponda, si estos estuvieran obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud Si transcurridos los plazos a que se refieren las ... fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión del Servidor Público en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubierenotificado el requerimiento al declarante, la Contraloría o los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. Para el caso de omisión, sin causa justificada en la presentación de la declaración a que	

se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad ... administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Sexto de esta Ley. Tratándose de los particulares señalados en el artículo 32 de la presente Ley, cuando el incumplimiento sea a la fracción I de este artículo, así como a la presentación de las declaraciones de intereses y fiscal, la Contraloría u Órgano Interno de Control.	
Artículo 41. La Contraloría y los Organos internosde control, según corresponda, deberán formular la denuncia ante el Ministerio Público respectivo, en su caso el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia licita del incremento notoriamente desproporcionado de este representado por bienes o de aquellos que sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de gestión de su empleo, cargo o comisión.	Artículo 41. La Contraloría y los Organos internos de control, según corresponda, deberán formular la denuncia ante el Ministerio Público respectivo, en su caso el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia licita del incremento notoriamente desproporcionado de este representado por bienes o de aquellos que sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de gestión de su empleo, cargo o comisión.
Artículo 46. Se encuentran obligados a declaración de bienes de intereses, todos los Servidores Públicos, en teminos de esta ley. Al efecto, la Contraloría y los órganos de control interno se encargaran de que las declaraciones sean integradas al Sistema de Evolución Patrimonial de declaración de	

intereses y constancia de presentación de normas y los formatos impresos de medio magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los sujetos obligados deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el artículo 29 de esta ley. La declaración de intereses, deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para incumplimiento de dichos plazos. También, deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público particulares señalados en el artículo 32 de presente ordenamiento, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.	La declaración de intereses, deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para incumplimiento de dichos plazos. También, deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público particulares señalados en el artículo 32 de presente ordenamiento, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

COMPARATIVO, "LEY 3 DE 3", EN LOS ESTADOS

Estado:	Artículo:
Aguascalientes	Artículo 33.- Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. Al efecto, la Secretaría y los órganos internos de control de los entes públicos se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
Baja California Norte	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, y ante la Secretaría, Sindicaturas o su respectivo Organo interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que dispanga la legislación de la materia.
Baja California Sur	Artículo 32. Estaran obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, y ante la Secretaría, Sindicaturas o su respectivo

	Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Chiapas	**Artículo 32.** Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría o su respectivo órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Chihuahua	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaracione situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verc ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, t los Servidores Públicos, en los términos previstos en la preE Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, e términos que disponga la legislación de la materia".
Coahuila	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaracione situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verc ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, t los Servidores Públicos, en los términos previstos en la preE Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, e términos que disponga la legislación de la materia".
Ciudad de México	**Artículo 32.** Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Estado de México	Artículo 33. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, todos los servidores públicos estatales y municipales, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Guanajuato	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la

	control, a través del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley.
Morelos	Artículo 34. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Organo interno de control, todos los Servidores Públicos, en los revistos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia
Nayarit	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Nuevo León	Artículo 32.- Todos los Servidores Públicos, persona física o moral comprendiendo a éstas últimas a los socios, accionistas o propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. Estarán exentos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, los accionistas de una persona moral cuando los mismos sean tenedores de acciones públicas en caso de que la persona moral cotice en bolsa de valores, excepto cuando los mismos formen parte de un órgano de decisión o sea representante legal de una persona moral.

Oaxaca	**Artículo 30.** Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley y la Ley General. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Puebla	**Artículo 32.** Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su

	declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Querétaro	**Artículo 32. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos, que deban presentar la declaración patrimonial en términos de la Ley General, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.**
Quintana Roo	**Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o los Organos Internos de Control, todos los servidores públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.**
San Luis Potosí	ARTICULO 32. Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de patrimonial y de intereses ante las contralorías u órganos internos de control, todos los servidores públicos, en los términos previstos por esta Ley, así como las personas que en términos del artículo 4° fracción IV de este Ordenamiento integren o conformen los patronatos, comités o afines a los que aluden los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Sonora	**Artículo 33.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.**

Tamaulipas	Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Contraloría, o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Tlaxcala	Artículo 29. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Contraloría del Ejecutivo o su respectivo Órgano de control interno, todos los Servidores Públicos con puestos de dirección o atribuciones de mando, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Veracruz	Artículo 32. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar declaración patrimonial en términos de la Ley General, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Yucatán	Artículo 29. Sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de interés Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad todos los servidores públicos, las Autoridades a que se hacen referencia en al artículo anterior a la que se encuentren adscritos, en los términos previstos en la Ley General y la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Como se observa, con excepción de Nuevo León, en todas las leyes de responsabilidades administrativas de los estados y la de la Ciudad de México, que consultamos, los únicos obligados a presentar su "3 de 3", son los servidores públicos, en armonía con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo tanto, el cuadro comparativo jurídicamente refuerza el decreto de reforma que proponemos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

No escapa a una servidora que el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, fue objeto de amparos concedidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que establecen precedente para futuros amparos; que obligarán al Congreso del Estado, más temprano que tarde, a legislar en la materia.

Además, la **Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos** y el **Instituto Nacional de Acceso a la Información,** promovieron Acciones de Inconstitucionalidad, por separado, contra dicho artículo y demás relacionados; por lo que habrá que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo preocupante es que mientras se resuelven las acciones de inconstitucionalidad referidas, el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, quedará para mejor ocasión, porque, además, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, no termina por aprobar los formatos para las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; que serán los mismos, para los servidores públicos de los ámbitos federal y local.

Independientemente de lo anterior, considero que es mi obligación como legisladora, presentar esta iniciativa, para eliminar los visos de inconstitucionalidad del citado artículo y sus correlativos y con ello, reforzar el estado de derecho.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de manera más atenta a la presidencia del Congreso, dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente proyecto de:

Decreto:

Artículo único...- Se reforma por modificación, la fracción IX del artículo 3, el tercer párrafo del artículo 27, el artículo 30, el artículo 32, el artículo 41, el artículo 46 primer párrafo y el artículo 48 segundo párrafo; y por derogación, los párrafos tercero, penúltimo y último del artículo 33, de

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 3.-...

1.- a VIII.- ....

IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;

X.- a XXVII.- ...

Artículo 27.-...

En el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal del Sistema Estatal de Información y de la Plataforma Digital Nacional, se inscribirán según correspondan, los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

Artículo 30.- La Contraloría y los Órganos Internos de Control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía, expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.

Artículo 32. Todos los Servidores Públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o su respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia

Artículo 33.-...

I.-...

a). -...

b). -...

11.-...

111.-...

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

Derogado.

La Contraloría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión del Servidor Público en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, la Contraloría o los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción 111 de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Sexto de esta Ley.

Derogado

Derogado

Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos, en términos de esta Ley.

Artículo 48.- ....

La declaración de intereses, deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También, deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés

Transitorio:

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

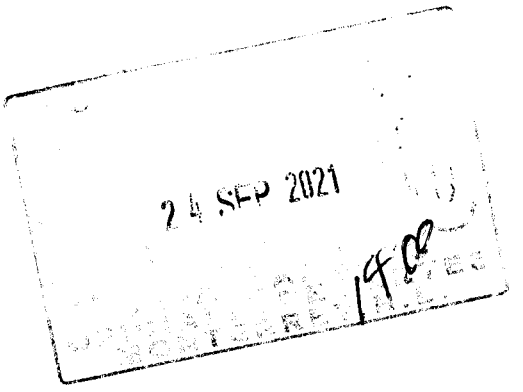
Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]





DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

363

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 198 BIS 113 Y ADICION DE UN CAPITULO CUARTO BIS DENOMINADO "BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL" EN EL TITULO NOVENO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Articulo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*

Articulo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Articulo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Articulo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Articulo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. Grupo legislativo del PRI y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2020; Expediente: 13350/LXXV

PROMOVENTE: DIP. ALVARO IBARRA HINOJOSA, E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 198 BIS 13 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO CUARTO BIS DENOMINADO "BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, EN EL TITULO NOVENO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 19 de febrero del 2020

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inseguridad, es una constante no sólo en nuestro Estado, sino en todo el territorio nacional, las personas tienen miedo de salir a las calles y que sean asaltadas, robadas, violentadas en su persona, o incluso secuestradas. Estas olas de violencia se han extendido como ya lo mencioné en todo el territorio nacional.

Ante esta situación grave, se han realizado muchas acciones por parte de los diversos órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, como municipal, para el combate ante tal inseguridad. Se ha apostado a mejoras legislativas, a equipamiento para la reacción policial, a la tecnología, apostando por las cámaras de vigilancia, softwares, y en algunos casos, como es el de nuestro Estado, hasta drones.

Sin embargo, y aunque esto ha generado un cierto resultado, estos no son los más óptimos. Desde mi punto de vista, no se ha apostado por lo más importante, que son Nuestros policías, el recurso humano, quien es el que verdaderamente se encargan de cuidar y velar por nuestra seguridad.

A ellos, no les hemos apostado, cuando son la materia principal que forma la seguridad pública. Ellos conviven en el día a día con la sociedad, de ellos depende directamente la seguridad, son lo que arriesgan sus vidas, sus patrimonios e incluso sus familias en el desempeño de su deber, y la verdad es que sufren injusticias, falta de compromiso por parte de los Estados, una pobre carrera profesional, una deficiente estabilidad laboral, que no permiten que desempeñen adecuadamente su función.

Como ejemplo, puedo hablar del caso del artículo 123 apartado b, fracción XIII de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece, la imposibilidad de que un

miembro de una institución policial, un perito o ministerio público, pueda ser reinstalado y que sólo tendrá derecho a una indemnización, aunque se demuestre que fue despedido injustificadamente, lo cual me permitiré reproducir de manera textual:

Artículo 123.- ...
a...
b...

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si *la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.[..]*

.[..]
Subrayado propio

Como este ejemplo, que me permito establecer, en el que se puede observar claramente el trato diferenciado que se les da a nuestros policías no sólo del Estado sino del país, podemos encontrar muchas otras situaciones ya de manera particular, en el que algunos municipios, no les dan ni la mínima seguridad social, que les permitan cubrir con sus necesidades básicas. Entonces como queremos que un policía se sienta seguro de su trabajo y cómo podemos evitar que el policía se vea expuesto a recibir un poco más de dinero por parte del crimen organizado.

Siempre lo he dicho, y lo seguiré repitiendo, hay que dignificar al policía, sin este material humano, de nada sirve el armamento, equipamiento o tecnología con la que pueda contar una corporación, que el policía se sienta identificado y orgulloso de pertenecer a su institución, que se le brinde la seguridad social conforme al riesgo que representa su empleo.

Que tengan un esquema de seguridad social, un empleo bien remunerado, con estabilidad laboral que le permita sentirse seguro, para realizar su labor de manera adecuada, hay en nuestras corporaciones, policías que aman su trabajo, sólo falta incentivarlos, de esa manera vamos a mejorar radicalmente nuestra seguridad pública del Estado.

Esta situación está contemplada incluso en el espíritu del legislador permanente quien en el artículo 123 apartado b fracción XIII tercer párrafo, establece la necesidad de que en la Entidades Federativas se contemplen sistemas complementarios de seguridad social que les permitan a los cuerpos de policías, peritos y ministerios públicos, desarrollar su trabajo con decoro y profesionalismo, lo cual, me permitiré reproducir para mayor abundamiento:

Artículo 123.- ...

A.- ...

B.- ...

XIII.-

.[..]

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

.[..]

Subrayado propio

Esta situación, se complementa en el artículo 45 de la Ley Nacional del Sistema, que establece:

Artículo 45.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como podemos observar, es necesario establecer un régimen complementario de seguridad social, que permita abonar en el crecimiento y fortalecimiento de la seguridad social de nuestros policías.

En este sentido, en nuestro Estado, las situaciones previstas de seguridad social para los policías, son las mismas que para cualquier servidor público, y aunque en algunos municipios tengan algunas mejoras en este rubro, en la mayoría sólo reciben lo que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y estoy completamente seguro que, en algunos municipios, incluso ni con eso.

Por ello, en aras de abonar al mejoramiento de las condiciones de trabajo en las que se desempeñan nuestros policías del Estado y los municipios, es que propongo establecer en la Ley de Seguridad Pública del Estado, que se establezca un capítulo de beneficios complementarios de seguridad social que permitan la dignificación de los policías de las diversas corporaciones que existen en el Estado.

Dentro de dichos beneficios adicionales, propongo que se otorguen a todos los policías del Estado, de cualquier corporación ya sea del Estado o de los municipios, además de las prestaciones a las que tienen derecho, las siguientes:

- Disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado;
- Una compensación por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado;
- Recibir pases de acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, culturales y deportivas, derivado de la Celebración de Convenios con personas del sector público, social y privado que realicen las instituciones y corporaciones de policías. En estos casos, las áreas de recursos humanos en las Instituciones darán a conocer los beneficios respectivos, por lo menos cada seis meses;
- Por cada día de servicio se podrá conferir a los integrantes de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, una ayuda para peajes, cuyo monto diario será de por lo menos , del diez porciento del salario munimo general vigente en el Estado.
- Disfrutar de becas y créditos de educación o capacitación científica o tecnológica para sus descendientes, con base en los recursos presupuestales disponibles por cada Institución o de conformidad con los Convenios que al efecto se celebren;
- Ayuda para alimentación, por cada día de servicio, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo GeneralVigente en el Estado, y
- Cuando tengan hijos cursando la educación básica, al inicio de cada ciclo escolar, tendrán derecho a recibir una ayuda global anual para útiles escolares, cuyo monto mínimo será de siete días de Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

Con esta propuesta buscamos en primera instancia, acatar una disposición Constitucional, y, por otro lado, beneficiar a los policías de las diversas corporaciones de nuestro Estado, dignificar su trabajo, el cual es muy valioso para todos los Nuevo Leoneses.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se reforma el artículo 198 Bis 13 y se adiciona un capitulo cuarto bis denominado "BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL" en el TÍTULO NOVENO, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

CAPITULO CUARTO BIS

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 198 Bis 13.- El Ejecutivo del Estado, previo el cumplimiento de los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley, podrá otorgar:

I.- Una compensación adicional a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, que resulten lesionados o incapacitados para continuar prestando sus funciones habituales; en cuyo caso, de ser posible, se les destinará a realizar labores administrativas.

II.- De igual manera, en los términos que indique el Reglamento de esta Ley Cuando ocurra un deceso o incapacidad total permanente como causa directa del cumplimiento del deber, se podrá otorgar una casa de interés social a sus dependientes económicos, en caso de que no tengan una en propiedad, así como una compensación que cubra los gastos funerarios y becas para la educación de los hijos menores de edad.

Además de lo señalado en el párrafo anterior y de acuerdo con las posibilidades presupuestales del Estado y los municipios, se otorgará a los integrantes de las instituciones y corporaciones de policías, los siguientes beneficios:

I.- Disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado;

II. Una compensación por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado;

III. Recibir pases de acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, culturales y deportivas, derivado de la Celebración de Convenios con personas del sector público, social y privado que realicen las instituciones y corporaciones de policías. En estos casos, las áreas de recursos humanos en las Instituciones darán a conocer los beneficios respectivos, por lo menos cada seis meses;

IV.- Por cada día de servicio se podrá conferir a los integrantes de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, una ayuda para peajes, cuyo monto diario será de por lo menos , del diez porciento del salario munimo general vigente en el Estado

V.- Disfrutar de becas y créditos de educación o capacitación científica o tecnológica para sus descendientes, con base en los recursos presupuestales disponibles por cada Institución o de conformidad con los Convenios que al efecto se celebren;

VI.- Ayuda para alimentación, por cada día de servicio, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo GeneralVigente en el Estado, y

VII.- Cuando tengan hijos cursando la educación básica, al inicio de cada ciclo escolar, tendrán derecho a recibir una ayuda global anual para útiles escolares, cuyo monto mínimo será de siete días de Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

Atentamente

Monterrey Nuevo león 06 de Septiembre del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández.

[redacted]

14:12
24 SEP 2021

367

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar iniciativa de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.
Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.
Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.
Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:
Artículo 24. *Son atribuciones del presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*
Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la*

investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:
X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de secretarios técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...
***Artículo 51.** para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su presidente.*
***Artículo 53.** Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
***Artículo 54.** Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el presidente del Congreso.*
***Artículo 56.** Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*
No obstante, la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.
Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:
"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."
"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."
Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.
Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PANAL y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:
Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa se identifica bajo el Exp. 12282, iniciado en sesión el 14 de noviembre de 2018 y turnada a la comisión de Seguridad y Justicia

Exposición de Motivos

El 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la **Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.**

Dicha ley crea la Comisión Nacional de Búsqueda, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo principal de dar seguimiento a todos los casos; establece que cada entidad federativa deberá crear su propia Comisión Local de Búsqueda, la cual deberá coordinarse con la Comisión Nacional; obliga a la entonces Procuraduría General de la República, así como a las Fiscalías Generales de Justicia en los Estados, a crear Fiscalías Especializadas en la desaparición de personas; establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que contendrá la información aportada por autoridades federales y locales, y tendrá una versión pública que podrá consultarse por internet, entre otros puntos importantes que contiene el referido ordenamiento

Adicionalmente, se incluye la figura de la **Declaración Especial de Ausencia,** que tiene como propósito que se reconozca, proteja y garantice la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida; además, que se otorguen las medidas apropiadas con el fin de asegurar la protección más amplia de sus familiares, considerando que en la mayoría de los casos, la persona desaparecida representa el sostén del hogar.

Al respecto, La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mandató al Congreso de la Unión, así como a las entidades federativas a legislar en materia de declaración especial de ausencia, según se desprende del Artículo Noveno Transitorio del decreto, que nos permitimos transcribir.

"NOVENO.- El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de Jos siguientes ciento ochentas días siguientes a la fecha que entra en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capitulo no obstante lo previsto en la legislación aplicable".

En cumplimiento de esta disposición, el 26 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó la *Minuta* del Senado de la República, que contiene el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018, por la que se expide la **Ley Federal de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas** y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria.

Con relación al segundo párrafo del citado artículo transitorio, consideramos que el plazo de 180 días que se establece para que las Entidades Federativas armonicen la legislación que corresponda, deberá contabilizarse a partir de la publicación del decreto a que se refiere el párrafo anterior.

Ello es así, considerando que la Ley Federal de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, es consecuencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; ley aplicable al ámbito federal, por lo que únicamente al H. Congreso de la Unión puede expedir. Consecuentemente, las legislaturas de los Estados no tenían atribuciones para legislar en esta temática, antes de que lo hiciera el Congreso de la Unión.

Por otra parte, la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición se encontraba prevista desde la **Ley General de Víctimas,** publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 2013.

El artículo 25 último párrafo, de la referida ley, establece lo siguiente:

"Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leves aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar". (énfasis propio).

El Artículo Séptimo Transitorio de la mencionada ley, obligó a los Congresos de los Estados a legislar en la materia, conforme a la siguiente disposición:

"SÉPTIMO. - En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberá. armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley".

Los únicos estados que acataron el mandato fueron *Coahui/a, Nuevo León, Querétaro, Estado de México,* así como el *Distrito Federal, hoy Ciudad de México.*

En el ámbito local, la Septuagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado aprobó la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de mayo de 2015.

De acuerdo con el artículo 1 la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León, tiene por objeto: *"reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona, aun y cuando no se conozca la identidad del responsable y sin importar el resultado de las indagaciones al respecto".*

Consecuentemente, se presume que la persona desaparecida se encuentra viva hasta en tanto se conozca, más allá de toda duda, donde se encuentra o que le sucedió, con lo que dejan a salvo sus derechos y deberes jurídicos y con ello, se evita el desamparo de sus familiares.

La ley entre otras cosas, precisa quienes podrán solicitar la declaratoria de ausencia por desaparición y el plazo para interponerla; establece los requisitos de la solicitud, así como los supuestos para su aceptación o rechazo a cargo del juez; prevé dos tipos de actas por desaparición, una provisional y otra final, en la que se establecen los efectos de la declaratoria y como proceder cuando la persona desaparecida se localiza con vida.

Es importante mencionar que la citada ley. que consta de 30 artículos y un Artículo Transitorio. se elaboró y aprobó. para aplicarse durante un tiempo acotado. Es decir, hasta que el Congreso de la Unión legislara de manera exclusiva, en materia de desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 73 fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque la mencionada ley se encuentra vigente, existen diferencias de fondo, con la Ley Federal de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo de ambas leyes, respecto de algunos artículos comunes:

Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León:	Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas
ARTICULO 3.- DE LA INTERPRETACION DE ESTA LEY Esta Ley se interpretará de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
ARTICULO 8.- DE LOS SOLICITANTES Podrán ejercer la acción de Declaración de Ausencia por Desaparición las siguientes personas, en el orden planteado: (énfasis propio) I.- Cónyuge, concubina, concubina de la persona cuyo paradero se desconoce; II.- Descendientes de la persona cuyo paradero se desconoce, en caso de ser menores a través de un representante; III.- Ascendientes en línea recta en primer y segundo grado; IV.- Parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado; V.- El Ministerio Público, cuando de su investigación se desprenda que se está ante un caso de desaparición de persona y no existiere ninguna de las personas anteriores y VI.- Quien tenga interés jurídico ya sea para litigar o defender los derechos de la persona cuyo paradero se desconoce	Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y demás normativa aplicable. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará, de manera supletoria, la legislación en materia procesal civil aplicable.
	Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de prelación entre los solicitantes (énfasis propio)

	I.- Los Familiares; II.- La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable; III. Las personas que funjan como representantes legales de los Familiares; IV. El Ministerio Público a solicitud de los Familiares, y El Asesor Jurídico, quien, además, dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la resolución.
ARTICULO 10.- DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD Las personas señaladas en el artículo 8 podrán solicitar la declaración de ausencia, que incluirá lo siguiente: I.- El nombre, edad y domicilio del solicitante, así como documentos o información que acrediten el parentesco o relación con la persona cuyo paradero se desconoce II.- Toda aquella información con la que cuente al respecto de la persona cuyo paradero se desconoce, entre la que puede detallarse a) a) Nombre, domicilio, edad, estado civil de la persona cuyo paradero se desconoce; b) Generales de los hijos, en su caso; c) Nombre del cónyuge, concubina o pareja sentimental. d) Actividades de la persona cuyo paradero se desconoce. III.- Copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Publico, y en su caso, de la queja hecha ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la notificación ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Articulo 10.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la siguiente información: I.- El nombre, parentesco o relación de la Persona solicitante con la Persona Desaparecida y sus datos generales; II.- El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida III.- La denuncia presentada al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada o del reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde se narren los hechos de la desaparición IV.- La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga precisión sobre la fecha o el lugar bastará con la presunción que se tenga de esta información V.- El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida; VI.- La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y domicilio de su fuente de trabajo y si lo hubiere, datos del régimen de seguridad social al que pertenezca la Persona

A la solicitud se deberá acompañar los documentos con los cuales se acredite la relación o parentesco con la persona cuyo paradero se desconoce, y todos los demás documentos que quieran utilizar como prueba. Bastará la presentación de copias simples de los documentos mencionados. En todo caso, el solicitante, señalará bajo protesta de decir verdad el archivo donde se encuentren los originales a fin de que el juez mediante oficio los recabe.	Desaparecida. VII.- Los bienes o derechos de la Persona Desaparecida que desean ser protegidos o ejercidos; VIII. Los efectos que se solicita tenga la Declaración Especial de Ausencia en los términos del artículo 21; (énfasis propio) IX. Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Organo Jurisdiccional para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, y X.-Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los efectos de la Declaración Especial de Ausencia. Tratándose de la fracción VIII, el Organo Jurisdiccional no podrá interpretar que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia que se emitan serán exclusivamente en el sentido en que fue solicitado.
ARTICULO 14.- DEL ACUERDO A LA SOLICITUD Una vez recibida la solicitud de declaración de ausencia por desaparición, el juez competente, podrá admitirla, desecharla o requerir al solicitante para que en el plazo de tres días aclare, corrija o complete la solicitud a fin de que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 10 esta ley, de no hacerlo el solicitante, el juez repelerá de oficio la solicitud. (énfasis propio	Artículo 14.- El órgano Jurisdiccional que reciba La solicitud deberá admitirla en un lapso no mayor a cinco días naturales y verificar la información que le sea presentada (énfasis propio) Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el artículo 10 de esta ley, deberá hacerlo del conocimiento del órgano Jurisdiccional, a fin de que éste solicite, de manera oficiosa, la información a la autoridad, dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su poder; quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles para remitirla contados a partir de que reciba el requerimiento.
ARTICULO 23.- DE LOS EFECTOS DEL ACTA DEFINITIVA El Acta de Ausencia por Desaparición surtirá los siguientes efectos legales: I.- Nombrar a un representante de la persona cuyo paradero se desconoce quien podrá ser la persona que decida el Juez conforme a la regulación civil en materia de representación legal.	Artículo 21.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos: I.- El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte. II.- Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad, a través de quien pueda ejercer la patria

II.- Transferir la posesión definitiva del patrimonio de la persona cuyo paradero se desconoce al representante legal del mismo, conforme a la regulación del código civil;	potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;
III.- Nombrar a un tutor o representante, definitivo, para los menores de edad o incapaces que dependieran de la persona cuyo paradero se desconoce, conforme a lo estipulado en el Código Civil del Estado de Nuevo León; y	III.- Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad, en términos de la legislación civil aplicable;
IV.- Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los Municipios o entidades paraestatales, continúen gozando de los beneficios.	IV.- Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
El juez ordenará la inscripción de la persona cuyo paradero se desconoce en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas y en la ley local de la materia, en el caso de no haberse hecho previamente por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De igual forma, dará el aviso correspondiente al Registro Civil.	V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;
	VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen;
	VII. -. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida; Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;
	IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la Persona Desaparecida;
	X.- Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;
	XI.- La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;

	XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria. XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia; XIV.- Las que el órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso, y XV.- Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de derechos de los derechos de las víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos de la presente Ley.
ARTICULO 23.- DE LOS EFECTOS DEL ACTA DEFINITIVA El Acta de Ausencia por Desaparición surtirá los siguientes efectos legales: I.- Nombrar a un representante de la persona cuyo paradero se desconoce, quien podrá ser la persona que decida el Juez conforme a la regulación civil en materia de representación legal; II.- Transferir la posesión definitiva del patrimonio de la persona cuyo paradero se desconoce al representante legal del mismo, conforme a la regulación del código civil; III.- Nombrar a un tutor o representante, definitivo, para los menores de edad o incapaces que dependieran de la persona cuyo paradero se desconoce, conforme a lo estipulado en el Código Civil de Estado de Nuevo León; y IV.- Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los Municipios o entidades paraestatales, continúen gozando de los beneficios.	Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la Persona Desparecida en los siguientes términos: (énfasis propio) I.- Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto de que la víctima fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su centro de trabajo antes de la desaparición II.- Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable; III.- A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable, y IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas. La medida de protección prevista en la fracción del presente artículo se mantendrá hasta por cinco años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. Por lo que hace a lo previsto en las demás fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta a localización, con o sin vida, de la Persona

El juez ordenará la inscripción de la persona cuyo paradero se desconoce en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas y en la ley local de la materia, en el caso de no haberse hecho previamente por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De igual forma, dará el aviso correspondiente al Registro Civil. En ningún caso la obtención del Acta Provisional de Ausencia por Desaparición y del Acta de Ausencia por Desaparición, cesa la obligación de las autoridades correspondientes a continuar con su labor de investigación sobre el paradero de la persona cuya se desconoce. Se presume la vida de la persona cuyo paradero se desconoce, en tanto no se produzca su aparición con vida o sea confirmada su muerte. La declaración de ausencia por desaparición no suspende los términos que fija el Código Civil para la prescripción y tampoco surtirá efectos de prescripción penal	Desaparecida. Por lo que hace a las fracciones III y IV del presente artículo la Federación será la encargada de garantizar que dichas protecciones continúen, en términos de la legislación aplicable. Si la Persona Desaparecida laboraba al servicio de la federación, la Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborares en el mismo sentido que establece este artículo hasta su localización con o sin vida.

Como se desprende de la comparac1on de los diversos artículos, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, además de contar con mejor estructura, presenta una mejor redacción y sus disposiciones son de mayor contenido.

Por ello, en lugar de reformar la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza propone expedir una nueva ley, denominada Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo León, para homologarla con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Los puntos medulares de la ley que proponemos son los siguientes:

1.- El procedimiento de la declaración especial de ausencia no podrá exceder de seis meses a partir del inicio del procedimiento.

2.- Se reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida.

3.- Se presume que la persona se encuentra con vida.

3.- Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de reconocer la validez y los efectos de la declaración especial de ausencia, dictada por un juez civil.

4.- Se establece que cualquier persona con interés jurídico, además del Ministerio Público, por solicitud de los familiares. podrán solicitar la declaración especial de ausencia.

5.- El procedimiento de declaración especial de ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses en que se haya denunciado la desaparición.

6.- El juez que reciba la solicitud deberá admitirla en un plazo no mayor de cinco días naturales y verificar la información que le sea proporcionada.

7.- La resolución que dicte el juez sobre la declaración especial de ausencia incluirá los efectos y medidas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y los familiares.

8.- Se protegen los derechos laborales y de seguridad social de la persona, antes de ser víctima de desaparición por un acto delincuencia!.

9.- El juez dispondrá que los familiares nombren de común acuerdo, un representante legal, que administre los bienes de la persona desaparecida; en caso de no ponerse de acuerdo, el juez lo designará.

10.- En caso de que la persona desaparecida fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, y existen indicios de que fingió su desaparición para evadir responsabilidades, será sancionada en términos de la legislación aplicable, recobrando su bienes derechos y obligaciones,

Con esta nueva ley, damos cabal cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo Noveno Transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la interpretación antes mencionada

Finalmente, la importancia de la ley que proponemos aprobar, se refleja en que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) establecido en

la Ley General antes mencionada, en el país a junio de 2018, existen **37, 434 expedientes,** 40 por ciento más de lo reportado en 2014. Nuevo León ocupa el cuarto lugar con 2. 895 desaparecidos,

De aprobarse la iniciativa que proponemos, Nuevo León sería después del Estado de México, el segundo estado en contar con una legislación en esta materia.

Por lo antes expuesto, solicitamos de la manera más atenta a la presidencia del Congreso dictar el trámite legislativo que corresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente

Decreto

LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y tiene por objeto:

I. Establecer el procedimiento estatal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que esta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente;

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida;

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida; y

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares.

Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y demás disposiciones aplicables.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará, de manera supletoria, la legislación estatal aplicable en materia procesal civil.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. **Asesor Jurídico:** al Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

II. **Comisión Ejecutiva Estatal: a** la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

III. **Comisión Estatal de Búsqueda:** a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas;

IV. **Declaración Especial de Ausencia:** a la Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo León;

V. **Familiares: a** las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

VI. **Subprocuraduría Especializada:** a la Subprocuraduría Especializada de la Fiscalía General de Justicia en el Estado encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las acciones anteriores se llevarán a cabo a través del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada;

VII.- **Órgano Jurisdiccional:** al órgano jurisdiccional competente del fuero estatal en materia civil;

VIII. **Persona Desaparecida:** a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; y

IX. **Reporte:** a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición de una persona.

Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley se rigen por los principios siguientes:

I. **Celeridad.** El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia deberá atender los plazos señalados por esta Ley y evitar cualquier tipo de retrasos indebidos o injustificados. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia no podrá exceder los seis meses sin que exista una resolución de Declaración Especial de Ausencia por parte del Órgano Jurisdiccional.

11. Enfoque Diferencial y Especializado. Las autoridades que apliquen esta Ley están obligadas, en el respectivo ámbito de sus competencias, a brindar una atención especializada, garantías especiales y medidas de protección a los grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Entre los grupos antes señalados, están considerados como expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de comunidades

indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

111. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite relacionado con la Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos para los Familiares y demás personas previstas en esta Ley.

Asimismo, el Poder Judicial del Estado y las autoridades competentes que participen en los actos y procesos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia, deberán erogar los costos relacionados con su trámite, incluso los que se generen después de emitida la resolución.

IV. Igualdad y No Discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de la Persona Desparecida y sus Familiares, en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia actuarán sin distinción, exclusión o restricción motivada por origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

V. Inmediatez. A partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia, el órgano Jurisdiccional que conocerá del procedimiento deberá estar en contacto directo con quien haga la solicitud y los Familiares.

VI. Interés superior de la niñez. En el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia se deberá, en todo momento, proteger y atender, de manera primordial, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar por que la protección que se les brinde sea armónica e integral, considerando su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León y demás legislación aplicable, del ámbito estatal.

VII. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia. El Órgano Jurisdiccional que conozca de un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los planteamientos consignados en la solicitud.

VIII. Perspectiva de Género. Todas las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, deben garantizar un trato igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su actuación deberá realizarse libre cie prajuk;ios, estereotipos y de cualquier otro elemento que propicien situaciones de desventaja, discriminación o violencia contra las mujeres.

IX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento deben presumir que la Persona Desaparecida está con vida.

Artículo 5.- Los Familiares y personas autorizadas por la ley que tengan abierta una investigación en la Subprocuraduría Especializada podrán optar por presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia ante el Órgano Jurisdiccional, en los términos que prevé esta Ley.

Artículo 6.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia expedida por un Órgano Jurisdiccional competente.

La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigibles ante cualquier autoridad estatal; así como ante los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de las Personas Desaparecidas o sus Familiares, en términos de esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SOLICITUD

Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de prelación entre los solicitantes:

I.- Los Familiares;

II.- La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable;

III-. Las personas que funjan como representantes legales de los Familiares;

IV.- La Subprocuraduría Especializada a solicitud de los Familiares; y

V. El Asesor Jurídico, quien, además, dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la resolución.

Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Artículo 9.- El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada, la Comisión Ejecutiva Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda tienen la obligación de informar del procedimiento y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia a los Familiares o sus representantes legales; así como a la o las personas que tengan una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida.

El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada podrá solicitar, a petición de los Familiares u otras personas legitimadas por la presente Ley, al Órgano Jurisdiccional que se inicie el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en su caso, que ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos de la Persona Desaparecida y de sus Familiares.

La solicitud que haga el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada deberá considerar la información que se encuentre en posesión de otras autoridades, con el fin de contar con elementos particulares de los Familiares, de conformidad con el principio de Enfoque Diferencial y Especializado.

Artículo 10.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la siguiente información:

I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la Persona Desaparecida y sus datos generales;

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida;

III. La denuncia presentada al Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada o del reporte a la Comisión Estatal de Búsqueda, en donde se narren los hechos de la desaparición;

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de esta información;

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y domicilio de su fuente de trabajo y, si los hubiere, datos del régimen de seguridad social al que pertenezca la Persona Desaparecida;

VII. Los bienes o derechos de la Persona Desaparecida que desean ser protegidos o ejercidos;

VIII. Los efectos que se pretenden respecto de la Declaración Especial de Ausencia en los términos del artículo 21 de esta ley;

Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Órgano Jurisdiccional para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, y

Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los efectos de la Declaración Especial de Ausencia.

Tratándose de la fracción VIII de este artículo, el Órgano Jurisdiccional no podrá interpretar que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia que se emitan tendrán exclusivamente el sentido en que fue solicitado.

Artículo 11.- Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia pertenezca a una comunidad indígena o sea extranjera y no hable el idioma español, se proporcionará, de oficio, una persona traductora o interprete para todo acto en el que tenga que intervenir.

Artículo 12.- Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse sobre una Persona Desaparecida que sea migrante, se aplicará lo dispuesto por la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Artículo 13.- Al iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de una persona que tenga condición extranjera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la obligación de informar de la solicitud presentada a la embajada, consulado o agragaduría del país de origen de la persona desaparecida.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 14.- El Órgano Jurisdiccional que reciba la solicitud deberá admitirla en un lapso no mayor a cinco días naturales y verificar la información que le sea presentada. Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Jurisdiccional, a fin de que este solicite, de manera oficiosa, la información a la autoridad, dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su poder; quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles para remitirla, contados a partir de que reciba el requerimiento.

Artículo 15.- El Órgano Jurisdiccional podrá requerir al Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva Estatal que le remitan información pertinente que obre en sus expedientes, en copia certificada, para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban el requerimiento, para remitirla al Órgano Jurisdiccional.

Artículo 16.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desparecida y a sus Familiares, el Órgano Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de que la solicitud haya sido presentada.

Dichas medidas versarán sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas necesidades específicas que advierta de la revisión de la solicitud y la información que le remitan las autoridades, particularmente la Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 17.- El Órgano Jurisdiccional dispondrá que se publiquen gratuitamente, los edictos en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se deberán publicar los avisos en la página electrónica del Poder Judicial del Estado y en la de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres ocasiones, con intervalo de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia correspondiente.

Artículo 18.- Transcurridos quince días desde la fecha de la última publicación de los edictos y si no hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional resolverá, en forma definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia.

Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional no podrá resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la persona y hacerse llegar de la información o de las pruebas que crea oportunas para tal efecto.

Artículo 19.-La resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte negando la Declaración Especial de Ausencia podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de apelación, de conformidad con las disposiciones aplicables. De igual manera, las personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus derechos o necesidades.

Artículo 20.-La resolución que dicte del Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración Especial de Ausencia incluirá los efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la Persona Desparecida y los Familiares.

El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaría del juzgado o su equivalente, la emisión de la certificación correspondiente, a fin de que se haga la inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles y se ordenará que la Declaración Especial de Ausencia se publique de manera gratuita, en el Periódico Oficial del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, así como en la de la Comisión Estatal de Búsqueda

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS EFECTOS

21.-La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

I. El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad, a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad, en términos de la legislación civil aplicable;

IV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;

V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desapar cida;

VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen;

VII. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;

VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la Persona Desaparecida;

X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;

XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria.

XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia;

XIV. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso; y

Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de derechos de las víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos de la presente Ley.

Artículo 22.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su similar de la Constitución Política del Estado, de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en los que el Estado mexicano sea parte, así como del interés superior de la niñez; tomando siempre en cuenta la norma que más beneficie a la Persona Desparecida y a los Familiares.

La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

Artículo 23.- El Órgano Jurisdiccional dispondrá que la o el cónyuge o la concubina o concubinario, así como las personas ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el tercer grado, nombren de común acuerdo al representante legal. En el caso de inconformidad respecto a dicho nombramiento o de no existir acuerdo unánime, el Órgano Jurisdiccional elegirá entre éstas a la persona que le parezca más apta para desempeñar dicho cargo.

La persona designada como representante legal no recibirá remuneración económica por el desempeño de dicho cargo.

Artículo 24.-El representante legal de la Persona Desaparecida actuará conforme a las reglas del albacea en términos del Código Civil del Estado y estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la persona de cuya Declaración Especial de Ausencia se trate.

Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a los Familiares de la Persona Desaparecida de los recursos económicos necesarios para su digna subsistencia, rindiendo un informe mensual al Órgano Jurisdiccional que haya dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como a los Familiares.

En caso de que la Persona Desaparecida sea localizada con vida, el aludido representante legal le rendirá cuentas de su administración desde el momento en que tomó el encargo, ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

Artículo 25.-El cargo de representante legal concluye:

I. Con la localización con vida de la Persona Desparecida;

II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal al Órgano Jurisdiccional que emitió la Declaración Especial de Ausencia para que, en términos del artículo 23 de la esta Ley, nombre un nuevo representante legal;

III. Con la certeza de la muerte de la Persona Desaparecida; o

IV. Con la resolución, posterior a la Declaración Especial de Ausencia, que declare presuntamente muerta a la Persona Desaparecida.

Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la Persona Desparecida en los siguientes términos:

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto que la víctima fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su centro de trabajo antes de la desaparición;

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable;

III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; y

IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas.

La medida de protección prevista en la fracción 1 del presente artículo se mantendrá hasta por cinco años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. Por lo que hace a lo previsto en las demás fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de la Persona Desaparecida.

Por lo que hace a las fracciones 111 y IV del presente artículo el Estado será el encargado e garantizar que dichas protecciones continúen, en términos de la legislación aplicable.

Si la Persona Desaparecida laboraba al servicio del Estado, la Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales en el mismo sentido que establece este artículo hasta su localización con o sin vida.

Artículo 27.-Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la Persona Desparecida surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida.

Artículo.- 28.-Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la Declaración Especial de Ausencia, el representante legal, a petición de los Familiares u otra persona legitimada por la ley, podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional la venta judicial de los bienes de la Persona Desaparecida, observando las disposiciones aplicables para las ventas judiciales.

El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que en la venta judicial se lleve a cabo bajo el principio de presunción de vida, así como del interés superior de la niñez.

Artículo 29.-Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia corresponda a un ejidatario o comunero, el Órgano Jurisdiccional lo deberá de tomar en cuenta en su

resolución, a fin de que sus derechos ejidales o comuneros sean ejercidos en términos de la Ley Agraria por sus Familiares.

Artículo 30.-Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió una Declaración Especial de Ausencia fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de existir indicios de que la persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su desaparición.

Artículo 31.- En el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción de muerte o de una declaratoria por ausencia, conforme al Código Civil del Estado o bien, de aquellas que se encuentren pendientes de inscripción, a solicitud de quien tenga interés legítimo, estas podrán ser tramitadas como Declaración Especial de Ausencia, en los términos de la presente Ley.

De acreditarse tal supuesto, el Órgano Jurisdiccional que hubiese decretado la presunción de muerte o de ausencia, será el competente para realizar el cambio de la situación jurídica sin más trámite dilatorio que el previsto en términos de esta Ley.

Artículo 32.-La resolución de Declaración Especial de Ausencia no eximirá a las autoridades competentes, de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la Persona Desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

Artículo 33.- La autoridad o la persona que tenga conocimiento del incumplimiento a lo establecido en la presente Ley, dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La "presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado dispondrá de un plazo hasta de noventa días posteriores a la publicación del presente decreto, para adecuar la legislación estatal a los disposiciones del presente decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

13:59hrs

24 SEP 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

384

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández,** [redacted] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 110, 111, 112, 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleoneses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.

- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

> ***Artículo 24.*** *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*
>
> ***Articulo 108.*** *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo…*
>
> ***Articulo 67.*** *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*
>
> > *X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones…. Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas…*
>
> ***Artículo 51.*** *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*
>
> ***Articulo 53.*** *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*
>
> ***Articulo 54.*** *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*
>
> ***Articulo 56.*** *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones…*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

> *"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."*
>
> *"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan*

actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la "baja por caducidad" de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente12791/LXXV, presentada en sesión el07 de agosto del 2019, turnada a las comisión de JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2019 , Expediente: 12791/LXXV,

PROMOVENTE: DIP. FÉLIX ROCHA ESQUIVEL,INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
ASUNTO RELACIONADO: SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 110, 111, 112, 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 07 de agosto del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la creación de los Sistemas Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, creados con las reformas a la Constitución Federal y Estatal respectivamente, fue necesario expedir la legislación secundaria que regulara dichos sistemas.
En efecto, la génesis del Sistema Nacional Anticorrupción surgió de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015.

Posteriormente, en fecha 18 de julio de 2016 se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudadde México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

También en la misma fecha, se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Así mismo, en fecha 14 de abril de 2017, fue modificada la Constitución

Política del Estado de Nuevo León, para establecer las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.

En fecha 6 de julio de 2017, fue expedida la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el Estado, la Federación, y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción.

En el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de junio de 2019 fue publicada la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, la cual tiene por objeto, en los términos señalados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determinar las competencias de las autoridades estatales y municipales, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, hechos de corrupción o en situación especial, así como los procedimientos para su aplicación.

Con la expedición de esta última Ley, se derogó gran parte del articulado de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, sobre todo en lo referente a las faltas administrativas de los servidores públicos y el correspondiente procedimiento para su sanción; disposiciones que ya se regulan de una forma más exhaustiva en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

Por tal situación, se considera apropiado expedir una nueva Ley, en la cual sólo se regule lo concerniente a la responsabilidad política de los servidores públicos y algunos aspectos del procedimiento penal cuando los mismos cometan un delito, de tal forma que se reglamentarían los artículos 11O, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado, depurando de esta forma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, la cual se abrogaría.

Cabe destacar que en esta nueva Ley que se propone, se rescata la mayoría de las disposiciones vigentes en materia de juicio político, sólo se adaptan al nuevo marco jurídico.

De esta manera se estaría estableciendo la regulación que resulta necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

En base en lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación por parte de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 11O, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 110, 111, 112, 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en los artículos 11O, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley en materia de juicio político los servidores públicos que establece el artículo 11O de la Constitución Política del Estado y en materia de procedimiento penal los servidores públicos que dispone el artículo 112 de la misma Constitución.

Artículo 3. Para los efectos y aplicación de la presente Ley, son autoridades competentes:

I. El Congreso del Estado;
II. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, y
III. Los Jueces de la materia penal del Poder Judicial del Estado.

Artículo 4. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades de carácter administrativo, penal o civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 5. El Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, podrán emplear indistintamente los siguientes medios de apremio y correcciones disciplinarias:
I. Sanción económica de veinte hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. Auxilio de la fuerza pública, y
III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas en los términos de ley.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Artículo 6. En todo lo no previsto en esta Ley se observarán supletoriamente en lo aplicable las reglas que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en materia de notificaciones el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS SUJETOS Y CAUSAS DEL JUICIO POLÍTICO

Artículo 7. Son sujetos de Juicio Político los servidores públicos que se señalan en el Artículo 11O de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Artículo 8. Es procedente el Juicio Político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.

Artículo 9. Dañan gravemente los intereses públicos fundamentales:
I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de Gobierno republicano, representativo y popular del Estado, así como a la organización política y administrativa de los Municipios;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o las garantías sociales;

Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y demás normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, incluyendo los recursos
El ataque al ejercicio de sufragio;

La usurpación de atribuciones;

VII. Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus
Municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

Provocar en forma dolosa las causas de suspensión o desaparición de los Ayuntamientos o de suspensión o revocación de alguno de sus miembros, en los términos de la Ley de Gobierno Municipal; o
Las demás disposiciones que sean causal de responsabilidad política que se establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución Política del Estado o en las leyes del Estado.
No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.
Artículo 10. Igualmente, procede el Juicio Político contra el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, Consejeros de la Judicatura del Estado por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en los términos del Artículo 11O de la propia Constitución Federal.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO Y SANCIONES EN EL JUICIO POLÍTICO

Artículo 11. Se concede acción popular para formular por escrito denuncias ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley, las cuales deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y fundarse en elementos de prueba que hagan presumir la ilicitud de la conducta del servidor público. Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal al denunciante, para que los satisfaga en un plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la denuncia.
El ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, será responsable en los términos que establecen las leyes respectivas

Artículo 12. El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, o después de transcurrido un año de la conclusión de sus funciones. Las sanciones correspondientes consistirán en la destitución del servidor público e inhabilitación temporal de veinte a cuarenta años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, o sólo inhabilitación si el servidor público ya hubiere concluido su cargo.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal.

Artículo 13. Corresponde. al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano investigador y de acusación, y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungir como jurado de sentencia.

Artículo 14. El Congreso del Estado substanciará el procedimiento del Juicio Político por conducto de la Comisión Jurisdiccional, la cual se integrará y funcionará de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Artículo 15. Presentada la denuncia ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, ésta se turnará con la documentación que la acompañe al Pleno del Congreso o a la Diputación Permanente, para que el Presidente de la turne a la Comisión Anticorrupción.

La Comisión Anticorrupción, determinará mediante dictamen:
I. Si el denunciado es servidor público en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política del Estado;
II. Si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos fundamentales; y

III. Si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
Artículo 16. Si la denuncia no satisface los requisitos señalados en las tres fracciones del Artículo 15, la Comisión Anticorrupción emitirá un dictamen en el que se establezca la improcedencia de la denuncia. El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su resolución, en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha de
remisión.

Si la Comisión Anticorrupción resuelve que la denuncia es procedente, el Pleno del
Congreso en la misma sesión procederá acto seguido a integrar una Comisión Jurisdiccional, o bien, acordará que la misma Comisión

Anticorrupción funja durante el procedimiento como Comisión Jurisdiccional, la cual emplazará al denunciado para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga, compareciendo o informando por escrito a su elección ante la Comisión Jurisdiccional, el día y hora señalados en la propia notificación. En todo emplazamiento deberá correrse traslado al denunciado con copias de la denuncia y de los demás documentos que la integren.

El servidor público denunciado podrá nombrar un defensor que lo represente en todas las diligencias del procedimiento o en su defecto contará con un defensor del Instituto de Defensoría Pública del Estado que sea designado por su Director a solicitud de la Comisión Jurisdiccional.

Artículo 17. La Comisión Jurisdiccional, con vista de lo manifestado por el denunciado en su informe o comparecencia, practicará las diligencias e investigaciones necesarias y notificará al denunciante y al denunciado la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos ante la propia Comisión Jurisdiccional, la cual deberá desahogarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Lo anterior será aplicable en lo conducente, aún si el denunciado no manifiesta lo que a su derecho convenga dentro del término concedido para tal efecto.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Comisión Jurisdiccional emitirá el dictamen correspondiente.

Artículo 18. Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Jurisdiccional en su dictamen propondrá a la Asamblea se declare no ha lugar a proceder en contra del servidor público.

Artículo 19. Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión Jurisdiccional establecerá en su dictamen:

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado, y

II. La propuesta de sanción que deba imponerse.

Artículo 20. Emitido el dictamen fundado y motivado por la Comisión Jurisdiccional se convocará dentro de los dos días hábiles siguientes a la Asamblea del Congreso del Estado para la celebración de Sesión Plenaria, en la cual una vez analizado en audiencia el

dictamen y las constancias existentes, y escuchando al servidor público denunciado o a su defensor, el Pleno declarará por no menos de las dos terceras partes de sus miembros, si ha lugar a procedimiento ulterior.

Artículo 21. En. caso de que el Congreso del Estado declare que ha lugar a procedimiento ulterior, el acusado será puesto a disposición inmediata del

Tribunal Superior de Justicia, al que deberá remitirse el expediente que contenga la acusación y todas las constancias del procedimiento. La Comisión Jurisdiccional continuará el procedimiento correspondiente ante el propio Tribunal.

Lo señalado en el presente artículo será aplicable si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace la declaratoria correspondiente, en los términos del Artículo 11O de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los servidores públicos y por las causas a que se refiere el Artículo 1O de esta Ley.

Artículo 22. El Tribunal Superior de Justicia, una vez recibido el expediente y dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, dictará el auto de radicación correspondiente y lo notificará personalmente o por oficio a la Comisión Jurisdiccional y al acusado, para que en el término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 23. Transcurrido el término señalado en el artículo anterior y dentro de los diez días hábiles siguientes, el Tribunal Superior de Justicia en Pleno erigido en Jurado de

Sentencia, dictará por mayoría absoluta de votos resolución absolutoria o condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente.

Si la resolución del Tribunal es absolutoria se denegará la declaración de inhabilitación y/o destitución.

Artículo 24. Si la resolución del Tribunal es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas por un período de veinte hasta cuarenta años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.

La resolución se notificará personalmente o por oficio al acusado y se comunicará al Congreso del Estado para su publicación en el Periódico Oficial.

Artículo 25. Toda resolución del Tribunal que establezca que la denuncia fue producida con falsedad, deberá condenar al denunciante, cuando éste sea un particular, a cubrir los honorarios y gastos ocasionados por gestiones, pruebas y actuaciones a cargo del denunciado.

Artículo 26. Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en materia de juicio político son inatacables.

Artículo 27. El Congreso del Estado o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, no podrán erigirse en órgano de acusación o jurado de sentencia, respectivamente, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público ha sido citado.

Artículo 28. No votarán los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público. Tampoco podrán hacerlo los Diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercerlo.

Artículo 29. En el Juicio Político los acuerdos y determinaciones del Congreso del Estado o del Tribunal Superior de Justicia, se tomarán en sesión pública.

Artículo 30. El Congreso del Estado o la Comisión Jurisdiccional, para el debido cumplimiento de sus atribuciones y para hacer respetar sus determinaciones, podrá emplear los medios de apremio señalados en esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva.

Artículo 31. Las declaraciones o resoluciones dictadas por el Congreso del Estado y por el Tribunal Superior de Justicia, se comunicarán al Ejecutivo del Estado para efecto de su

publicación en su caso, en el Periódico Oficial del Estado; al

servidor público o a quien hubiere hecho la acusación y, en su caso, se harán también del conocimiento del órgano público al que pertenezca el acusado.
De igual forma se comunicarán a la Secretaría Contraloría y Transparencia Gubernamental, o la que ejerza sus funciones si cambia de denominación, a efecto de su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados.
Artículo 32. En el caso de las declaratorias a que hacen referencia los Artículos 11O y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplicarán en lo conducente las disposiciones previstas en este Título.

TÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PENAL
CAPÍTULO

ÚNICO

Artículo 33. En el supuesto de que un servidor público de los que se enuncian en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, fuere sometido a procedimiento penal por la presunta comisión de un delito, se estará a las bases que el mismo artículo establece y en los artículos 113 y 114 de la misma.

Artículo 34. Durante el proceso penal el servidor público acusado podrá seguir en su encargo, salvo que se le imponga una medida cautelar consistente en privación, restricción o limitación de la libertad, en términos del párrafo segundo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado. En caso de dictarse la privación de la libertad, el Juez de la causa resolverá que el acusado ha sido acreedor a la medida cautelar respectiva y por consecuencia determinará su separación temporal del cargo mientras subsiste la medida cautelar.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de enero de 1997 y sus reformas.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

[redacted]

C. Felipe Enríquez Hernández

[redacted]

13:51hrs